

Yo protesto



La Voz de Galicia

Presidente Santiago Rey Fernández-Latorre

Director general Lois Blanco Penas

Secretario general Manuel Areán Lalín

Director Xosé Luís Vilela Conde

Diseño Manuela Mariño Mariño

Edita La Voz de Galicia S.A.

Depósito legal C 51-2016

BIBLIOTECA GALLEGA

Yo protesto

Santiago Rey Fernández-Latorre

Selección de artículos editoriales
y discursos del Presidente
de La Voz de Galicia





Santiago Rey Fernández-Latorre

(A Coruña, 1938) es propietario y presidente de la Corporación Voz de Galicia, el primer grupo de comunicación de la comunidad autónoma, que engloba el periódico La Voz de Galicia, la sociedad Medios Audiovisuales de Galicia —integrada por la cadena Radio Voz, la productora Voz Audiovisual y el canal de TDT V Televisión—, el instituto

demoscópico Sondaxe, la sociedad de contenidos digitales Canal Voz, la Distribuidora Gallega de Publicaciones y Galicia Editorial, la planta de impresión más avanzada y con mayor capacidad de la comunidad gallega. Todas son empresas vinculadas al sector de la comunicación, en consonancia con la lógica de Santiago Rey, que, como editor, siempre ha evitado gestionar intereses que pudieran colisionar con la independencia informativa o amenazarla.

Licenciado en Derecho, Santiago Rey accedió en 1963 a la gerencia del rotativo La Voz de Galicia, empresa raíz de la Corporación, fundado en 1882 por su abuelo Juan Fernández Latorre. Fue luego consejero delegado hasta 1988, año en el que accedió a la presidencia ejecutiva. Bajo su mandato, el periódico, actualmente el de mayor difusión de Galicia y el cuarto de información general en España, vivió su gran expansión: acometió una total renovación técnica, superó los 100.000 ejemplares de difusión diaria, creó el sistema de ediciones que da cobertura a toda Galicia e inauguró (1992) el edificio inteligente que alberga la planta de impresión de Sabón (Arteixo-A Coruña). Hoy, más de medio millón de personas leen diariamente La Voz, según la última ola del Estudio General de Medios del 2015, y su edición digital —www.lavozdeg Galicia.es— rebasó los 8,5 millones de usuarios mensuales en diciembre del 2015.

El crecimiento del diario ha permitido que el compromiso fundacional de La Voz en favor de la democracia, la dignidad humana, la justicia social y los intereses de Galicia se mantenga más vigente que nunca. La constante lucha del editor por convertir el periódico en un elemento de cohesión y vertebración de la sociedad y en la plaza pública en la que pueda expresar sus inquietudes,

debata sus problemas y conozca su realidad, le ha sido reconocida con diversas distinciones, entre las que destacan las de doctor *honoris causa* por las universidades de A Coruña (2002) y de León (2006); la Medalla de Oro de Galicia (2005) y la Medalla de Oro del Colegio de Médicos de A Coruña (2011); la medalla de oro y brillantes de la Fundación Barrié de la Maza (2007); Hijo Predilecto de A Coruña y de la provincia de A Coruña; Hijo Adoptivo de Ferrol, Muxía y Ortigueira y la Gran Cruz del Mérito Civil (1986).

Santiago Rey renovó en el 2001 la Fundación que lleva su nombre, con el fin de dar continuidad a la propiedad y a la línea editorial de La Voz de Galicia y su grupo de empresas. La Fundación desarrolla, además, programas educativos relacionados principalmente con la comunicación, en todas las formas posibles y en los diversos niveles de enseñanza, incluida la formación para profesionales de la comunicación o de la educación. De forma complementaria, trabaja en el estudio, investigación y defensa de los medios en Galicia, según indican sus estatutos. La Fundación Santiago Rey promueve los programas de educación Voz Natura y Prensa-Escuela; convoca los premios Fernández Latorre, y organiza másteres y cursos en comunicación periodística y audiovisual. Además, se responsabiliza del Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, que reúne cerca de 5.000 publicaciones, algunas de ellas con cinco siglos de antigüedad, y maquinaria de artes gráficas de todos los tiempos.

A Santiago Rey se le debe también la potenciación de la Biblioteca Gallega, que ha recuperado autores de la talla de Manuel Murguía o Eladio Rodríguez. Lanzó una iniciativa pareja, la Biblioteca 120, con motivo del 120 aniversario de La Voz, que llevó hasta los hogares gallegos siete millones de libros con los principales autores y títulos de la literatura gallega.

La actividad profesional de Santiago Rey ha estado siempre vinculada al mundo de la comunicación. Fue presidente del Instituto Internacional de Prensa (IPI), fundó y presidió la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), Antena 3 Galicia y el Grupo Cable. También promovió y fue consejero de la agencia de noticias Colpisa, las compañías Antena 3 TV y Antena 3 Radio y puso en marcha, y la presidió desde 1987 a 1995, la empresa TESA (Taller de Editores), que publica *El Semanal*.

El compromiso social de un editor

Por Roberto L. Blanco Valdés

¿Cuándo se inició *todo esto*? ¿Cómo comenzó? El mundo en que vivimos avanza a tal velocidad —la gran noticia de hoy cae con frecuencia en el olvido al día siguiente— que resulta muy difícil reconocer que los múltiples desafíos a los que aun ahora nos estamos enfrentando, y muy especialmente los generados por una crisis económica brutal que pronto dejó profundas huellas en la vida política y social, tuvieron un principio y unas causas, aunque muchos ya no las recuerden. Sí, *todo esto* no apareció de la noche a la mañana, sino que creció y creció a lo largo de un trágico proceso en el que se produjeron no pocos avisos de la propia realidad, aunque fueran, sorprendentemente, muchos menos los líderes sociales que tuvieron el coraje de lanzar las alertas oportunas sobre lo que, de no tomar pronto medidas de remedio, acabaría por venírse nos encima, tal y como sucedió. Este libro, que únicamente por la generosidad y el afecto de su autor tengo ahora el honor de prologar, constituye una prueba irrefutable de lo que acaba de apuntarse: es por ello un libro para recordar, pues constituye un inventario razonado de los retos y descalabros que nos han llevado a la presente situación, muy útil para que hagan memoria los desmemoriados y para que quede en evidencia que hubo quien no guardó silencio cuando tantos se agazaparon tras el seguro y confortable parapeto de mantener la boca cerrada a cal y canto, que hubo quien denunció el desastre que estábamos labrando, cuando tal denuncia resultaba imprescindible, mientras tantos, por cobar-

día o necesidad, se negaron en redondo a ver lo que pasaba, quizá con la vana esperanza de que así no los atraparía la galerna.

En *Yo protesto* reúne Santiago Rey un conjunto de artículos editoriales y discursos —los pronunciados anualmente con motivo de la entrega del Premio Fernández Latorre— que vieron la luz en La Voz de Galicia entre los años 2004 y 2015. Editor del que es hoy, gracias sobre todo a su labor y a la de los excelentes equipos humanos de los que ha sabido rodearse, el cuarto periódico de España, Santiago Rey concibe su función mucho más como la de un periodista que como la de un mero empresario de la comunicación. Mi madre, que disfrutó de tocar el piano como de pocas cosas en su vida, nos llamaba con frecuencia la atención sobre el hecho de que a los pianistas se les cambia la cara cuando se disponen ante el teclado a interpretar una partitura. Yo soy testigo de ese mismo cambio en su expresión, cuando el autor de esta obra habla de todo lo que tiene que ver con la confección diaria del periódico del que durante tanto tiempo lleva siendo el editor. Él mismo lo subraya en estas páginas al destacar que, en aquella condición, está obligado a «recoger la voz de la calle, atender a su deseo extremo de que seamos la conciencia crítica del poder, sea cual sea este, desde las fuerzas políticas a los técnicos del Estado; de Hacienda a los ayuntamientos; de las federaciones y directivas del deporte al funcionamiento de la justicia o el de las entidades financieras. Cumpliendo mi deber de intentar ser notario de la verdad, quiero dar voz a lo que se dice en la calle». O al señalar, más adelante, que «un editor se equivoca si no se pone en el lugar del lector, si él mismo no es un lector. El lector, por definición, representa la quintaesencia del ciudadano: aquel que se informa, razona, forja criterio y participa».

Lo que late en realidad tras esa concepción del papel de un editor comprometido con su espacio y con su tiempo, en momentos en que otros no resistieron la tentación de utilizar los medios de comunicación social como simples grupos de presión para obtener beneficios de todo tipo en esferas que nada tienen que ver con la que resulta propia de la prensa, la radio o la televisión, es de hecho una precisa idea del papel fundamental

que a aquellos les compete en la buena salud de las sociedades democráticas: «Los periódicos, los medios de comunicación en general —podremos leer en las páginas que siguen— tienen que construir ese nuevo espacio abierto y desinteresado, de encuentro y conversación, donde todos puedan ocuparse de lo común. El Periodismo debe abrir un entorno de diálogo, no solo para los partidos o para aquellos grupos que por su capacidad económica u organizativa consiguen hacerse oír, sino también para dar voz a quien no dispone de esa fuerza, de modo que nadie quede excluido, marginado». Esa es la razón por la que —y es Santiago Rey quien sigue hablando— «el Periodismo ni es un mero negocio ni puede servir a intereses ajenos a la comunidad a la que atiende. Porque en ese caso, cuando las noticias se convierten en piedras contra el enemigo ideológico o en mera mercancía, los efectos no tardan en percibirse y se llaman así: mentira, engaño, intolerancia, segregación, crispación, enfrentamiento, extremismo y, finalmente, violencia física. El periodismo tiene que ser negocio, precisamente para asegurar su independencia, pero no solo negocio. Porque si solo es negocio, ¿qué hacemos? ¿Claudicamos ante las noticias ruidosas y estridentes, fáciles para el consumo ligero y carentes de importancia, pero que reportan audiencias masivas? ¿O nos arriesgamos a dar espacio y profundidad a las noticias verdaderamente importantes?». El periódico y sus editores concebidos, en fin, por nuestro autor, como «notarios de la realidad».

Notarios a los que, ciertamente, corresponde dar fe pública a diario y ante cientos de miles de lectores, con veracidad y con rigor, de lo que sucede en su entorno respectivo, que, en el caso que ahora nos ocupa, se centra en tres espacios: Galicia, España toda y la Unión Europea, a la que ambas pertenecen. Uno tras otro van entrando progresivamente en las páginas del libro, del mismo modo que va aumentando su interrelación indiscutible como consecuencia de la crisis económica y política, por virtud de la cual esos tres espacios acaban por convertirse poco a poco en uno solo «a medida que nos toca vivir en Galicia, en España y en la propia Unión Europea, la confusión, el desánimo, la desafección y la rabia [que] han hecho presa en el alma colectiva».

Recupera así Santiago Rey el anhelo que marcó un día el afán de sus mayores, cuando crearon un diario —lo he dicho muchas veces— sin cuya presencia Galicia no existiría hoy como entidad colectiva en el ámbito político y social más allá de localismos estériles y ridículos provincianismos: «Nuestra primera y más ardiente preocupación será la de servir con todo el entusiasmo de nuestra alma, y con toda la energía de nuestro patriotismo, los grandes y nobles y desdeñados intereses de esta hermosa y querida región gallega». Tales eran las palabras con las que, antes de proceder a enumerar una auténtica declaración de derechos, salía a la calle, el 4 de enero de 1882, el primer número de La Voz de Galicia, palabras que iban a ser hacia el futuro la verdadera divisa del diario del que hoy el autor de este libro es editor.

Resulta, por ello, perfectamente coherente que quien se formó en La Voz de Galicia como periodista, comenzando desde abajo hasta llegar a lo más alto, teniendo como horizonte fundamental el servicio a su país, nos ofrezca en este libro su visión más personal, inspiradora de la que, de hecho, como editor, ha ido transmitiendo, durante años, cada día que el periódico salía al encuentro de sus lectores, primero en papel y luego también en versión digital, formatos ambos en los que La Voz de Galicia adelanta en tirada y en lectores a todo el resto de la prensa que se edita en Galicia en su conjunto. Y por eso, igualmente, quien se adentre en las páginas del magnífico libro que tiene ahora entre las manos irá reconociendo sin esfuerzo el mundo de preocupaciones y problemas, de ansias y esperanzas, y también, ¿cómo no?, de decepciones e infortunios que hemos vivido —no en igual medida, es cierto, pero de forma general— en la última década, la que va de aquel éxito económico que, como el crecimiento de la bolsa norteamericana antes de 1929, parecía no tener ni límite ni fin, hasta el estallido de todas las burbujas y, entre ellas, además de las provocadas directamente por los sinvergüenzas y los pillos, la nacida de la falta de sentido común de una sociedad insólitamente dominada por una irresponsabilidad que ahora nos parece a todos tan difícil de creer. Así es como irán desfilando por los artículos editoriales y discursos de Santiago Rey un vastísimo listado de temas que se abordan siempre con

el coraje de quien no tiene pelos en la lengua... ni en la pluma. Muchos de ellos referidos a Galicia de un modo primordial: la cuestión central de las infraestructuras y, entre ellas, la interminable espera por un AVE cuya llegada se retrasa una y otra vez sin el más mínimo recato; la pérdida de tejido empresarial y financiero, según se pone de relieve con la desaparición de las cajas de ahorros y la absorción del Banco Pastor por el Banco Popular; el gravísimo problema demográfico, con el que Galicia se juega en gran medida su futuro; el despilfarro en lo innecesario —esa Ciudad de la Cultura a la que nadie sabe encontrarle utilidad después de haber hundido en ella varios cientos de millones de euros— frente al racaneo en lo imprescindible; el localismo, que amenaza la existencia de un auténtico proyecto de país; las dificultades de un pequeño comercio tan decisivo para el empleo como para la prestación de los servicios; el fraude de aquel Plan Galicia que se quedó en gran medida en agua de borrajas; o, *last but not least*, la trágica falta de consenso sobre la necesidad de conservar, como patrimonio común, las dos lenguas de Galicia. Junto a todos esos problemas, que no solo se mencionan sino que se analizan en sus múltiples perfiles, conforman la línea argumental que se desarrolla en esta obra otras muchas cuestiones que afectan a España en su conjunto y, más en general, a no pocos Estados de la UE: la crisis económica, por supuesto y ante todo, y el desempleo, que constituye, sin duda, su cara más dramática e injusta; la corrupción política; la desafección, a la que Santiago Rey se refiere, con razón, como «el huevo de la serpiente»; los peligros de ruptura social que se derivan de la polarización de la vida política y la irrupción con fuerza en ella de populismos demagógicos; el desprestigio de las instituciones, que afectó incluso a la Corona que solo logró salir indemne gracias a una imprevista sucesión; el egoísmo sindical; el «veneno» del secesionismo catalán, que empuja a un pueblo «a rebelarse contra cuarenta millones de españoles que se han distinguido siempre por llevar la solidaridad instalada en el alma y dispuesta permanentemente en la nómina»; y, en fin, y como desventurado resumen de todo ello, la descomposición social.

Quedará así meridianamente claro algo que me parece

de simple justicia subrayar: que, al insistir en algunos de los más graves desafíos que han venido afectando a nuestro sistema político y social, Santiago Rey se anticipa en gran medida en el diagnóstico certero de lo que luego acabará por reconocerse de forma casi general. Sirva como ejemplo el discurso que pronunció en la entrega del Premio Fernández Latorre, concedido por la fundación que lleva su nombre, el 19 de noviembre del 2009, cuando el vendaval de las crisis económica y política apenas comenzaba: «Camino de los cuatro millones de parados y en serio riesgo de cerrar el año con un déficit público próximo al 10 %, los grandes partidos españoles se ensimisman en sus propias cuixas», afirmó entonces el editor de La Voz de Galicia en el marco del espléndido museo de prensa impulsado por él mismo, para añadir acto seguido: «El Gobierno improvisa parches que hasta ahora no dan fruto alguno. La oposición incumple su tarea de aportar una alternativa, sumida como está en su propio marasmo interno. Los cargos públicos, que deben ser ejemplares a la hora de respetar el marco que todos nos hemos dado, llegan al extremo de animar revueltas contra decisiones de las más altas magistraturas, como hemos visto en Cataluña, a la espera de la retrasadísima sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. El modelo de las 17 Administraciones se desboca, sin que nadie ponga coto a sus gastos incontrolados, y comienza a percibirse que ante un desafío de las dimensiones de la actual crisis es imprescindible actuar todos a una, lo que no ocurre».

Será por todo ello por lo que, entre otras cosas, protesta nuestro autor, quien, sin embargo, y como corresponde a un dirigente social crítico, pero responsable, con el funcionamiento del sistema no se limita a hacer reproches: no, el *protestante* (si se me permite usar el término) hace mucho más que clavar sus acerados dardos en las puertas del templo de la política española, pues marca también con claridad algunos de los caminos que, a su juicio, podrían permitirnos salir del atolladero en el que España y los españoles tan alegremente se metieron. No sin antes centrar, en todo caso, su censura en torno a dos grandes líneas de reflexión. La primera, la relativa a las disfunciones que produce en España el mal funcionamiento de las organizaciones

partidistas. El autor reconocerá en esa esfera, claro está, y como no podría ser de otra manera, la decisiva importancia de los partidos para los sistemas democráticos («... si están libres de corrosivas adherencias, son la clave sobre la que se edifica la vida pública y el destino del Estado»), pero destacará también, al propio tiempo, la falta de reacción de los partidos tradicionales ante el tsunami descomunal que se nos ha venido encima, su esclerosis, los riesgos que conllevan los nuevos populismos, la baja calidad de nuestra vida partidista y, por ello, de la actuación parlamentaria y, en suma, la peligrosísima confusión entre un legítimo adversario y un enemigo irreconciliable: «Si construyésemos puentes, en lugar de levantar barreras [...] no habríamos permitido que algunos que se llaman políticos confundan la plaza pública con un campo de batalla, y vean al que piensa distinto como el enemigo al que hay que aniquilar. También habríamos desterrado los localismos, esa forma de esterilidad colectiva contra la que nos revolvemos siempre. Y, desde luego, no echaríamos en falta la acción de los poderes públicos para acabar con los derroches insostenibles de todas las Administraciones, tantas veces puestos en evidencia y tantas veces ignorados por sus responsables».

Será justamente la reflexión relativa a la grave injusticia que, desde el estallido en el año 2008 de la crisis económica, ha producido el contraste entre tales derroches y los sacrificios que se han venido exigiendo a la población española, la segunda de las líneas generales de pensamiento en las que Santiago Rey centra su atención. Y es que, según el lector podrá comprobar cumplidamente, su preocupación por el hecho de que tales sacrificios para salir de la recesión no hayan tenido justa correspondencia en las reformas administrativas y políticas que este país necesitaba y necesita recorre de punta a cabo todo el libro. Sirva, como muestra de ello, este botón: «Si en España se acometiese una reforma racional de la Administración, todo ese dinero que se esquilma al contribuyente para atender la usura de la deuda financiera podría ahorrarse sin que el servicio al ciudadano se resintiese en nada. Pero ese paso, tantas veces reclamado desde esta tribuna, parece aún muy lejos de darse». Un botón que

ha de complementarse con otro no menos significativo: «Si de verdad se hubiese trabajado en la clarificación y simplificación de las Administraciones, haciéndolas complementarias, no solo se habría evitado un gasto inasumible, sino que se habría construido una función pública propia del siglo XXI. Solo la inacción, la falta de miras o los intereses electoralistas pueden explicar que se haya impuesto tan lenta velocidad de crucero en este capítulo de verdadero cambio estructural del país».

Esta notable claridad del autor en los objetivos de país que deberíamos perseguir en un esfuerzo hecho al alimón por la clase política y quienes la sostienen con sus impuestos y sus votos culmina con los dos grandes llamamientos que el editor de La Voz de Galicia ha realizado desde las páginas de aquella cada vez que ha tomado la pluma para escribir un artículo editorial o uno de los discursos de los que queda constancia en este libro. Por eso, y para ir dando cierre ya a este prólogo, insistiré finalmente en esos llamamientos, no sin subrayar previamente, en todo caso, la decisiva importancia que le concede nuestro autor a tres esferas esenciales del Estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución: una adecuada Administración de Justicia, que «ejerce su función cuando, en lugar de mirar para otro lado, pide explicaciones, registra dependencias y persigue los delitos»; la educación, «factor decisivo de la nueva economía y del peculiar mercado de trabajo que ha generado»; y la investigación científica, cuya contracción presupuestaria se ha traducido en «poner un puente de plata para que continúen fugándose a otros países los jóvenes que con tanto esfuerzo y dinero hemos formado en nuestras Universidades».

Pero volviendo ya a los llamamientos que acaban de citarse, el primero de los de Santiago Rey va dirigido a reclamar la unidad, social y política, para superar con bases sólidas el vendaval que ha azotado a nuestro país en los siete últimos años. Así, tras criticar acerbamente «la radical incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en asuntos elementales para el bienestar de todos», el autor defiende la improrrogable necesidad de la unidad: «Todos sabemos —también lo saben aquellos a los que no les interesa escucharlo— que urge actuar

y acometer una refundación inspirada en la cultura del consenso de la transición para lograr unas Administraciones eficientes. Una refundación que sitúe al ciudadano donde debe estar: en el centro de la acción política de un país que, además, sea capaz de ofrecer oportunidad a los millones de parados que hoy no las tienen y a las futuras generaciones. Pero para que todo eso pueda empezar, la agonía actual debe terminar o nos sepultará. Emprendamos la reconstrucción». Un objetivo ese para el que «no solo es preciso el coraje —si lo tuviese— del que gobierna. También es necesario el concurso de la oposición y de cuantos se sienten demócratas y comprometidos con su país. Si fue posible en tiempos de bonanza firmar el Pacto de Toledo, también debería serlo ahora afrontar la reforma más constructiva que requiere el país». Santiago Rey insiste en esa idea en uno de los últimos discursos que se recogen en este libro, el pronunciado ante el rey Felipe VI en el acto de entrega del Premio Fernández Latorre correspondiente al año 2015: «El respeto y el reconocimiento fueron las bases que nos permitieron construir la democracia, en la que vuestro padre, Majestad, tuvo tanta determinación y tanto acierto. Y aunque en estos días aparecen voces increíblemente desorientadas que quieren demoler aquel logro colectivo, todos los demócratas saben que es en la conciliación donde reside el esplendor. Refrendar la Constitución, hace casi 37 años, fue la mayor inversión en paz y futuro para España. Es cierto que con consenso todo es reformable, pero mientras tanto sigue siendo nuestra mejor garantía de convivencia. Y así debe ser defendida. Porque el respeto a las leyes y a las instituciones es la clave para apreciar el respeto que un pueblo tiene por sí mismo».

Esa apelación a la unidad política no podía ir, en cualquier caso, sino de la mano de un llamamiento a los propios españoles («El tiempo de la sociedad es AHORA», dice nuestro autor en uno de los textos que el lector se encontrará más adelante), españoles que son quienes, a fin de cuentas, deben hacerse cargo de la responsabilidad que les corresponde en la construcción de un mejor futuro colectivo: «Por eso vuelvo a reiterar que si queremos evitar una tragedia debe reaparecer la sociedad civil y se debe fraguar una acción concertada que sume los esfuerzos

de todos, sea cual sea su color, en favor del proyecto de Galicia. Entre tanto, no puedo, ni debo, ni quiero, tirar la toalla. Seguiré haciendo lo mismo que llevo haciendo toda mi vida, tratar de elaborar hoy el mejor periódico que jamás he hecho, pero sabiendo que mañana intentaré superarlo».

¿Qué nos ofrece, a la postre, Santiago Rey en *Yo protesto*? En esencia, un programa *regeneracionista* formulado desde posiciones inequívocamente democráticas, que se basa en tres principios esenciales: «Uno es la recuperación económica. Otro, la limpieza en la vida pública. Y el tercero, de importancia capital en este momento, la estabilidad y la convivencia en paz. Porque nunca desde la restauración democrática ha habido en España un peligro tan inminente de ruptura, de quiebra social, de antagonismo entre iguales». Objetivos, que seguro compartirán la inmensa mayoría de los cientos de miles de lectores de La Voz de Galicia y para cuya consecución plantea su editor exigencias que resultan absolutamente imprescindibles: «Se requiere —afirma Santiago Rey— la determinación de repensar el funcionamiento de la Administración y encauzarla hacia el dinamismo de la sociedad, en lugar de a coartar sus iniciativas. Y se requiere abandonar el debate pueril basado en el menosprecio del rival y concentrar algún esfuerzo en la búsqueda de consensos [...]. Se requiere, sobre todo, talla política y altura en los principios, que es lo que parece haber desaparecido de la escena. Quizá aún tengan una oportunidad para recuperar la confianza los que creen que es posible, sano y provechoso vivir sin burocracia, sin juego sucio, sin confrontaciones irrelevantes, sin corrupción. Sería otra España, sería otra Galicia. Pero serían aquella España y aquella Galicia donde queremos vivir. Donde tenemos derecho a vivir. Y a ello siempre aspiraremos».

Galicia y España, sus problemas, esfuerzos, fracasos y esperanzas: tal es el espacio territorial, político y social que explica el nervio conductor del libro que ahora se ofrece a los lectores, en donde queda patente no solo el coraje y el firme compromiso social de un editor, sino también la innegable capacidad de anticipación que ha demostrado a lo largo de estos años, para, como se afirma en el lenguaje coloquial, tratar de poner el parche an-

tes que el grano. Santiago Rey ha denunciado, con la libertad de quien solo aspira a ser lo que ya es, lo que se nos venía encima y ha actuado con una voluntad indoblegable y un gran sentido de la responsabilidad social para decirlo sin tapujos. Todo aquello que su autor afirma en este excelente testimonio de la crisis actual que es *Yo Protesto* puede decirse más alto, pero no más claro, desde luego. Han sido a la postre esa claridad y una defensa irrenunciable del pluralismo y la verdad las que han hecho de La Voz de Galicia un periódico absolutamente singular entre los que se editan en España y de su editor una *rara avis*, que piensa, mucho más que en él, en su país. Ese, aunque a voces, es el secreto de su éxito.

El compromiso de un título

13-10-2004. El debate del momento es el desfase entre las partidas de los Presupuestos del Estado destinadas al Plan Galicia y las demandas de inversión en ese proyecto. El presidente de La Voz afirma aquí que «el espíritu fundacional sigue impregnando la línea editorial del único periódico que puede considerarse plenamente gallego». Como el diario no responde a más obediencia ni vocación que la que expone todos los días en su título, reclama las infraestructuras que Galicia necesita «no como un favor, sino como un acto de justicia política».

Cuando en 1882 La Voz de Galicia publicó su primer ejemplar, esta empresa periodística expuso con toda claridad cuáles eran los principios fundacionales y qué contribución quería aportar a la sociedad gallega. Como el tiempo ha venido a demostrar, aquel editorial, recientemente rescatado de la hemeroteca, trazaba mucho más que un cúmulo de buenas intenciones.

Era un compromiso con la democracia y con el desarrollo de esta tierra. Costoso, como todos los que exigen esfuerzo y fatigas, pero gratificante, porque obedecía a la causa más noble que pueda plantearse un gallego amante de su tierra.

Varias generaciones después, el espíritu fundacional sigue impregnando la línea editorial del único periódico que puede considerarse plenamente gallego, tanto si se mide por el ámbito de difusión (toda Galicia sin excepciones), como si se observa la cobertura periodística (catorce redacciones en la comunidad), o si se repara en la propiedad.

Es importante tener esto en cuenta en un momento de sarpullido periodístico, en el que muchas cabeceras nacen y sobreviven ajenas a las leyes del mercado, sin lectores suficientes para hacerlas rentables, pero descaradamente apoyadas con desproporcionados fondos públicos que parecen sustraerse a los controles democráticos habituales.

En medio de ese intrincado panorama, La Voz, que mantiene a mil familias, no responde a más obediencia ni vocación que la que expone todos los días en su título. Convertido en el primer periódico regional de España, destacado entre los principales de la nación y consolidado como el

número uno del país gallego, tiene el deber de hacer honor a su cabecera. Es y quiere ser la voz de Galicia, con todo lo que eso significa en cuanto a pluralidad, apertura y altura de miras.

Fiel a ese principio, es evidente que La Voz no puede mirar hacia otro lado cuando se conculcan o se desprecian los intereses de Galicia. Lo demostró una vez más con ocasión del desastre del Prestige, y continúa corroborándolo con la reclamación de las grandes infraestructuras que precisa esta tierra.

Creo firmemente que Galicia no debe dar ya más la imagen tan deplorable del pedigüeño. Si algo sobra en nuestra historia es la vena plañidera que nos achacan por esas anticuadas referencias al «mexan por nós», a la «longa noite de pedra» o incluso a las modernas de la deuda histórica. Todos esos son tópicos que no resisten un análisis más allá del sentimentalismo y la demagogia. Lo que le corresponde a Galicia no es llorar, sino desarrollar sus potencialidades y competir en el duro entorno europeo. Y para ello son precisas las infraestructuras que demanda, no como un favor, sino como un acto de justicia política.

¿O acaso no hay que compensar a una tierra que ha visto cómo expropiaban sus fuentes de energía eléctrica, pisoteaban su primacía en la pesca europea, vaciaban la incipiente industria o dejaban languidecer la riqueza forestal y agropecuaria?

Ciertamente, el Plan Galicia ha tenido mucho de virtual. Nacido como un señuelo político para sacarse de encima las malas conciencias, nunca fue redactado, presupuestado ni dotado económicamente. Ni siquiera fue presentado o pactado en la Unión Europea. Pero sólo la

insistencia de los gallegos ante los políticos y gobiernos de uno y otro signo puede hacer que algún día sea realidad.

De hecho, la oferta que se anunció en el Consejo de Ministros de A Coruña es ya en sí misma bastante limitada. Ni la Transcantábrica dará servicio a las poblaciones de la costa norte, ni el Puerto Exterior nos pondrá a la cabeza de Europa —si se llega a hacer—, ni el AVE será tal. Incluso en La Voz de Galicia hemos caído en la trampa de llamar con semejante grandilocuencia a lo que consistirá, simplemente, en un tren ligeramente mejorado sobre el actual, que de ninguna manera circulará a 300 por hora —ni a la mitad de esa velocidad— por nuestro territorio.

Como tuvo ocasión de escuchar el presidente del Gobierno en una esclarecedora cena durante su última visita a Coruña, Galicia no puede permitirse el lujo de perder más oportunidades. La solidaridad interterritorial que ha practicado Europa no ha sido en absoluto aprovechada para potenciar el desarrollo, porque ni la Xunta, ni el anterior supuesto «gobierno amigo» ni el actual se han tomado en serio esta responsabilidad. Asistimos, sin embargo, a suntuosos despilfarros en obras desmesuradas, cuando no inútiles, e injustificables déficits de televisiones públicas que fomentan la telebasura, y al debilitamiento de voluntades.

Con parecida frivolidad se ha tratado el Plan Galicia. Unos prometieron, pero no ejecutaron ni financiaron. Otros es cierto que han hecho un esfuerzo presupuestario, pero insuficiente para garantizar el avance de las obras y el cumplimiento de los plazos. Y todos han empleado las ansias de mejora de nuestra tierra como un arma arrojadiza, que sin duda les permite influir en los votantes, pero no resuelve ninguno de los grandes retos a los que se enfren-

ta la sociedad. Prueba de ello es que cuando se cumplen dos años de la catástrofe del Prestige, las costas gallegas siguen igual de indefensas que entonces.

Mientras estos problemas se enroscan en una espiral sin fin ni soluciones, la vida pública gallega se enrarece con políticas de incienso y discusiones de minifundio. Lo decisivo para el futuro de Galicia no es si la Xunta cambiará de manos o continuará en las actuales. Suceda una u otra cosa, con unos u otros protagonistas, lo que se hace imprescindible es afrontar decididamente los retos que plantea el siglo XXI y empezar por fin a ponernos al día.

Ese es el único objetivo de La Voz. Como viene haciendo desde el primer día de su historia y como se propone hacer siempre, aunque ello lo indisponga con este o aquel Gobierno o con instituciones y entidades de todo tipo que se agazapan en la supuesta voluntad popular, pero se rebelan contra la transparencia y el control democrático. Sabemos que en este propósito no nos ha de faltar el apoyo que pedimos. El de los lectores. Que es el único que interesa a La Voz.

Sin plan para Galicia

13-02-2005. El editor de La Voz de Galicia recuerda la vigencia del artículo donde cuatro meses antes había denunciado el estancamiento del Plan Galicia. Dos años después de haber sido anunciado, solo se había licitado el 20 % de las obras. Menciona algunos hechos que sonaban a tomadura de pelo y que intensificaban una percepción que se difundía entre muchos ciudadanos: que el Gobierno pretendía esquivar los compromisos contraídos con Galicia. «¿Cuánto tiempo podremos continuar así?», se pregunta.

Solo tiene futuro quien dispone de un proyecto y de capacidad para luchar por él.

Esta convicción me arrastró a escribir el pasado octubre un artículo, *El compromiso de un título*, que denunciaba el estancamiento del llamado *Plan Galicia*. Decía entonces que «unos prometieron, pero no ejecutaron ni financiaron. Otros han hecho un esfuerzo presupuestario, pero insuficiente para garantizar el avance de las obras y el cumplimiento de los plazos. Y todos han empleado las ansias de mejora de nuestra tierra como un arma arrojadiza». Cuatro meses después esas palabras siguen vigentes.

El 24 de enero se cumplieron dos años del anuncio del Plan. Sólo este periódico hizo eco suficiente al aniversario y, además, con una mala noticia: hasta ese momento apenas se había licitado el 20% de las obras, por un importe de 2.093 millones, pero con una consignación presupuestaria para el 2005 muy inferior: 650 millones. De mantenerse este ritmo inversor, decíamos, el desarrollo íntegro del programa se demoraría, como mínimo, 17 años. Algo que nuestros lectores sabían también por *el cronómetro*, que marca desde hace dos años las horas buenas y las malas de lo que nos prometieron en el 2003.

El panorama se ensombrece con el paso de los días. Por una parte, el Gobierno central no acaba de asumir la financiación de las obras y las condiciona a los fondos europeos, olvidando que el compromiso con Galicia no es cosa de la UE. Por otra, tanto los fondos estructurales como los de cohesión están gravemente amenazados. Es casi seguro que dejaremos de percibir estos últimos a partir del próximo año.

El Estado es el garante del Plan y quien debe asumir la tarea de vertebrar España, con o sin fondos europeos. Sin embargo, no se están produciendo compromisos claros en esa dirección. Peor aun, la confusión sobre el mapa autonómico futuro es casi absoluta y lamentable, menos en un punto: menguará la ya mermada solidaridad territorial.

Tanto en el escenario europeo como en el autonómico, España parece ahora débil. Sin fondos, o con ellos muy disminuidos, y con menos recursos propios, ¿mantendrá el Gobierno un respaldo absoluto e inequívoco al Plan?

Declaraciones en tal sentido no faltan. Pero los hechos manifiestan con frecuencia otra cosa. Baste recordar el episodio reciente en torno a la autovía Ferrol-Vilalba, en el que Fomento quiso eludir el compromiso de financiarla íntegramente. O las contradicciones en torno a un tren cuyas características están muy lejos de lo que a día de hoy se entiende como alta velocidad. Hechos como estos, que suenan a tomadura de pelo, intensifican la percepción que se difunde entre muchos ciudadanos: que el Gobierno pretende esquivar los compromisos contraídos con Galicia.

Las noticias en torno a la posible participación de la financiación privada en el plan de infraestructuras resultan también desalentadoras: el diseño que patrocina la CEOE sólo contempla las zonas ricas, donde las inversiones pueden producir un retorno mayor y más seguro. Galicia está fuera del mapa una vez más.

En este paisaje cabría esperar una movilización política y social sin precedentes. Pero no. La inminencia de unos comicios tampoco ayuda. «Lo decisivo para el futuro de Galicia —escribí en octubre— no es si la Xunta cambiará de manos o continuará en las actuales. Lo imprescindible es

afrontar decididamente los retos que plantea el siglo XXI y empezar por fin a ponernos al día». Seguimos igual, en un sinfín de declaraciones partidistas, sin liderazgo y sin plan.

Es la hora de decir la verdad una vez más: parecemos un país sin proyecto —ni siquiera tenemos el que nos prometieron—, dividido en facciones políticas que sólo buscan su medro electoral o mantener el poder, que se pierden en acusaciones mutuas y son incapaces de llegar a un acuerdo sobre aquello que a todos los ciudadanos interesa: nuestro futuro. Tampoco se percibe en la sociedad civil aquella firme tensión que mostró en la tragedia del *Prestige*: falta una idea de Galicia, anegada en localismos paletos y en diminutos egoísmos y rivalidades mercantiles, mientras nuestros políticos se engañan y nos engañan, firman convenios y contratos de ficción, imposibles de ejecutar, mero papel mojado, porque nadie compromete los recursos necesarios, al tiempo que se continúan dilapidando las ayudas europeas y los ingresos procedentes de nuestros impuestos, también indirectos.

¿Cuánto tiempo podremos continuar así? Tenemos que conseguir que nuestra clase política se esfuerce por llegar a un gran pacto por Galicia antes de que se sumerja en la próxima vorágine electoral. Y si no se produce, habrá que buscar soluciones fuera de los ambientes políticos: entre la joven generación de dirigentes y emprendedores, en el aire libre y abierto de la sociedad que realmente hace y sufre Galicia.

Otra oportunidad perdida

24-09-2005. Galicia sufre un nuevo revés. Unión Fenosa, una empresa estratégica para la comunidad, cae en manos de inversores ajenos a esta tierra. Santiago Rey se pronuncia: «No podemos observar la compra cerrada por el presidente de ACS, con el apoyo de otros conocidos empresarios, como una operación más del libre mercado». Considera que la explotación de tantos recursos naturales ha de generar una reversión especial de riqueza en el territorio de donde se extraen.

El 2005 tampoco será un buen año para Galicia. Después de la catástrofe del *Prestige*, del Plan Galicia perdido en el laberinto de los ministerios, de las incertidumbres sobre las condiciones y los plazos del AVE, sufrimos un nuevo revés. Una empresa estratégica para esta comunidad, como es Unión Fenosa, cae en manos de inversores ajenos a esta tierra cuando podía haber vuelto a ser gestionada por capital gallego y de ese modo revertir en Galicia parte de los beneficios que en tan gran medida obtiene de ella. Y recibimos esta mala noticia el mismo día en que el Gobierno, olvidando su compromiso de solidaridad y reequilibrio, aprueba unos presupuestos en los que la inversión pública se distribuirá en proporción directa a la riqueza de cada territorio.

Desde el sentimiento gallego de La Voz de Galicia, desde la forma de sentir de los que vivimos, pagamos nuestros impuestos y centramos nuestras esperanzas en el progreso de esta comunidad autónoma, no se puede entender que el sector energético sea enajenado al capital gallego. Galicia no cuenta en la energía a pesar de lo que le ha sacrificado: tantos valles inundados por embalses, el curso de infinidad de ríos que podrían tener un extraordinario valor turístico, de ocio o paisajístico. A la producción de energía dedicamos también nuestros recursos mineros. Por su sostenimiento soportamos la pérdida de calidad de nuestra atmósfera. Más recientemente, con los parques eólicos, le ofrecemos las cumbres de montes interiores y costeros, restando posibilidades de uso a enclaves naturales de primer orden.

Por todo ello no podemos observar la compra cerrada por el presidente de ACS, con el apoyo de otros co-

nocidos empresarios, como una operación más del libre mercado. La explotación de tantos recursos naturales ha de generar una reversión especial de riqueza en el territorio del que se los extrae. Lo contrario es permitir que se repitan los usos absentistas del señorío gallego que en siglos pasados causaron el atraso económico y social de Galicia, por no llevar el análisis hasta encontrar en esta situación características propias del colonialismo.

La actuación de la Xunta de Galicia en un caso tan relevante como éste sugiere o bien falta de atención o bien escasa capacidad de influencia. El fin del intervencionismo no debe equivaler a que se descuiden los sectores estratégicos ni se niegue apoyo a iniciativas empresariales en esas áreas de actividad, aun cuando sean llevadas con alguna ingenuidad, como podría haber ocurrido en la venta de Fenosa. El futuro del empleo y de la actividad económica en Galicia no está para permitir que se pierdan más oportunidades.

Fenosa y Galicia

27-11-2005. Continúa la pugna entre Florentino Pérez (ACS) y un grupo de empresarios gallegos por el control de Fenosa. El objetivo de los segundos es recuperar la compañía para la comunidad, donde se genera el 30 % de la energía que distribuye Fenosa y donde tiene más de un millón de clientes. El presidente de La Voz constata el distanciamiento de la dirección de la empresa con respecto a Galicia y afirma que «las reestructuraciones empresariales deben orientarse a proyectos reales, que trasciendan el pelotazo y el mero interés personal de sus protagonistas. Sobre todo cuando hablamos de sectores estratégicos».

Se da por sentado que la opa de ACS sobre Fenosa responde a una disputa por el control de la compañía: de una parte, se dice, un grupo de empresarios gallegos y, de otra, la empresa cuyo protagonismo asume el minoritario Florentino Pérez. Nadie parece dudar de esto ni del resultado de la lucha: siempre negativo para los intereses de los gallegos y atribuible, según unos, a cierta ingenuidad; según otros, a la falta de músculo financiero; y según terceros, a la desunión entre los nuestros, agravada por un respaldo político insuficiente. Quizá resulte la suma de todos estos factores.

Por supuesto, hace bien ACS en defender sus intereses. No seré yo quien reniegue de la libertad de empresa y de la economía de mercado. El problema radica en que detrás de esta operación, sufriendola de alguna manera, está Galicia.

Sabemos que quienes intentan desde aquí controlar Fenosa lo hacen con un fin: recuperarla. Algo que tiene mucho sentido desde todos los puntos de vista. Domiciliada aquí, además de pagar sus impuestos en Galicia, mejoraría los niveles de esfuerzo fiscal que el Estado utiliza ahora para el reparto de los fondos públicos entre los diversos territorios. Pero también porque Fenosa tiene en Galicia más de un millón de clientes mucho peor atendidos que los de Madrid, pese a que las concesiones más antiguas y rentables de que disfruta se sitúan en nuestro territorio mientras en Madrid no producen un solo kilovatio. Para el desarrollo de Galicia, también resulta estratégica la energía.

Desconocemos, sin embargo, cuál es el proyecto de ACS, salvo en un punto: el presidente de Fenosa, nombrado por ellos, ha manifestado sin ambages su distanciamiento

de Galicia. Por lo que ha dicho, esta tierra no cuenta en sus cálculos más que cualquier otra, se permite ningunear a los empresarios locales y a la Xunta, mientras da por supuesto que el Gobierno gallego le ayudará. Y eso que Galicia genera el 30 por ciento de la energía que distribuye Fenosa y constituye su primer mercado por número de clientes, al menos hasta que los consumidores se cansen de soportar sus deficiencias y sean verdaderamente libres para elegir proveedor.

Nos hemos acostumbrado a que los ladrilleros de Madrid lo comprenden todo, preferentemente los sectores más estables, los antiguos monopolios y las concesiones, gracias a las extravagantes plusvalías que han obtenido en los últimos años. También nos hemos acostumbrado a que se tengan por geniales operaciones en las que no se respeta la buena fe de los que negocian o el valor de la palabra dada. Se tiene por más listo a quien mejor engaña. Pero las reestructuraciones empresariales deben orientarse a proyectos reales, que trasciendan el pelotazo y el mero interés personal de sus protagonistas. Sobre todo cuando hablamos de sectores estratégicos.

Quizá por eso el presidente de Fenosa haya tildado de «regeneracionistas» ciertos discursos, pensando acaso que nos agravia, cuando lo que verdaderamente insulta es la absoluta falta de respeto hacia Galicia, hacia nuestro empresariado y nuestro Gobierno, puesta de manifiesto en sus primeras y hasta ahora únicas declaraciones.

Confío en que la lección haya sido aprendida, confío en lo que aún se puede hacer. Confío en que, regrese o no Fenosa a Galicia, sepamos mirar juntos de una vez hacia el futuro.

Longa noite de néboa

04-01-2007. La Voz de Galicia cumple 125 años. Y su editor comprueba que muchas de las demandas en defensa de Galicia que el periódico planteaba a finales del siglo XIX son las que él sigue presentando, con nuevos matices, al cabo de tanto tiempo. Tras hacer una descripción del panorama político, social y económico, concluye que «se puede decir que hemos pasado de la longa noite de pedra a una longa noite de néboa. Una niebla densa impide saber si el futuro servirá para asentar y fortalecer los pilares de una sociedad avanzada y, sobre todo, más justa. La conciencia crítica con todo aquel o todo aquello que se interponga en ese camino será mi criterio. Ahí nos encontrarán los casi setecientos mil lectores que nos acompañan diariamente: siempre de su lado».

Hace hoy 125 años, en su primer editorial, La Voz anunciaba que «la más ardiente preocupación» del nuevo diario sería «servir con todo el entusiasmo» a Galicia. De entrada, exigía mejoras en los puertos gallegos, en su ferrocarril y en sus carreteras. Pretendía acabar con el aislamiento de Galicia y que pudiera competir en igualdad de oportunidades. También reclamaba avances en los servicios de la Administración, «reformas radicales» en el funcionamiento de la Justicia y «una mejora de las condiciones de propiedad en nuestros campos».

Siguiendo esa línea editorial, en 1886, La Voz dirigió una carta abierta al ministro de Fomento, en la que demandaba las infraestructuras mínimas para Galicia. Ese mismo año, en el artículo *Lo que paga Galicia*, advirtió de que se estaban esquilmando nuestras riquezas naturales sin nada a cambio. En 1890, a raíz del naufragio del *Serpent*, La Voz se quejaba de que los desastres marítimos eran una constante en nuestro litoral, mientras el Estado miraba hacia otra parte y mantenía en situación de abandono los medios de salvamento y las dotaciones de los puertos. En 1899, ante las graves inundaciones que sufrió Padrón, La Voz, en un texto que leído hoy parece una amarga profecía, relacionó las riadas con deficiencias urbanísticas y pidió que se canalizaran los ríos de las zonas de riesgo.

La hemeroteca de finales del XIX permite comprobar que, desde su fundación, La Voz cumple con su título, poniendo siempre por delante la defensa de los intereses de Galicia. Pero se percibe algo que produce un profundo desasosiego: muchas de las demandas que planteaba este periódico en sus páginas son las mismas que, con mati-

ces nuevos, me veo obligado a presentar ahora, 125 años después. Decía en el centenario que el balance de un siglo demostraba que habíamos hecho una cosa bien: tener credibilidad. Y coherencia, podría añadir ahora.

El presente es mejor que el pasado, pese a que nos hemos ido incorporando al progreso siempre más tarde que otras comunidades españolas y, por supuesto, europeas. Sin embargo, en estos tiempos en que las transformaciones sociales y económicas viajan a la velocidad de la fibra óptica, las oportunidades para Galicia serán pocas, breves y rápidas. Nuestro equipaje para los desafíos del futuro está incompleto y prueba de ello es que, durante los próximos siete años, Galicia volverá a beneficiarse de fondos de la UE por ocupar todavía los vagones de cola de Europa. Esto es malo en sí mismo, pero todavía resulta peor si se tiene en cuenta que en el 2013 desaparecerán esas inyecciones económicas, y que las recibidas desde los ochenta no se gestionaron con el acierto necesario para facilitar la convergencia.

A la brecha que todavía separa Galicia de Europa hay que añadir otra grieta interna que fracciona a la sociedad gallega: los servicios y las oportunidades de las áreas rurales y dispersas del interior poco tienen que ver con los de las zonas urbanas del litoral, uno de los más hermosos del mundo, por cierto, pero en serio peligro de destrucción por la voracidad urbanística.

Las estadísticas no contemplan otra quiebra que afecta tanto a Galicia como a España: la acción política camina por derroteros frecuentemente ajenos a las necesidades y a las expectativas de los administrados. El oportunismo partidista triunfa en el día a día sobre la ingrata

tarea de gobernar o ejercer la oposición anteponiendo los intereses generales a los de las siglas políticas. No caben dudas sobre el lado en el que ha estado y siempre seguirá estando, todos los días, La Voz de Galicia: en el de sus lectores. De ese lado no nos moverá nadie.

Con goteras en casa y temporales económicos a la vista por la incorporación al mercado de dos mil millones de personas en Asia, han de preocuparnos cada vez más los tres pilares que sustentan un proyecto de país: la educación, la sanidad y el equilibrio entre las libertades individuales y la imprescindible seguridad ciudadana. Las ciudades representaron a lo largo de la historia los motores de las ideas, del pensamiento y de la innovación. En un mundo global, los grandes núcleos urbanos ya no tienen esa exclusiva. Ganar el futuro está al alcance de todas las sociedades, sin que importe tanto su tamaño como la calidad de la educación y el entorno innovador que ésta produce. Pero la formación de las generaciones que vienen atraviesa momentos críticos por la precariedad de medios, la confusión de valores y la sucesión de reformas legales según el partido que se turne en el gobierno. Sin educación de calidad, al igual que sin infraestructuras competitivas, no habrá igualdad de oportunidades.

En un país envejecido en extremo hasta representar una de las sociedades europeas con menor tasa de reposición, la sanidad universal de calidad está amenazada porque la demanda de servicios crece y seguirá creciendo a un ritmo muy superior al que ha aumentado hasta ahora la inversión de las administraciones. Galicia no puede seguir protagonizando la terrible paradoja de ser, a la vez, el territorio más envejecido y en el que menos alternativas se

ofrecen a la atención de la tercera edad y, por extensión, a las familias que tienen que cuidar de sus ancianos.

El bienestar de un colectivo humano siempre está ligado a las libertades individuales. Y duele comprobar cómo los derechos básicos están cada día más amenazados por una creciente violencia, física y moral, que no se manifiesta sólo en el terrorismo doméstico, en el triste retorno de los etarras a la crueldad gratuita o en el ensañamiento de las organizaciones fundamentalistas internacionales, sino en mil formas de crímenes contra las mujeres, los niños, los mayores, los emigrantes...

Parafraseando a Celso Emilio Ferreiro, se puede decir que hemos pasado de la longa noite de pedra a una longa noite de néboa. Una niebla densa impide saber si el futuro servirá para asentar y fortalecer los pilares de una sociedad avanzada y, sobre todo, más justa. La conciencia crítica con todo aquel o todo aquello que se interponga en ese camino será mi criterio.

Ahí nos encontrarán los casi setecientos mil lectores que nos acompañan diariamente: siempre de su lado.

Yo protesto

08-02-2009. Es uno de los artículos de Santiago Rey con más impacto. Galicia y España han entrado de lleno en crisis, pese a lo cual la inoperancia se ha instalado en la vida pública y los despropósitos se multiplican. «Ni siquiera ahora se toman medidas para enderezar un rumbo meridianamente equivocado –escribe el editor de La Voz–. Por eso yo protesto». Y protesta por las listas de espera en la sanidad, los incumplimientos con los dependientes, el populismo, el clientelismo, el favoritismo, un nuevo caciquismo que se disfraza de modernidad...

Inmersos de lleno en la crisis —cuyos zarpazos, con ser graves, no son solo económicos— la parte más vital de la sociedad gallega asiste atónita al baile de confusiones y a la inoperancia que se ha instalado en nuestra vida pública, mientras se encienden cada día más luces rojas de alarma. Resulta difícil mirar para otro lado o dejarse llevar confiando en que las cosas se irán arreglando por sí solas. Por eso es necesario levantar la voz y llamar la atención de los corazones nobles, como hemos hecho siempre en momentos cumbre, desde grandes medios de comunicación, aquellos que tenemos como norma cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso ha de hacerse por encima de cualquier posición cómoda, aun a riesgo de ganarse las incomprensiones de unos y las declaradas hostilidades de otros.

No es nada nuevo. Quienes hace ya dos años vimos aproximarse, con bastante antelación, toda la crudeza de la depresión económica, fuimos tachados entonces de agoreros del pesimismo, de alentadores del desánimo e incluso de antipatriotas. Los hechos, tan inapelables, han venido a demostrar lo que hoy ya son dos evidencias: una, que no era la querencia por lo negativo, sino un ejercicio de ciudadanía, avisar entonces de lo que se nos venía encima; y dos —lo que resulta mucho más grave—, que no se aprovechó aquel tiempo precioso para reaccionar. Ni siquiera ahora se toman medidas resolutivas para enderezar un rumbo meridianamente equivocado. Por eso yo protesto.

Yo protesto contra el cortoplacismo miope de los agentes políticos, enfrascados hoy en satisfacer sus ansias electorales escondiendo el polvo debajo de las alfombras, aun a sabiendas de que el viento que soplará después de marzo lo esparcirá todo hasta dejar la estancia inhabita-

ble. No de otra forma se pueden entender, por ejemplo, las ayudas al sector de la automoción, inoperantes si tienen como objeto ocultar los dramáticos efectos de la crisis hasta después de la batalla electoral.

Yo protesto también porque pequeñas y medianas empresas, que son parte esencial de nuestro tejido productivo y han creado tanto empleo, se ven abocadas al cierre sin que nadie se digne reparar en su drama. Y al mismo tiempo, grandes empresas y grandes empresarios que han demostrado con hechos y sin retórica su amor por Galicia son prácticamente expulsados y casi obligados a llevar su capacidad de iniciativa a otros lugares.

Es difícil encontrar en nuestro entorno despropósitos más grandes que los que aquí se cometen, mientras se despilfarra sin tino en operaciones de imagen que tienen como objeto enmascarar con fulgores de escaparate lo que en realidad no se posee. No de otro modo se pueden entender las moles vacías del Gaiás; los gastos desproporcionados en decoración o transporte; las maquilladas y exasperantes listas de espera en la sanidad pública, y, sobre todo, la decepcionante promesa —por incumplida— de la atención a las personas dependientes. No contentos con maquinar continuas campañas de imagen, o de intentar domesticar a la prensa, no faltan incluso políticos que deciden crear sus propios medios de comunicación para garantizarse al precio que sea la foto más favorecedora.

Se ha dicho alguna vez que la política es la profesión más noble cuando su objetivo es el interés general, y la más mezquina cuando se hace por interés propio. Por eso es obligado protestar contra el populismo, el clientelismo y el favoritismo.

Fueron los auténticos padres del galleguismo los que más se manifestaron a lo largo de la historia reciente contra las prácticas caciquiles. Pero ahora ha surgido un nuevo caciquismo que se disfraza de falsa modernidad y opera con desparpajo en todo cuanto se pone a su alcance, desde las concesiones eólicas a las plazas de empleo público.

Flaco favor hacen a la historia. De los grandes galleguistas heredó Galicia un noble concepto de país, armónicamente integrado en España y en Europa, que destacaba sus valores y los relacionaba sin antagonismos con el mundo. Así pensamos siempre los que, como yo, tuvimos la feliz experiencia de compartir trabajo y proyectos ilusionantes con Ramón Piñeiro, Domingo García Sabell, Francisco Fernández del Riego, Valentín Paz Andrade, Marino Dónega o Carlos Casares; todos ellos colaboradores en las páginas de La Voz de Galicia, que siempre ha estado abierta a los sueños que pugnan por el engrandecimiento de nuestra tierra.

Ahora, aquel hermoso ideario de los grandes galleguistas parece usurpado en manos de intolerantes que lo emplean como arma arrojadiza entre gallegos. Muchos callan ante esto. Pero yo, que fui multado precisamente por impulsar que se publicase en gallego en este periódico, hoy protesto. Protesto porque el idioma que antes fue negado ahora se quiere imponer sin contemplaciones ni concesiones al sentido común. Y la lengua se parece en esto al amor. Si nadie por la fuerza pudo retirarla, nadie por la fuerza podrá tampoco imponerla.

Al cabo, este intento de imposición es solo un síntoma más de la preocupante deriva que, a causa de las confrontaciones partidarias, se viene dando en el actual

Estado de las Autonomías. Los Estados federales que son ejemplo en el mundo han establecido mejores pautas de relación y cohesión interna que las que se están dando en España en asuntos tan enloquecidos y carentes de lógica como la financiación autonómica, la educación, la ruptura de la unidad de mercado o el gravemente deteriorado principio de la igualdad entre ciudadanos.

Ni quienes en las instancias ejecutivas tienen la obligación de ordenar la vida pública ni quienes han sido facultados por el pueblo para ejercer la oposición están cumpliendo con sus obligaciones.

En el ámbito político, todo se traduce en guerras partidarias (incluso dentro del mismo gobierno), en espionajes (incluso dentro del mismo partido), en delaciones y en intereses personales.

En el campo económico, asistimos a una crisis mundial causada por la avaricia de empresarios y dirigentes sin escrúpulos, cuyas malas prácticas han sido consentidas por los supuestos encargados de controlarlas e impedir las.

Mientras, grandes pilares básicos de la vida en común se desmoronan ante la inacción de la sociedad. Los rectores de las universidades gallegas claman en el desierto por la falta de recursos que las ponen a la cola de Europa en un momento en el que se reformula el futuro de los estudios universitarios. Los jueces, divididos como nunca, añaden problemas e incongruencias al más ineficiente de los poderes que rigen la vida de los ciudadanos. Las entidades financieras ignoran sus obligaciones mientras crece el rosario de empresas ahogadas por la falta de recursos. Las listas del paro se agrandan y se llenan de dramas permanentes, hasta hacer entrever las calamidades de la desolación y

la revuelta social. Hacienda, que somos todos, muestra una infamante doble cara: mantiene su exigencia ineludible al autónomo que en un revés pierde a sus clientes, mientras envuelve en mullidos cojines a sociedades anónimas que, como las deportivas, eluden sus obligaciones con el Estado (con todos nosotros) y acumulan deudas más que obscenas.

Por todo eso yo protesto. Y por la falta de compromiso que nos está haciendo perder de nuevo el tren de la historia en cuestiones tan fundamentales para el futuro de esta comunidad como las infraestructuras, la energía y el desarrollo tecnológico. La lentitud y la ineficacia en estos campos solo vienen a confirmar que Galicia no ha reaccionado todavía con presteza ni a sus propios desequilibrios internos ni a la amenaza de una península hemipléjica, donde todos los motores económicos y sociales se concentran en la mitad oriental y toda la rémora y la falta de perspectivas se quedan en el abandonado paraíso del Finisterre.

Si digo todo esto, si protesto incluso por tener que protestar, no es porque me embarguen sentimientos derrotistas. Justo al contrario. Solo los indolentes callan. Los batalladores saben que el primer paso para afrontar con arrojo la solución de los problemas es dándoles la cara; poniéndose frente a ellos; citándolos.

Ese ánimo positivo me llevó a decir públicamente en noviembre del año pasado que es tiempo de fraguar un gran acuerdo. Y lo reitero ahora: nada se alcanzará sin una acción concertada, que sume esfuerzos para aprovechar las oportunidades. Un gran acuerdo social, no solo entre políticos, que cuaje en un gran proyecto de Galicia en el que todos puedan sentirse cómodos y confiados.

Por todo esto, hace falta más que nunca que regre-

se la desaparecida sociedad civil. Que se restablezca de la postración, que conozca, que pida cuentas, que juzgue, que actúe. Porque dicen los manuales que después de la depresión económica viene siempre la depresión social. Pero esa es una tragedia que Galicia no se debe volver a permitir. Y, desde luego, no se puede permitir hoy.

La voz de la calle

30-08-2009. Un día antes de cumplir 71 años, el presidente y editor de La Voz de Galicia recuerda su obligación de recoger la voz de la calle y de ser conciencia crítica del poder. En consecuencia, se hace eco de los problemas que esos días preocupan más a la ciudadanía: la crisis económica, «una de las más monstruosas e injustas de la historia», los gastos superfluos de la Administración, los retrasos intolerables en la atención sanitaria, la obra faraónica del monte Gaiás y la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en los asuntos de interés general.

En nuestra vida cotidiana existen conversaciones recurrentes. Son frases que todos pronunciamos, que escuchamos a diario en la espontaneidad de las llamadas telefónicas y en las charlas de los cafés, los clubes deportivos o las paradas de autobús. Como editor de un periódico recibo su eco todavía más amplificado. Esos comentarios, certeramente críticos, desbordan mis cajones y mi correo electrónico. En un tiempo en que los poderes públicos parecen desnortados, uno se sorprende ante la capacidad de la gente para concretar con clarividencia los problemas reales y también ante la valentía de sus exposiciones. Pero normalmente todo expira ahí, en la mera conversación. Resulta desasosegante constatar que quienes se quejan asumen que sus justas reivindicaciones, por suaves que sean, no alcanzarán los despachos donde se regulan sus vidas. Mi obligación como editor es recoger la voz de la calle, atender a su deseo extremo de que seamos la conciencia crítica del poder, sea cual sea este, desde las fuerzas políticas a los técnicos del Estado; de Hacienda a los ayuntamientos; de las federaciones y directivas del deporte al funcionamiento de la justicia o el de las entidades financieras.

Cumpliendo mi deber de intentar ser notario de la verdad, quiero hoy dar voz a lo que se dice en la calle. La ciudadanía habla, por encima de todo, de la crisis económica, una de las más monstruosas e injustas de la historia. Lamentan verse arrastrados por una espiral en cuya génesis nada tuvieron que ver, sin recursos ni medios para hacerle frente, mientras que los auténticos causantes de la debacle son auxiliados con salvamentos vergonzantes. Fabricantes que alardeaban de solvencia exigen y reciben ahora planes

de choque pagados por todos, mientras algunos sectores que son el alma de Galicia, como el ganadero, se asoman al abismo sin ser objeto, ni de lejos, de un trato similar.

En zonas deprimidas de Galicia, como la Costa da Morte, se conversa sobre los obstáculos políticos que impiden asentarse allí a empresas que podrían paliar la lacra de la emigración, que continúa desangrándonos en el siglo XXI, agudizando así nuestro terrible problema demográfico. En esas comarcas castigadas por el abandono no entienden que se invoquen ahora trabas medioambientales para expulsar a empresas que dan trabajo cuando en los días del espejismo inmobiliario se consintieron todo tipo de aberraciones paisajísticas.

La gente habla, y mucho, de los gastos superfluos de la Administración, agudizados en España por la escasa responsabilidad contable de 17 administraciones autonómicas, que parecen incapaces de cooperar con lealtad y coordinación. En las colas de los parados gallegos resulta imposible entender que unos ayuntamientos que se declaran al borde de la quiebra dilapiden su dinero en festejos de verano en plena crisis. Galicia no está hoy para fiestas. Mientras todas las empresas, incluida la mía, se ven obligadas a encarar medidas drásticas de ahorro, a veces impopulares, la Administración gallega mantiene sus flotas de chóferes para trasladar a unos cargos que no quieren vivir en la ciudad donde voluntariamente han elegido trabajar. La Xunta conserva un palacete en Madrid a modo de embajada; el desfile de tarjetas, dietas y comidas oficiales continúa; la oscura administración paralela permanece en pie. En las conversaciones privadas no se entiende que se dilapide el dinero público en cambios semánticos, como los del Sergas y las

escuelas. Si son escuelas infantiles, bastaba simplemente con llamarlas así.

En los hogares de Galicia viven personas que están sufriendo retrasos intolerables para pruebas clínicas y quirúrgicas. En las universidades gallegas se comenta con enojo la falta de fondos para buscar la excelencia en la educación, único futuro de Galicia. Mientras China y Estados Unidos, en su pugna por la hegemonía mundial, comparan cada año el número de titulados de élite que se gradúan en cada país, aquí nos enredamos en cuestiones nominales, o en debates idiomáticos, olvidando que las lenguas son puentes de palabras que nos deben unir, y no senderos hacia el muro de la incomunicación.

En una Galicia donde la educación y la sanidad están todavía muy lejos de lo óptimo, donde todas las empresas atraviesan coyunturas durísimas, es de todo punto incomprensible que tres presidentes de Galicia hayan perseverado en la construcción de una obra faraónica y sin utilidad conocida. Lo que se decía en la oposición se olvida rápido al llegar al poder, y sé bien de qué hablo. A veces el dispendio alcanza incluso la categoría de ofensa, como cuando se importan para esa obra materiales como la piedra, que ha sido secularmente seña de identidad de Galicia. En la calle, donde gobierna el sentido común, se pide llanamente que se detenga de inmediato un gasto insensato en un complejo sin sentido.

En las charlas de los cafés se dialoga, con preocupación y enojo, sobre la radical incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en asuntos elementales para el bienestar de todos. El primer partido negocia con el tercero para darle más presencia en el Parlamento de la que

le corresponde según las normas, solo por un afán de perjudicar a la segunda fuerza. A su vez, el segundo partido continúa sin aportar sus soluciones alternativas ante los problemas que nos atenazan y ni siquiera clarifica ante los ciudadanos cuál será su política de alianzas si recupera el poder. Mientras, políticos que intentaron ejercer una presidencia paralela, y a los que los gallegos retiraron de la vida pública en las últimas elecciones mediante su voto libre, disfrutaban del boato de coches, despachos y secretarías, y maniobran para volver pese a ser reiteradamente rechazados por los votantes. Al tiempo, el expresidente, que al menos supo leer el resultado de las urnas y retirarse con elegancia, recibe frialdad y encono en sus propias filas.

Los gallegos hablan de economía, sí, y cada vez más. Conversan sobre la grave inhibición de los poderes públicos y el abuso de los piquetes durante una huelga brutal en los astilleros, que ahora comienza a pasar su previsible factura en forma de caída de los pedidos. Los depositantes de las cajas de ahorros, millones de gallegos, critican la pretensión del poder partidista de dirigir dos entidades que no son suyas, sino de todos sus impositores. Tampoco se entiende que en nombre del localismo más estéril, una de las grandes rémoras de Galicia, se pretenda ignorar las realidades del mercado, pues una caja casi dobla a la otra en tamaño.

Yo escucho y también me hago mis preguntas. ¿Alguien está pensando en cómo va a superar Galicia el inminente fin de los fondos europeos? ¿Cuál es el programa para ello de PP, PSOE y BNG? O lo que es más grave: ¿Qué proyectos de futuro tienen los tres partidos para Galicia, uno de los países más envejecidos del mundo, desfondado

además en los tres últimos años por la deslocalización de varias de sus mayores empresas?

¿Por qué se presenta como un éxito que el AVE gallego incumpla finalmente todos los plazos y llegue, si es así, 23 años más tarde que el de Sevilla? ¿Cómo es posible que se estén reprogramando en Galicia operaciones para pacientes con cáncer, tal y como ha sucedido en mi entorno más próximo? ¿A qué esperamos para acometer la reforma de instituciones obsoletas, como el Senado, las diputaciones o las cámaras de comercio? ¿Por qué la Xunta sigue sin ser una Administración transparente en lo que hace a sus gastos, como prueba una y otra vez el proceso del Gaiás, con el caso paradigmático de las compras de libros?

¿Cómo es que el celo con que Hacienda controla a los contribuyentes de rentas bajas y medias se convierte en laxitud y tolerancia cuando se trata de clubes de fútbol? ¿Es tolerable que personas que ocupan cargos públicos, que deben ser ejemplo de respeto a la ley, llamen a la insumisión contra las normas que nos hemos dado todos, como está ocurriendo ante la posible sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña? ¿Por qué tenemos que resignarnos a que Galicia y España, por la incompetencia de sus políticas económicas, salgan de la crisis años después que otros países de nuestro entorno? ¿Dónde está el primer partido de la oposición en un momento en que el Gobierno de España solo toma medidas ineficientes y caprichosas, que nos garantizan una pesadísima carga para muchos años? ¿Dirá algún día basta la sociedad civil y obligará a sus representantes a que escuchan lo que dicta su sentido común?

Mañana cumpliré 71 años. Llevo cincuenta años

en la nómina de La Voz de Galicia. He contribuido, en la medida de mis fuerzas, a la restitución de las libertades y la democracia, en cuya defensa me encontrarán siempre. Mano a mano con el mejor galleguismo de nuestra historia he trabajado para que Galicia viese reconocidos sus derechos. Esas nobles causas me arrostraron multas, incomprensión, presiones inenarrables. Pero ganamos aquel envite y se abrió un nuevo marco de esperanza. Por eso me resulta especialmente descorazonador ver que hemos arribado a un tiempo donde el dinero solapa a la ética, donde la zancadilla cortoplacista prima sobre los grandes consensos en favor del bien general, donde los intereses partidistas o personales se anteponen a los de Galicia. Por eso reitero que, si queremos evitar una tragedia, debe reaparecer la sociedad civil y se debe fraguar una acción concertada que sume los esfuerzos de todos, sea cual sea su color, en favor del proyecto de Galicia. Entre tanto no puedo ni debo ni quiero tirar la toalla. Seguiré haciendo lo mismo que llevo haciendo toda mi vida, tratar de elaborar hoy el mejor periódico que jamás he hecho, pero sabiendo que mañana intentaré superarlo.

Galicia ya no puede esperar más

14-03-2010. Son días en que Galicia se juega la supervivencia de su sistema financiero. Se debate la fusión de las cajas de ahorros, frenada por intereses localistas. «Los posibles errores de gestión del pasado –escribe Santiago Rey– no pueden tener como consecuencia la muerte. Es decir: la entrega de sus activos a otras entidades foráneas sin compromiso con Galicia». Considera después que el asunto ha degenerado tanto que ya puede intuirse que Galicia podría quedarse sin las cajas. Ante ello, reitera su firme compromiso con la defensa de los intereses de esta tierra.

Demasiados intereses espurios están convirtiendo las críticas horas que vive Galicia en un tiempo de náusea. Resulta más que decepcionante mirar al país ante el espejo y asistir de nuevo a otro desguace —uno más— mientras cada cual parece más interesado en hacer sucumbir al rival que en ayudar a trazar algún signo positivo para el futuro de esta tierra.

A lo largo de la historia ha sucedido esto con bastante frecuencia, pero ya es hora de declararse inconformista y decir basta. Nosotros, los gallegos actuales, no podemos ser la generación que quede ante las futuras como la responsable de haberlo perdido casi todo. Está aún reciente la entrega a capital foráneo de nuestros recursos energéticos y nuestros ríos a cambio de nada. Asistimos en vivo y en directo al declive de nuestro sector lácteo, arruinado por la inacción de los gobiernos gallego y español y engullido por la codicia de nuestros competidores, ávidos de aprovechar sus ventajas en el desigual mercado común. Tiramos por la borda la que antes fue imbatible potencia pesquera y somos incapaces de sacar partido a nuestros recursos para convertir a Galicia en lo que por naturaleza le correspondería: ser la primera referencia de Europa en el sector de la acuicultura. Y por si todo esto no fuese suficiente, mientras soportamos el coste de instituciones superfluas como cámaras de comercio, diputaciones o Senado, ahora ponemos en grave riesgo la pervivencia de uno de los pilares fundamentales en los que se basa el funcionamiento de la economía gallega.

Posiblemente sea cierto que hasta ahora no todo se ha hecho bien en la gestión de las cajas. La fascinación por

el dinero fácil las ha llevado a empeñarse en exceso en la burbuja inmobiliaria, y la falta de perspectiva les ha hecho desorientarse en gastos inapropiados —como se ha visto hace unos días con grandiosas inauguraciones en tiempos de grave crisis—, en lugar de centrarse en los fines de desarrollo, educación y compensación social que justifican la peculiar existencia de estas instituciones.

Pero los posibles errores de gestión del pasado —sobre los que alguna responsabilidad tendrá, en todo caso, el Banco de España— no pueden tener como consecuencia la muerte. Es decir: la entrega de sus activos a otras entidades foráneas.

La desaparición —porque de eso se trata— de las dos cajas de ahorros con que cuenta Galicia puede ser en esta hora algo ya prácticamente sellado. No permitir o no promover su fusión quiere decir que al cabo de muy pocos meses las dos serán deglutidas irremisiblemente por otras más audaces o más favorecidas, y sus centros de decisión desaparecerán de Galicia.

Dicho de otro modo: todos los recursos y todos los ahorros que han generado los gallegos y que han hecho crecer estas dos instituciones, emigrarán. Pasarán a estar al servicio de entidades sin ninguna vinculación ni compromiso con Galicia. Así, los emprendedores, los autónomos, los empresarios, los trabajadores y en general todos los ciudadanos que abran una cuenta o pidan un préstamo podrán ser clientes de muchos gigantes de las finanzas, pero ninguno de estos estará comprometido con ellos y sus empresas.

La necesidad de fusionar las dos cajas gallegas, por tanto, no es una alternativa más, sino una cuestión de su-

pervivencia de nuestro sistema financiero. Si no se hace, este prácticamente desaparecerá.

Luchar por impedirlo parece algo aconsejado por el sentido común. Y sin embargo, ha dado lugar en Galicia a una de las mayores y más deplorables confrontaciones que se hayan vivido en la historia reciente. En este momento en que, desgraciadamente, se acaba el tiempo, se pueden identificar ya muchos errores y muchas responsabilidades. El proceso no solo tiene la particularidad de hacernos ver qué poco duele Galicia en muchos corazones, sino que ha llegado a unos límites en que se está volviendo intragable hasta el asco.

En primer lugar, llama la atención el sentido de propiedad particularista que han adquirido aquellos encargados de llevar las riendas de estas entidades. Todos, menos ellos, sabemos que no son propietarios, sino empleados, que ocupan sus lugares vinculados por contrato laboral o por mandato de las asambleas, de las que en algún caso forman parte en representación de los depositantes de la caja. ¿Cómo pueden erigirse, por tanto, en sus dueños?

Hay incluso quien, llevado por un exacerbado personalismo y por un ánimo irracional de perpetuación en el puesto, ha forzado tanto su desafío que fue necesario cambiar la ley para generar una nueva mayoría que venza su oposición.

En segundo lugar, haber llegado hasta tal punto significa un fracaso estrepitoso de la política, ya que se ha reemplazado el pacto y el consenso por la imposición por vía legislativa. Quienes tienen la alta responsabilidad de dirigir el Gobierno y regular la economía de Galicia han contribuido con su parte alícuota a esta equivocación co-

lectiva, que se traduce en convertir las instituciones en un campo de batalla.

Pero aún ha sido peor el papel de la oposición. Porque, olvidando la obligación primordial de defender los intereses supremos de Galicia, ha valorado únicamente la oportunidad de dañar al contrario y hacerle morder el polvo en la lucha electoral. Y más patética es todavía la impostura de esta oposición cuando, para flagelar más a su rival, aprovecha que en esta legislatura el Gobierno central es de su color y lo usa como un cañón contra la Xunta.

Pocas mentes pueden creer hoy que el problema insalvable en este asunto derive de la presunta inconstitucionalidad de la ley de cajas. Aun siendo técnicamente así, se sabe que un arreglo político permitiría en minutos un arreglo jurídico que volviese el texto perfectamente constitucional.

Hay todavía más culpables de esta náusea. Uno, el alcalde que aprovecha enfermizamente la baza del localismo en su propio beneficio electoral, sin importarle siquiera lanzar peligrosos bulos que, si quien los propala tuviese más credibilidad, podrían haber generado graves quebrantos. Otros culpables son los que jalean enfrentamientos inventándose conspiraciones. Y sobre todo —hay que decirlo— los que callan. Todos los que callan, sea por desidia, por no significarse o por mantenerse incólumes en los rangos del amiguismo. Demasiados intereses particularistas en juego. Y prácticamente nadie, ni siquiera esa tan invocada sociedad civil, se siente llamada a defender activamente el interés general de todos los gallegos.

A día de hoy el proceso ha degenerado tanto, que ya empieza a intuirse que Galicia puede quedarse sin sus

dos cajas. El tiempo se acaba y nadie parece dispuesto a reflexionar y mover su posición. Nadie quiere ceder nada, ni amputarse un solo dedo en la batalla. Así que esta crisis solo dejará secuelas negativas. Será recordada, seguramente, por haber elevado a alturas que nunca se habían alcanzado antes lo peor de los localismos mezquinos, que están intentando provocar una ruptura entre el norte y el sur de esta tierra conciliadora.

Prácticamente nadie parece interesado en contribuir a vertebrar Galicia. Sin embargo, ahora que se pone de moda lo contrario, este periódico y esta casa consideran una feliz obligación mantener más vivo que nunca el histórico proyecto integrador que se resume en su título. Y lo harán, como hasta ahora, con la entrega de los más de trescientos periodistas que forman las catorce redacciones distribuidas por toda Galicia, y con el apoyo inmensurable de los integrantes de su fundación, depositaria del futuro del diario y muestra única de que es posible fundir los mejores talentos en favor de esta tierra. Ni ellos, ni este editor, ni las futuras generaciones podrán aceptar nunca que sean desdeñados los nobles intereses de Galicia.

Es hora de actuar. Allá cada uno con su responsabilidad.

Contra la resignación

25-07-2010. Son los momentos más duros de la crisis económica. El déficit público y la deuda con terceros han colocado a España al borde de la bancarrota colectiva. El pulso económico está prácticamente parado y miles de pequeñas empresas echan el cierre. El presidente y editor de La Voz de Galicia describe la brecha que se ha abierto entre el poder y la población civil a causa de la ineptitud, la deslealtad con los ciudadanos y la bajeza partidista. Este 25 de julio, el día de Galicia, escribe, «es el momento de reclamar, ya, un cambio de rumbo a quienes tienen la responsabilidad de poner fin a este callejón sin salida».

Despojados de toda confianza en los políticos, muchos españoles viven hoy amargas horas, presas de una difícil situación que ni han creado ni se merecen. Por todas partes aumenta la desafección colectiva, al tiempo que sube cada día el número de ciudadanos que sufren de manera real y directa en sus propias casas y en sus propias cuentas los efectos de una grave situación económica de la que no son causantes, aunque se vean obligados a pagar la factura.

No es ya solo ineptitud lo que puede reprocharse a los responsables —unos y otros— de haber vuelto del revés el futuro del pueblo español, sino también vicios imperdonables, como la deslealtad que se oculta en el continuo enmascaramiento de la angustiosa situación real, o la bajeza que practican cada día a la vista de todos, cuando dan prioridad a sus intereses partidistas —embriagados en las luchas de poder— y desatienden el deber de cooperación al que están obligados.

Son estos tres defectos —ineptitud, deslealtad con los ciudadanos y bajeza partidista— los que han generado la brecha más enorme que se recuerda en democracia entre el poder y la población civil. La desconfianza es tan grande que difícilmente se podrá reparar si la sociedad se resigna. Por eso es hora de llamar a las cosas por su nombre y exigir responsabilidades a quienes, en su locura, nos han conducido hasta aquí.

El descrédito internacional que hoy abrume a España tiene, desde luego, responsables. Son aquellos que hace solo siete meses, cuando iba a comenzar la presidencia de turno de la Unión Europea, pretendían engañarnos hablándonos de deslumbrantes conjunciones planetarias,

pese a saber que la propia supervivencia económica del país estaba en peligro. El elevado déficit público y la multimillonaria deuda con terceros nos colocaban cerca de la bancarrota colectiva, pero desde los Gobiernos proseguía el despilfarro y se seguía denostando como antipatriotas a los que advertíamos del abismo.

A pie de calle, la situación era y es todavía más dramática, con el pulso económico prácticamente detenido. Tocada ya la bárbara cifra de cuatro millones de desempleados, el país camina inexorablemente hacia un aumento más preocupante del paro; la economía productiva se desangra día a día con recortes, quiebras y suspensiones de pagos; empresas antes bien sólidas entran en pérdidas por la drástica retracción del consumo, y en todas las ciudades millares de pequeños negocios echan el cierre hasta dejar desolados barrios enteros.

Mientras todo esto sucede a la vista de la España real, la llamada España oficial se esfuerza en negarlo y en vender una imagen ilusoria de país rico, hecho para codearse con los grandes del mundo. Tuvieron que surgir advertencias desde primeras instancias internacionales para que, en menos de veinticuatro horas, el Gobierno diese un vuelco de 180 grados a su discurso. Y así lo hemos visto pasar del funambulismo irresponsable a inútiles palos de ciego.

La principal conclusión que puede obtenerse de semejante vaivén es que en España falta programa y sobra incoherencia.

Se habla, por ejemplo, de repartir esfuerzos para afrontar la difícil situación económica, pero vemos a las entidades financieras presumiendo de ganar millones cada mes, al tiempo que reclaman el auxilio de los fondos esta-

tales, mientras se abandona al sector lácteo y se congelan las flacas nóminas de los pensionistas. Se habla de sinergias, pero Galicia despilfarra recursos en tres aeropuertos y tres universidades que se hacen la competencia con el único resultado de empobrecerse más en sus minifundios.

Y se habla insistentemente de austeridad, pero la Administración engorda hasta hacerse obesa, mantiene instituciones tan ineficientes como el Senado y las diputaciones provinciales o permite la inusitada deriva de las comunidades autónomas.

A la vista está que el Estado de las Autonomías, que nació constitucionalmente para vertebrar España, se ha hipertrofiado de tal forma que ha llegado a convertirse en uno de nuestros mayores problemas. Porque, desgraciadamente, esta aportación democrática a la convivencia de los españoles solo destaca hoy por los aspectos más negativos que ha ido exacerbando.

Tres son especialmente preocupantes: uno, las graves tensiones disgregadoras que han introducido algunos —nacionalistas o no— con su rechazo a la idea de España, como se ha visto en la negativa a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña; dos, la proliferación de la corrupción política, y tres, el despilfarro de recursos, que ya recuerda más el estilo de los virreinos bananeros.

¿Cómo puede entenderse, si no, que las trece corporaciones de televisiones públicas creadas por las autonomías cuesten más de cinco millones de euros diarios, que viene a ser, traducido, un dispendio de 847 millones de pesetas cada día del año? Dado que la finalidad de muchos de estos canales es el boato para sus gobiernos, ¿es-

tá España en condiciones de permitirse tales derroches?

Mientras crecen y crecen los desmanes de los vi-reinatos, agonizan en la inanición centenares de ayuntamientos que ya no pueden atender las cuestiones básicas de sus municipios.

El despropósito no puede ser mayor. O sí. Porque la clase política, lejos de proponerse afrontar el problema con seriedad prefiere dejar que el desbarajuste vaya agrandándose antes que perder votos por tomar medidas que puedan disgustar a sus fieles electores.

El cortoplacismo que domina la actividad política no solo ha dado al traste con las grandes ideas de eficacia y servicio, sino que ha generado una nueva forma de actuación que consiste en dedicar la mayor parte de los esfuerzos a cuidar la imagen y la apariencia propias, y el resto, a denostar a los rivales. El objeto de la política no es ya acometer proyectos troncales, sino mantener el poder para el clan a toda costa.

Tal planteamiento, propio de las democracias viciadas o inmaduras, trae como consecuencia la pérdida de principios. Y lo que es peor: la crisis de valores que ha hecho mella en la sociedad española. Basta ver, para corroborarlo, las graves discordias y deficiencias que sacuden ámbitos tan importantes como la educación, la justicia y las propias reglas de juego de la convivencia, empezando por la propia ley electoral, que no da en la práctica el mismo valor a unos votos y a otros.

A empeorarlo ayuda, sin duda, el guerracivilismo en que se han instalado algunos grupos de comunicación, que se comportan como jaleadores, creados a su medida por los poderes políticos y sostenidos según la obediencia que

profesen a sus jefes. Así resisten, atrincherados, al menos mientras los agujeros negros en que se han convertido sus finanzas no se traguen tantos delirios de grandeza.

No son, ciertamente, los únicos gigantes con pies de barro que vienen a añadir más elementos de preocupación a la alarmante fotografía que hoy puede obtenerse de España. A las quiebras de grandes imperios económicos contruidos con defectuosos ladrillos puede sumarse la enorme deuda de los clubes de fútbol que hasta ahora vinieron tratando de engañar a los aficionados haciéndoles ver —para beneficio de unos pocos— que podían convertir humo en dinero. Así han llegado a deber nada menos que 3.526 millones de euros; es decir: 586.000 millones de pesetas.

Ahora, cuando esa imposible alquimia ya no funciona, miran por tercera vez a las ubres del Estado esperando que de ellas mane el dinero que los salve de la debacle, y que la conmiseración con estos grandes gestores lleve a Hacienda a perdonarles todo lo que nos deben. Algo que, evidentemente, las arcas públicas no pueden hacer.

Y mientras este es el patético panorama que se observa hoy de España con un mínimo de perspectiva, en nuestra comunidad, más despistados aún, continúan las tradicionales y entrañables peleas domésticas. Desde las internas de algunos partidos, que buscan destrozarse con camaradería, a las de quienes se afanan en disparar al aire insidias de papel, ya que saben que no pueden ganar en el cuerpo a cuerpo. Sorprende, por ejemplo, ver convertidos en adalides de la fusión de las cajas a quienes estuvieron prohibiéndola y zancadilleándola a diario.

Sobre todo, enoja ver a los políticos malgastando

el tiempo en denuncias cruzadas de presuntas corruptelas pasadas y actuales, mientras en la calle crecen las preocupaciones laborales, los problemas económicos y el desánimo colectivo.

Pero el desánimo es estéril y no podemos entregarnos a él.

El 25 de julio, día de Galicia y del patrón de España, es una fecha solemne en la que todo pide iniciar algo nuevo. Hoy, sin duda, en este preciso instante de la historia, es el momento de recuperar la energía y plantearnos salir del pozo. El momento de reclamar, ya, un cambio de rumbo a quienes tienen la responsabilidad de poner fin a este callejón sin salida.

Acabemos

24-07-2011. La crisis económica dura ya varios años y España está en caída libre, peor que doce meses antes. Santiago Rey escribe la víspera del día de Galicia: «Seguimos en nuestra particular bajada a los infiernos, por acción, por omisión y por la sordera de quienes gestionan la vida pública». Para reconstruir la economía es necesario ponerlo todo en revisión. «Urge actuar –dice en su artículo– y acometer una refundación inspirada en la cultura del consenso de la Transición para lograr unas Administraciones eficientes».

Asistimos impotentes a una bajada a los infiernos. Es un descenso a cámara lenta. Comenzó hace cinco años y continuamos en caída libre. La crisis que iba a pasar de largo, esa que muchos se negaron a reconocer para mantener al país en un estado de letargo placentero, va a provocar efectos devastadores en nuestra sociedad. Que la próxima generación viva peor que la generación de sus padres tiene culpables: los que no escuchan.

El euro, el optimismo enfermizo de los responsables políticos, la avaricia del sector inmobiliario y los excesos de la banca con su barra libre de préstamos levantaron un país de ricos de cartón piedra. El temporal financiero internacional lo derrumbó como la corriente de aire tira un castillo de naipes. Empresas que se iban a comer el mundo han entrado en barrena y aquellos bancos que eran, decían, los mejores del planeta tienen estrangulada la línea de crédito a familias, autónomos y empresas. Y así estamos; enfangados. Al norte de los Pirineos, de los Apeninos y del monte Olimpo, las economías de la otra Europa comienzan a desperezarse, mientras aquí seguimos en nuestra particular bajada a los infiernos, por acción, por omisión y por la sordera de quienes gestionan la vida pública.

No escuchan las alarmas que proceden de la calle. ¿Por qué no visitan los comedores sociales que vuelven a estar abarrotados? ¿Por qué no ven las colas a las puertas de las oficinas de empleo? ¿Por qué no leen los letreros de cierre en escaparates desnudos? ¿Por qué no acuden a pedir un crédito para una furgoneta sin el aval del sueldo de diputado? ¿Por qué no prueban a pasar unos meses sin ingresos, como les ocurre a miles de proveedores de orga-

nismos públicos? O ¿por qué tampoco oyen el silencio de las fábricas vacías?

No escuchan, ni escucharon. Quienes hace ya más de cuatro años alertamos de la crudeza de la depresión fuimos acusados entonces de alentadores del desánimo y portavoces del pesimismo. Una regla del periodismo anglosajón viene al caso: *las opiniones son libres; los hechos, sagrados*. Aquellas denuncias eran hechos, no opiniones. Pero se perdió un tiempo precioso y se malgastó el dinero que ya no quedaba en la caja para aparentar que no pasaba nada, para simular que seguíamos siendo una potencia. La ausencia de honestidad para reconocer los hechos ante quienes pagaremos los platos rotos ya ha sido sentenciada el 22 de mayo.

El inaplazable adelanto de las elecciones generales desencadenará un nuevo intento por confundir a la opinión pública con un baile de máscaras durante una campaña interminable y costosa. Como la realidad es ingrata y ni los que gobiernan ni la oposición escuchan las alarmas de la calle, lo importante será justo lo que no se diga en los mítines. Sin embargo, son momentos de excepción. El tiempo corre en nuestra contra. Y ahí les aseguro que me encontrarán, como he hecho siempre, dispuesto a denunciar que los hechos se disfracen.

Los agentes políticos y también los sindicales se resisten a escuchar que el hartazgo, la indiferencia y hasta la indignación crecen cada día a nuestro alrededor por su cortoplacismo miope, por la contaminación partidista de los estamentos del poder judicial o por el amiguismo y la corrupción que tiñen cada mañana los titulares de prensa. Sobre todo, la desafección es consecuencia del temor

fundado a que en los próximos meses nos enfrentaremos a más recortes y a perder conquistas sociales que nos han hecho más justos y un poco más humanos, como la sanidad pública.

Los recortes de gasto en las Administraciones no sirven para nada si solo en eso consiste la primera y la última medida. Son los impuestos de los contribuyentes los que tienen que proveer los obesos presupuestos de un entramado de instituciones, organismos y entes públicos que se pisan las competencias y apenas aportan más que laberíntica burocracia, lentitud y dificultad.

Es más rápido trasladarse a la Europa de tradición luterana, aprender lo básico del idioma y allí crear una empresa que hacerlo en la maraña de papeles y ventanillas de los organismos nacionales. ¿Dos millones y medio de funcionarios, más de 150.000 de ellos solo en Galicia, para esto?

La hipertrofia, la duplicidad de Administraciones y la multiplicación de sociedades de capital público a través de las cuales huyen de los estrictos controles del derecho administrativo han servido para fomentar la ineficiencia y generar hartazgo social.

Se equivocarán los que crean que superada la crisis todo seguirá igual. Para dejarla atrás y reconstruir una economía que cada día que pasa es relegada un poco más por el empuje de países asiáticos y sudamericanos es necesario y urgente ponerlo todo en revisión. Todo para así salvaguardar las conquistas de una transición cuyos protagonistas tenían una calidad humana y unas aptitudes que se echan en falta en el presente, donde la política se ha convertido en una profesión —la única de muchos—

en vez de un servicio a los demás. El Senado, las diputaciones, los chiringuitos, que sean trescientos quince los municipios en Galicia, que sean ocho mil en toda España, los cinco millones de euros al día que cuestan las televisiones autonómicas, un millar de diputados en nómina en diecisiete Parlamentos o Cortes regionales. ¿Para qué abundar en la lista?

Si no se trasciende de una sucesión de recortes, las medidas de ajuste solo servirán para empobrecernos más.

En cambio, para salvaguardar verdaderamente lo importante, para evitar que las hojas de las tijeras corten el tuétano del Estado del bienestar, la sanidad y la educación, es una obligación histórica racionalizar la estructura administrativa, repensarla con criterios de eficacia y corregir los despropósitos provocados durante lustros por ansias partidistas, localistas y personalistas.

Europa no está ni se la espera en esta travesía. En el precipicio al que nos asomamos en distinto grado los países mediterráneos, la UE se está demostrando incapaz una vez más de ser una institución a la altura de las circunstancias. Las tensiones en la política interna de sus países y los votos que ganará o perderá su partido fijan los criterios en política internacional de los líderes europeos. No deciden en función de los intereses colectivos de la UE, sino de los suyos. A diferencia de la etapa anterior a la implantación de la moneda única, ahora tenemos cedida la autonomía monetaria del Estado a una institución espectral, reflejo de la talla de los actuales líderes del Viejo Continente. El euro existe; la unidad europea, no.

En los mapamundis del Oriente emergente, Galicia está en la esquina en el extremo oeste, porque la centrali-

dad pertenece a los países del Índico y el Pacífico. En los mapas del continente europeo, Galicia cae al sur, alejada de la Europa rica. En la Península, es el extremo noroeste de una España hemipléjica, dividida por una línea invisible en la que la desigualdad de oportunidades entre Este y Oeste resulta ofensiva. Somos la esquina, además, de una España ausente del mapa de Europa desde la primera revolución industrial. Periferia para los acontecimientos innovadores y para otros trágicos, caso de las dos guerras.

Las dificultades para Galicia y para España son aterradoras, y los riesgos de caer en una depresión social son altos. Tenemos que actuar ya si no queremos acabar como Islandia, donde su primer ministro ha sido procesado por la gestión de la crisis, o como Grecia, empeñada hasta la ruina y azotada por la violencia.

Todos sabemos —también lo saben aquellos a los que no les interesa escucharlo— que urge actuar y acometer una refundación inspirada en la cultura del consenso de la transición para lograr unas Administraciones eficientes. Una refundación que sitúe al ciudadano donde debe estar: en el centro de la acción política de un país que, además, sea capaz de ofrecer oportunidades a los millones de parados que hoy no las tienen y a las futuras generaciones. Pero para que todo eso pueda empezar, la agonía actual debe terminar o nos sepultará. Emprendamos la reconstrucción.

Acabar con la desesperación

12-02-2012. «España se hunde en el desastre y la decadencia, al borde del estallido social», escribe Santiago Rey sobre el panorama desolador generado por la crisis. El editor critica la inoperancia de los Gobiernos, que mantienen gastos superfluos mientras entran a saco en los bolsillos de los contribuyentes. «Pero el tiempo se ha acabado. Es hora de que los responsables de la gestión pública pongan fin a sus aberraciones, asuman su liderazgo y busquen soluciones en lugar de parches».

A sco. Esa es la palabra que más se repite estos días para definir lo que está pasando en un país abandonado al despropósito. En la peor situación que se haya vivido nunca en Galicia y en España, la valentía y el coraje han desaparecido por la puerta de atrás, mientras cobra presencia omnímoda un doble juego inadmisibile, que se ensaña con la clase media, pero mantiene y acrecienta inservibles estructuras de la Administración y opulentos privilegios de los que deberían ser servidores públicos.

La ineficiencia y la irresponsabilidad han sido los denominadores comunes desde que empezó la crisis, y sus consecuencias están bien a la vista: las empresas en la asfixia, el desempleo en tasas inasumibles, las expectativas de los jóvenes totalmente desbaratadas y gran parte de las familias con notorias dificultades de supervivencia.

¿Y se ha hecho algo para aliviar el sufrimiento de la gente? Nada. Las respuestas del aberrante Gobierno anterior y de los que hoy asumen responsabilidades en España y Galicia han sido siempre las mismas: recetar más recortes y más renunciadas a la sociedad, hasta hacerla bajar a la fuerza varios escalones camino del empobrecimiento.

Ni han apoyado como deberían a las empresas, ni han garantizado prestaciones y servicios, ni han estimulado el consumo y el movimiento económico. Sí han subido los impuestos y el precio de los servicios básicos; sí han desangrado la economía satisfaciendo la voracidad de los especuladores internacionales. En definitiva, sí han pasado a la clase media, hasta arruinarla, una portentosa factura que en absoluto le corresponde.

Ahora —no hay más que verlo en Galicia— vuelven

a la carga los políticos con más atentados contra el bolsillo de una gran parte de la sociedad. Los empleados de la sanidad y la educación y el resto de los funcionarios, ya machacados, se enfrentan a nuevos ajustes, mientras en las alturas continúa el desfile de fastos, oropeles y despilfarros pagados con dinero público.

Ese es el doble juego insostenible. Galicia derrocha presupuesto en innumerables alquileres de oficinas públicas y edificios innecesarios, repartidos por Santiago, por todas las demás ciudades y comarcas del país e incluso por el exterior, como se acaba de ver con las pseudoembajadas prácticamente inactivas de Miami, Bruselas o el palacete de la Casa de Galicia en Madrid. Una Administración responsable y preocupada por el gasto no permitiría de ningún modo ese caro minifundismo administrativo, como tampoco se empecinaría en continuar adelante con el millonario dispendio del Gaiás, repleto de gastos de obra y mantenimiento pero vacío de contenido y de gente. Bien podrían ir para allí todas las oficinas ahora desperdigadas, para darle alguna utilidad a nuestra más flamante y majestuosa ruina.

Pero, con ser grande, no es esa la única equivocación de este y los anteriores Gobiernos de Galicia de cualquier color. Tras dejar que se hundiesen sectores claves como el pesquero, el agrario, el lácteo o el naval, se ha instaurado una política de remiendos tan desnortada que la sociedad no puede más que quedarse atónita cuando conoce que se destina dinero público a proyectos irreales y fallidos como el de Manzaneda. O cuando se apoya sin ningún tipo de explicación a empresas inviables e insolventes, dando oxígeno a experimentos quebrados, como sucede en la industria y en algunos medios de comunicación.

Ni explicación ni estrategia ni propósito de enmienda. El Gobierno gallego sigue empecinado en recortes a la clase media, en dejar famélicas a las universidades y en estrechar servicios esenciales como la sanidad y la educación.

No ha aprendido siquiera del mejor ejemplo que están dando los empresarios cuando, en las peores circunstancias, se fajan para superar la crisis sin beneficios ni créditos, ni más armas que su determinación y tenacidad en la lucha contra las adversidades.

Quienes pagan la factura de la crisis no pueden entender esa actitud. Ni cómo se ahonda en la contraria, con más gastos superfluos generados por la hipertrofia de todas las Administraciones. En los tiempos de la era digital, crecen como hongos las delegaciones de organismos y sus ventanillas sin ninguna lógica ni coordinación o sinergia entre ellas. Oficinas de la Xunta, del Ayuntamiento, de la Diputación, de los ministerios, consellos de contas y consultivos, valedores... Todos enmarañan la burocracia hasta hacerla insoportable, además de inasumible económicamente para el erario y para el contribuyente.

Si están buscando realmente dónde ahorrar los 40.000 millones que hacen falta para arreglar las cuentas públicas —es decir: rebajar el déficit y pagar los altos intereses que fijan los gigantes de la especulación financiera internacional— es en esa partida de gastos superfluos donde hay que entrar a saco, y no en el bolsillo de los consumidores.

Al Estado todavía le quedan muchos lugares donde tocar para hacerse eficiente. Porque nada ha hecho, de momento, para acabar con instituciones superfluas, como las diputaciones provinciales; redundantes, como el Senado, o propagandísticas, como las televisiones públi-

cas. Tampoco ha acometido siquiera el paso de fusionar municipios incapaces de sostenerse. Y no lo ha hecho por razones electoralistas y localistas, pero también porque la desaparición de corporaciones locales significa la pérdida de numerosos puestos de concejal.

Por eso resulta intolerable el doble rasero que aplican los políticos y los que revuelan a su alrededor. Y bochornosa su forma de repartirse las prebendas. Se acaba de ver, sin ir más lejos, en el traspaso de poder de padre a hijo en Ourense. Ante el silencio o incluso el aplauso de muchos, se ha disfrazado de simple apariencia de democracia la consumación de una herencia de naturaleza puramente caciquil.

Ese desprecio por la democracia se observa incluso en el funcionamiento de la Unión Europea, con un Parlamento decorativo, una estructura inoperante, un coste verdaderamente obsceno y un poder cuasi dictatorial que se han arrogado porque sí Alemania y Francia.

Mucho deberán hacer quienes allá y aquí practican estas nefastas artes para recuperar, siquiera someramente, la confianza de una sociedad cada vez más decepcionada y molesta con su clase política.

La perdieron, desde luego, los anteriores gobernantes que fueron de aberración en aberración hasta dejar el país postrado y empobrecido, al borde de la intervención y a merced de los depredadores financieros. La perdieron también quienes exacerbaron sus ansias nacionalistas y separatistas hasta llegar a la desfachatez de permitirse señalar supuestas líneas rojas al Estado. Y poco hacen por conservarla quienes, después de clamar en la oposición, ahora en el Gobierno no son capaces siquiera de ponerse

de acuerdo entre ellos en las cuestiones más elementales para iniciar la revitalización del país.

Con la oposición ausente y ocupada en sus esperpénticas guerras intestinas, España se hunde en el desastre y la decadencia, al borde del estallido social, mientras mangonean a sus anchas los halcones de la banca. Algunos, que solo ven la crisis que padecemos como un festín para sus garras, se han aprovechado bien de la situación y de la ineptitud del gobernador del Banco de España, y pretenden adueñarse a precio de ganga de mercados que les rehuían. Otros, con salarios más altos que el valor de sus entidades, se van para casa ahora con las bolsas repletas, a la espera, curiosamente, de más privilegios y homenajes.

Ni siquiera en eso se ha conseguido ofrecer a los ciudadanos algún ejemplo de dignidad. Mientras en el Reino Unido se retiran distinciones a quien pierde la reputación por su conducta, aquí se premia con las más altas a quienes no solo no las merecen, sino que deberían pagar, como en Islandia, por sus responsabilidades.

Pero el tiempo se ha acabado. Es hora de que los responsables de la gestión pública pongan fin a sus aberraciones, asuman su liderazgo y busquen soluciones en lugar de parches. Ni Galicia ni España ni Europa pueden esperar más. Hay que acabar con la desesperación y el asco.

Antes de la bancarrota

12-04-2012. España ha dejado de ser dueña de su destino, zarandeada día a día por el terror al terrible rigor de la intervención financiera alentada por sus acreedores. Ante un desempleo insoportable y las grandes dificultades de las empresas, Santiago Rey afirma que es preciso emplear con rigor la cirugía justamente donde se ha desarrollado el cáncer del despilfarro, la burocracia y la corrupción. «España no quiere ni debe seguir la suerte de los desdichados griegos. Está en la mano de sus gobernantes evitarlo. Y en la de los ciudadanos, exigirles responsabilidades», concluye.

Tras tantos años advirtiéndolo desde estas páginas ante la indiferencia de muchos, nadie duda ya de que España ha viajado sin remedio hacia el fondo del pozo. Hoy, cuando el país vive sus horas más amargas, acribillado por el mayor destrozo jamás visto en su economía, y prácticamente abandonado por quienes tenían que haber presentado batalla, la sociedad asiste entre la ira y la resignación a una catástrofe sin precedentes que mina su fe, agrede su dignidad y destroza su esperanza.

Haber alertado hasta la saciedad del peligro no ha evitado, por desgracia, que la situación empeorase hasta ver cómo España ha dejado de ser dueña de su destino, zarrandeada día a día por el terrible rigor de la intervención financiera que alientan sus acreedores. Caer en esa red —si de algún modo no hemos caído ya— solo podrá traer más desgracia a los españoles y más descrédito a quienes, teniendo en sus manos los resortes políticos y económicos, han eludido flagrantemente sus obligaciones.

Las eludieron, en primer lugar, aquellos que no solo negaron la crisis, sino que exacerbaban sus pésimos efectos incrementando los desajustes y comportándose irresponsablemente, como hizo el anterior Gobierno en Madrid y el bipartito en Galicia, con una arrogancia y una temeridad impropias de gobernantes juiciosos. Y parecen también dispuestos a eludir sus obligaciones quienes, tras heredar la peor situación imaginable, responden con la única receta que practican, que es aquella que solo garantiza más pobreza y más padecimiento a la clase media.

Mientras la tenaza aprieta más y más, el sistema financiero recibe a manos llenas el dinero oficial, y en

lugar de dedicarlo a reactivar la economía lo niega constantemente a la gente. No solo eso: también le expropia lo que es suyo, como les sucede a las miles de personas que en Galicia están atrapadas en un impresentable corralito.

Más de cinco millones de personas están pagando con su angustioso presente y su desesperanzado futuro haber ido a caer en las listas negras del desempleo. Miles de comerciantes y autónomos se ven forzados cada día a dar por fracasados sus esfuerzos y a peregrinar por las entidades financieras dando la cara para sobrellevar con presencia de ánimo su bancarrota.

Y no faltan, desde luego, los empresarios que, tras levantar grandes proyectos y dar sustento a decenas o a centenares de familias, tienen que liquidarlos o encogerlos porque ni las ventas ni la financiación ni la tan habitual traición a las reglas de la competencia les permiten mantenerlos en niveles solventes.

Este es el retrato que hoy se puede hacer de España y de Galicia si se mira a los ojos de la gente. Pero también se puede trazar otro no menos real ni menos desesperante si se observa el entorno esperpéntico de las instituciones que rigen su vida.

Diecisiete Gobiernos autónomos con sus diecisiete Parlamentos —muchos de ellos inventados en comunidades sin personalidad definida— han dado lugar a reinos de taifas, donde se instalan el despilfarro, el sinsentido y, en ciertos casos, la corrupción más obscena casi a la vista de todos. Cincuenta diputaciones que no tienen más objeto que repartir prebendas y favores entre los afines. Cuatro mil *chiringuitos* con sus gestores, plantillas y presupuestos sustraídos al control público. Numerosos defensores

del pueblo mientras el pueblo permanece indefenso. Sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos mantenidos a expensas del dinero público, conseguido a veces de forma irregular, que trabajan para cualquier cosa menos para el interés general. Cámaras inútiles como el Senado. Miles de ayuntamientos inflados de nóminas y concejalías, pero vacíos de recursos. Trece televisiones autonómicas que consumen cada año 1.650 millones de euros en presupuesto y suman una deuda conjunta semejante. Y clubes de fútbol convertidos en nidos de trapicheo y marrullería que deben a todos los españoles más de 700 millones de euros.

Nada de esto es nuevo ni se dice por primera vez en este diario. Pero su sola enumeración una vez más debiera sobrecoger, porque muestra la punta del iceberg de un Estado insostenible. Y revela, sobre todo, la falta de valentía de quienes, por haber sido elegidos con los votos de los que sufren la crisis, están obligados de forma imperativa a acabar con semejante desatino.

Si además de valientes —algo todavía no probado— fuesen sabios, habrían entendido hace tiempo que las debilidades de España no se arreglan únicamente con medidas que solo conducen a un empobrecimiento general de la sociedad, ni con encarecer nuestra sanidad y nuestra educación, sino que es preciso emplear con rigor la cirugía justamente donde se ha desarrollado el cáncer del despilfarro, la burocracia y la corrupción. Es ahí donde se pueden ahorrar —no un año, sino siempre— esos puntos del PIB que nos exigen para ser un país fuerte y respetado.

Para ello no solo es preciso el coraje —si lo tuviese— del que gobierna. También es necesario el concurso de la

oposición y de cuantos se sienten demócratas y comprometidos con su país. Si fue posible en tiempos de bonanza firmar el Pacto de Toledo, también debiera serlo ahora afrontar la reforma más constructiva que requiere el país.

Y debiera ser ya. Rápido. Antes de la bancarrota. Porque no hay tiempo que perder. Del mismo modo que sobró determinación para cambiar la Carta Magna prácticamente en minutos por imperativo de Europa, debería haber arrojado para llevar a cabo este reto nacional por primordial necesidad ciudadana. Se trata de no sangrar más a las personas mientras rezuman despilfarro las estructuras.

Porque si, pese a todo, lo que tiene en mente el Gobierno es dedicar las próximas semanas a castigar más la cartera y los derechos de los ciudadanos con recortes hasta ahora inimaginables, solo va a lograr sumar más desafección y poner en riesgo su continuidad con un abandono masivo de votantes, por cierto, casi en vísperas de las elecciones gallegas. Y aun más que eso: a la vista está que por este camino incluso ha entrado en riesgo la pervivencia del propio sistema y de la paz social.

España no quiere ni debe seguir la suerte de los desdichados griegos. Está en la mano de sus gobernantes evitarlo. Y en la de los ciudadanos, exigirles responsabilidades.

Cortar por lo insano

28-06-2012. En este artículo, el editor de La Voz sale en defensa de la clase media y de la gente esforzada sobre la que Gobiernos de distinto signo han hecho recaer la factura de la crisis y critica el dispendio que supone la superposición de Administraciones públicas, que han desembocado en un Estado insostenible. Da una relación de las instituciones obsoletas, como las diputaciones provinciales o el Senado, generadoras de unos gastos insoportables para el contribuyente, al que se le suben los impuestos y se le recortan los servicios públicos.

En su empeño por sostenerlo y no enmendarlo, el presidente del Gobierno ha vuelto a lanzar un nuevo alegato contra la clase media. Con su habitual estilo, se ha limitado a decir hace apenas unas horas que vendrán más medidas duras y difíciles, pero se ha negado a concretar qué nuevas penalidades va a exigir a la población. Y mientras, los líderes del PSOE —ahora parapetados en su agujero— esperan el fatal anuncio mirando hacia otro lado, más pendientes de sacar rédito de las encuestas electorales que de los problemas reales que sufren hoy los ciudadanos.

Triste para España. Pero nada sorprendente en la forma de actuar de quienes han venido malgobernándonos desde que comenzó la crisis, hace ya cinco años, hasta llevar el país a la deriva.

El solo anuncio de semejantes presagios, después de todo lo ya vivido, revela la absoluta falta de perspectiva con que actúan los supuestos líderes, que han decidido pasar toda la factura, sin contemplaciones, a la gente esforzada, en lugar de rectificar y corregir los desmanes que ellos mismos han generado y alimentado hasta construir un Estado insostenible.

Ni uno solo de sus torpes movimientos se ha dirigido hasta ahora a favorecer la creación de empleo y riqueza. Y ni una sola de sus medidas ha apuntado al verdadero corazón de los desajustes, que no es otro que el exceso de gasto, despilfarro e ineficacia en el hipertrofiado aparato de las Administraciones públicas.

Si de verdad se tratase de reformar el país para hacerlo competitivo, mucho antes de tocar la sanidad, la educación y los servicios sociales habría sido necesario

plantearse un modelo de Estado propio del siglo XXI, en lugar de seguir acrecentando, parche tras parche, una herencia decimonónica fundamentada en el disfrute del poder más que en el servicio a los ciudadanos.

Basta aproximarse someramente a algunas cifras para entender el dislate que se está produciendo en España por los excesos de una organización política insoportable.

Cuenta el país con más de 70.000 políticos. Todos juntos formarían una mediana ciudad, a la que habría que sumar como residentes no siempre bien censados a la pléyade de asesores, técnicos y cargos de confianza de que se dotan para ejercer sus funciones, casi siempre electoralistas. En ese grupo aparecen los 1.184 diputados de los Parlamentos autonómicos, que cobran entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, aunque hay casos en que llegan a los 9.000. El coste global de esas Cámaras territoriales se acerca cada año a los 400 millones de euros.

Con esas cifras, ni los diputados ni los partidos políticos parlamentarios, que en el primer trimestre del año ya han percibido 17 millones de euros en subvenciones, son capaces de hacer creíbles sus discursos sobre la crisis, porque sus caras de circunstancias se antojan falsas, tan alejados como están en su comportamiento de lo que demandan al resto de los ciudadanos.

Si tomasen en serio los problemas que padece España, sabrían que hay instituciones obsoletas que pueden borrarse de un plumazo con el consiguiente ahorro para las arcas públicas. Como las diputaciones provinciales españolas de régimen común, que cuentan con unos ingresos anuales de más de 6.200 millones de euros.

En el caso de Galicia, estas instituciones predemo-

cráticas aportan, además, ejemplos culminantes de derroche, como se observa en la creación de hipódromos, el mantenimiento de pazos, castillos y fincas, o la contratación irracionalmente exagerada de personal, como sucede en el caciquil caso de Ourense.

Por si fuese poco, Galicia cuenta con 315 municipios (siete más que todo Portugal), muchos de ellos incapaces de atender sus propias necesidades de funcionamiento. Cerca del 40 % no logran ingresar por sus servicios ni la mitad de lo que se les aporta desde los presupuestos del Estado y de la Xunta.

Las comunidades autónomas, resultantes en tantos casos del irracional *café para todos*, se han convertido en el gran sumidero de los impuestos de los contribuyentes, con presupuestos que —salvo las de menor población— rondan o superan los 10.000 millones anuales, hasta llegar a cifras como los 16.000 de Madrid o los 32.000 de Andalucía y Cataluña.

Gran parte de ellas generan deudas inasumibles, como los 41.800 millones de Cataluña, los 20.800 de Valencia, o los 7.000 de Galicia. En total, la deuda reconocida por las comunidades autónomas en el año 2011 superó los 140.000 millones.

Algunas de ellas, enfrascadas en su política narcisista, continúan incrementando su ego abriendo supuestas embajadas privativas, como si no fuesen ya suyas todas las que España tiene en el mundo, por cuyo cuerpo diplomático pagamos decenas de millones de euros al año.

Una cantidad considerable, desde luego, pero escasa si se compara con todo lo que nos cuesta la macroburocracia de la Unión Europea, que se ha convertido en el laberinto más intrincado y más caro del Viejo Continente.

Todo para que podamos asistir en directo a los ataques que nos dedican altas personalidades, como el español Joaquín Almunia, tan irreflexivo que no es capaz de comprender que sus declaraciones —calificadas por algunos como terrorismo económico— solo contribuyen a acrecentar el pánico dentro y la desconfianza fuera.

Pero al gigantesco despilfarro europeo todavía hay que sumar más derroches domésticos. Como los que se dilapidan en propaganda. No de otro modo se puede calificar el dispendio insostenible que generan las televisiones autonómicas, que viven confortablemente obesas alimentadas por el dinero extraído del bolsillo de los contribuyentes. Entre todas, consumen cada año 1.200 millones. Los canales catalanes se llevan 260 millones de financiación pública, la andaluza otras 200, y la gallega, cerca de 100 millones.

Junto con todo esto, no faltan otras partidas menores pero fácilmente reducibles. Desde la inoperante cámara del Senado —que cuesta 55 millones anuales— a los defensores del pueblo en las comunidades autónomas. Algunos, como el vasco y el catalán, tienen presupuestos de 4,7 y 7 millones, en tanto que el gallego consume 2.

Solo con aplicar racionalidad en algunas de las partidas enumeradas, el Gobierno podría haberle ahorrado a los contribuyentes una parte mucho más grande que todo lo que pretende conseguir empobreciendo el acceso a la sanidad, a la educación y a los imprescindibles servicios sociales.

Pero ni el Gobierno anterior ni el actual han tenido el coraje de actuar donde se hace evidente la necesidad. En lugar de racionalizar el modelo y acabar con el sobrecoste que han generado políticas electoralistas y prebendistas, se

han empeñado en buscar más ingresos con mayores exacciones y recortes, atacando siempre las debilitadas expectativas de la clase media. El último y más sangrante ejemplo es la injusta subida del IVA que se nos anuncia como inminente e inevitable.

Puestos a buscar ingresos, en lugar de promover la amnistía fiscal para los que han eludido sus obligaciones, bien podría el Gobierno exigir el pago de los impuestos a los que se aprovechan de su situación de inexplicable privilegio, como ocurre con los clubes de fútbol, que deben entre todos nada menos que 750 millones a las arcas de Hacienda. O hacer afrontar las consecuencias de sus actos a los responsables de la quiebra del sistema financiero — desde los pésimos supervisores del Banco de España hasta los exdirectivos de entidades arruinadas—, en lugar de dejarlos irse tranquilamente a sus casas a disfrutar de jubilaciones millonarias.

Ahí, y no en los trabajadores de la empresa privada y en los maltratados funcionarios, es donde es preciso actuar. No se trata de recaudar decenas de miles de millones exprimiendo todavía más a la sociedad. Se trata de acabar con el disparate en que han devenido las estructuras políticas. De cortar justamente por lo insano. No hacerlo es ya mucho más que torpeza o negligencia. Es un caso de lesa patria. Y los ciudadanos no lo olvidarán.

Al borde de la insumisión

13-07-2012. El presidente del Gobierno anuncia en el Congreso el 11 de julio del 2012 el mayor ajuste económico de la democracia, con un paquete de recortes de gasto y subidas de impuestos con el que el Gobierno pretende ahorrar 65.000 millones de euros en dos años y medio: subida del IVA, recorte del subsidio de desempleo y retirada de la paga extra de Navidad a los funcionarios, entre otras medidas. El presidente y editor de La Voz no tarda ni 24 horas en reaccionar: «Quienes desgobiernan así son los únicos culpables de que cada vez seamos más los que nos sentimos insumisos políticos».

Empujado por un poder distinto del que le otorgó con todo mérito la soberanía nacional, el presidente del Gobierno se ve hoy en la obligación de afrontar la peor crisis económica (y también social y política) que le ha tocado vivir a España desde la transición.

No es precisamente gozoso gobernar en medio de semejante tempestad. Nadie puede arrendarle la ganancia. Porque, como suele pasar cuando sobrevienen cataclismos como el que estamos viviendo, el triunfador de las elecciones tiene que olvidar sus buenos deseos, retorcer sus promesas e incluso negarlas para hacer lo contrario de lo que propuso.

Pero reconocer de entrada la dificultad del momento no quiere decir en absoluto que se pueda coincidir mínimamente con la presunta solución que ayer propuso el presidente del Gobierno y hoy, si nadie lo remedia, consumará en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, habría que cuestionarse si tiene España que someterse a los dictados de quienes actúan solo por su propio interés, sea desde los grises despachos de Bruselas, los funcionales de Berlín o los lujosos de la City londinense y otras capitales del mundo.

Ni la Unión Europea, ni Alemania ni los famosos mercados están legitimados para imponerle a España una especie de suicidio económico y social. Porque los términos en que se está planteando —como ya le sucedió a Grecia y a Portugal— no son de ayuda, sino de usura.

Y si en el contexto europeo es inevitable someterse a semejante disciplina (que no es otra que socializar la miseria a marchas forzadas), un buen gobernante tiene la

obligación de buscar alternativas con una sola finalidad: preservar al máximo los derechos, la forma de vida y las sanas expectativas de sus ciudadanos. Los políticos están para resolver problemas; no para agrandarlos.

Pues bien: se ha hecho todo lo contrario. Lo que el miércoles anunció Mariano Rajoy a los españoles —por decirlo de una forma elegante— no es de recibo. No debiera esperar aplauso, desde luego; y ni siquiera comprensión, por mucho que se hagan tantos esfuerzos en las opiniones publicadas.

De ningún modo puede compartirse que tengan que afrontar semejante factura tres o cuatro generaciones de españoles, mientras se regodean en sus poltronas los verdaderos causantes de la bancarrota del sistema financiero y del despilfarro continuo del dinero público.

Basta poner el ejemplo de la gestión de Bankia, contemplar el desahucio de una familia en paro o asistir a una manifestación de los pequeños ahorradores atrapados con trampa en las preferentes, para preguntarse por qué los que originaron este enorme daño a la sociedad se escabullen sin dar cuentas.

Del mismo modo, mucho antes de blandir el bisturí —como hace ahora este Gobierno, y antes el de infausto recuerdo—, habría que haber analizado con rigor dónde están las vías de fuga que vuelven insostenible el gasto público.

Si de verdad se quisiera ver, no llevaría mucho tiempo constatar que la dilapidación tiene su origen en la exagerada hipertrofia de las estructuras políticas. Ayuntamientos incapaces de sostenerse, diputaciones carentes de utilidad, comunidades autónomas creadas para engordar a la clase política, ministerios vacíos de contenido, instituciones

acomodadas en el boato, televisiones públicas infladas en varias capas por cada gobierno de turno para asegurarse su propaganda.

Ahí es donde ni siquiera ha entrado el bisturí del Gobierno. Sin embargo, ha cortado sin contemplaciones en el único tejido sano que tiene España: su gente, su clase media.

El poder no se ha atrevido con los que tienen poder, pero sí con los que no lo tienen.

En primer lugar, ha hundido a toda la población haciendo subir el IVA justo cuando más detenido está el consumo. Es tal la aberración (por lo que tiene de contradicción con los cacareados objetivos de crecimiento y creación de empleo) que hasta algunas grandes empresas que tienen la fortuna de poder aguantar ya han anunciado que no lo repercutirán a los consumidores.

Junto con ese castigo general a la economía de la clase media, el Gobierno se ha aplicado para hacer aún más daño a quienes menos lo merecen.

Retira la paga extra de Navidad a los empleados públicos, quizá el sector más injustamente tratado por este Gobierno y el anterior. El médico que atiende en la Seguridad Social, el profesor que se encarga de educar en el colegio público o en la Universidad, el bombero, el policía y todos los que sirven a los ciudadanos, despreciados una vez más por quienes deberían motivarlos.

Reduce las ya de por sí exiguas e incompletas ayudas de la ley de dependencia, y envía al fondo del pozo a quienes tienen que atender a familiares impedidos, aun a sabiendas de que esa es la peor situación para poder conciliar las obligaciones personales con un trabajo.

Quienes lo han perdido o pueden perderlo son hoy el eslabón más débil de la sociedad. Y para ellos también ha habido más bisturí, dado que se reduce el seguro de desempleo. Con los parados, son los pensionistas los que quedan en peor situación, ya que el IVA en productos básicos no distingue edades ni situaciones personales, y el copago farmacéutico les exprime lo que no tienen.

Tamaño ataque a la línea de flotación de la clase media no se arregla de ningún modo. Ni siquiera incluyendo en el paquete otras medidas menos insensatas, como rebajar el número de concejales (aplazado al aún lejano 2015), o recortar las subvenciones a partidos y sindicatos en vez de eliminarlas. Tampoco con el gesto a la galería de bajar el sueldo de los ministros y altos cargos.

Si hoy se consuman todos estos duros hachazos a la vitalidad del país, nadie debería extrañarse de que se produzca no ya el desafecto general hacia los gobernantes actuales y anteriores, sino algo peor. Cada vez está más presente entre gente buena y civilizada la idea de que los políticos que les piden el voto terminan traicionándolos. Por eso crece el sentimiento de insumisión.

Lo cierto es que quienes des gobiernan así son los únicos culpables de que cada vez seamos más los que nos sentimos insumisos políticos.

Mejor les sería revocar urgentemente estas aberraciones.

O si no pueden o no quieren, irse ya a descansar a casa.

¿Consentirá esto España?

21-09-2012. Santiago Rey constata aquí que ni una sola de las medidas que se aprueban en cada consejo de ministros sirve para devolver el pulso y la confianza a un país moribundo. Afirma que España no puede consentir que se destroce su vitalidad y se la empobrezca cada vez más. Los gallegos han sido llamados a las urnas para un mes después, en medio de un ambiente de desencanto. El autor del artículo reclama a los candidatos que expliquen sus verdaderas intenciones, para que los votantes no vuelvan a sentirse traicionados.

Cinco años después del comienzo de la crisis más aniquiladora que recuerdan generaciones, y apenas a nueve meses de la toma de posesión del Gobierno, los españoles han perdido ya toda esperanza en encontrar una sola mano valiente capaz de cambiar la dirección que nos lleva irremisiblemente a la derrota.

Metidos en la niebla, carentes de verdaderos líderes y sin nadie que aporte ideas, los españoles ven hoy que van en rumbo de colisión, seguros ya de que se aproximan más a la catástrofe. Y seguros también de que será irremediable, porque quienes tienen en su mano el timón han confundido su destino.

Fueron elegidos para corregir con energía el desastroso error con que castigaron a la sociedad anteriores gobernantes, quienes, con su perversa actuación, secaron la economía y agotaron las ansias del pueblo. Pero en cada consejo de ministros se demuestra que ni una sola de las medidas que se aprueban sirve para devolver el pulso y la confianza a un país moribundo.

Las finanzas públicas —insuficientes para atender las necesidades del Estado— empeoran a pasos agigantados, con intereses tan altos que resulta imposible pagarlos y se retrasan como regalo envenenado a las próximas generaciones.

Las empresas ven hundirse su economía en prácticamente todos los sectores, porque, en contra de la propaganda oficial, ni una sola medida ha contribuido al crecimiento de la actividad y del consumo.

Las cuentas de las familias se han destrozado ya, imposibles de cuadrar por la caída de ingresos y la falta de

trabajo y oportunidades para gran parte de sus miembros.

Los jóvenes sufren el drama de prepararse a conciencia para nada. O de emigrar como sus abuelos. Los adultos que aún conservan empleo asisten acongojados a las insalvables dificultades de sus empresas. Los que han entregado su carrera al servicio público en la Administración se sienten maltratados en su nómina y en su imagen. Los millones de personas que tienen la desgracia de haber caído en el paro sufren como nadie el presente y temen más que nadie el futuro. Y por si todo esto fuera poco, los que viven de su trabajada pensión o están a punto de hacerlo tienen pánico a lo que pueda pasar en cualquiera de los próximos consejos de ministros, porque temen que de allí salga para ellos un trato tan injusto como intolerable.

No se puede arrojar más agua hirviendo ni más calamidades sobre una población de más de cuarenta y siete millones de personas que de ninguna manera se ha merecido esto. Ha sido siempre comprensiva, se ha mantenido serena, ha creído todas las mentiras que le han ido contando y ha confiado en quienes le pedían apoyo. No aguanta más. Se palpa en la calle, en cualquier conversación, y se palpa en la vida pública, excepto en los confortables coches, aviones y despachos oficiales.

Porque esa población maltratada observa a diario cómo se le recortan prestaciones, derechos y conquistas que nos han hecho un país civilizado; cómo se le encarecen los productos y los servicios básicos; cómo se le vacía la cartera con impuestos y exacciones. Y cómo prevalecen los privilegios en el tejido de las Administraciones públicas y el aparato que han creado en su exclusivo beneficio los políticos.

Ven también cómo la ley les presenta una doble faz: la dura para sus derechos y aspiraciones legítimas y la blanda para los que rodean el poder, sean las exigencias de Gobiernos como el catalán o los privilegios de políticos y grandes corporaciones que se empecinan en fijar las reglas del juego, por encima incluso de lo que establece para todos la Constitución.

Miles de chiringuitos inútiles con nóminas bien infladas. Despilfarro de centenares de millones en vacía grandilocuencia monumental. Hiperinflación de puestos a sueldo del erario. Descomunales aparatos de propaganda emitiendo veinticuatro horas al día. Cámaras, instituciones y organismos que no aportan más que prebendas y gastos suntuarios, incluidos los de los traductores vernáculos. Lujos en un país desangrado. Episodios continuos de corrupción. Ese es el retrato que se puede hacer hoy de esta España que desde la transición esperaba mejor destino.

Y todo esto, ¿tiene culpables? Desde luego. Con nombres y apellidos.

Lo fueron, y no han pagado ni un solo desperfecto, quienes tomaron en sus manos un Estado con superávit, nos hicieron creer que íbamos a ser más grandes que Italia y Francia y agotaron irresponsablemente nuestros recursos. Aseguraron que nuestro sistema financiero era el más seguro de Europa y lo despellejaron hasta dejarlo irreconocible. Anunciaron que pronto se acabaría con el paro, y con su política enviaron al desempleo a millones de personas. Todo eso le deben los españoles al bienintencionado Gobierno de Zapatero, a los sindicatos e incluso a algunos presidentes autonómicos que agrandaron el problema cuando aún tenía remedio.

Zapatero no quiso ver el abismo y llamó antipatriotas a quienes le advertían de su absoluto alejamiento de la realidad. Y se fue sin rendir cuentas, bien premiado con un estupendo puesto en el Consejo de Estado.

Entonces, los españoles entregaron una fornida mayoría absoluta a quien le llamaba incompetente, quizá pensando que él no lo sería. Pero no han hecho falta más que unos meses para comprobar que el gallego templado e inmutable tiene sus preocupaciones lejos de las de los españoles.

Triste es ver cómo Mariano Rajoy ha dejado de gobernar y ha pasado a ser gobernado. Gobernado por quienes nunca lo eligieron: ni los anónimos y depredadores mercados ni Angela Merkel y sus jaleadores ni la troika que nos amenaza continuamente con los hombres de negro como en una pesadilla infantil. Realmente, España no debería consentirlo.

España no puede consentir que se destruya su vitalidad y se la empobrezca cada vez más, para dejarla como esclava, pasando penalidades, al servicio de los que imponen los ajustes, pero no se someten a ellos.

España no puede consentir que se la relegue al vagón de cola de Europa y que sea pasto de los mismos usureros que están hundiendo en la miseria a Grecia y a Portugal.

España no puede consentir volver a las peores épocas de su historia, desangrada por los antagonismos, enfrentada, rota toda solidaridad interna, entregada al caos.

La política ciega que ha emprendido el Gobierno en contra de la propia fortaleza del país es, sobre todo, una inversión en divisiones y una siembra de odios que ya parecían superados para siempre. Basta ver la exacerbación que se vive estos días en Cataluña y la grotesca liberación de Bolinaga para entender que España corre riesgo de fra-

casar. Lo hará si no se fortalece la idea de que la acción política tiene que dirigirse primordialmente al progreso de los españoles, y no a su bancarrota o su división. No sería para felicitarse si volviesen de nuevo los rencores y los vetos a los productos catalanes, que ya produjeron consecuencias tan nefastas.

Llevar al país, como se está llevando, por la senda de la desesperanza y la confrontación solo trae consecuencias trágicas. Desde la conflictividad social a la aparición de falsos mesías y cínicos redentores que intentan beneficiarse de la situación y engañar a los ingenuos haciéndoles creer que se mueven por el interés de la gente cuando lo hacen exclusivamente por el suyo.

Ahora los gallegos han sido convocados nuevamente a las urnas, en medio de un desencanto con los políticos jamás vivido en democracia. Y no tienen fácil su decisión. Como dice el propio Feijoo, tienen que elegir entre darle a él una segunda oportunidad o volver al bipartito, pese al infausto recuerdo que dejó.

Dentro de un mes, los ciudadanos de Galicia podrán hablar y dar su veredicto, si se animan a participar en la tan decepcionante vida pública actual. Pero antes es el turno de los candidatos. Son ellos los que deben reflexionar y explicar con claridad qué proponen para torcer este destino fatal al que ellos mismos nos han abocado. Tienen esa obligación con todos los ciudadanos, como tienen la obligación de decir la verdad. Debemos saber cuáles son sus verdaderas intenciones, para que los votantes no vuelvan a sentirse traicionados, como ha sucedido con el que prometía no subir el IVA. Ahora asegura que no tocará las pensiones, pero cada vez se hace más difícil creerle.

Son los que aspiran a gobernarnos los que deben merecerlo. Y para ello es imprescindible que se comprometan a cambiar radicalmente la política que destruye por la que construye. La que nos lleva de cabeza a la ruina que ya experimentan nuestros vecinos por la que nos haga retornar al único camino que debe recorrer un gran país. Acabar con la contracción y empezar el crecimiento.

Es la hora. Ya no hay tiempo. Galicia y España no pueden consentir de ninguna manera lo que está pasando.

Y si los que gobiernan, del primero al último, con toda la información que poseen, creen que no tienen otra alternativa que seguir demoliendo la casa de los ciudadanos, será mucho mejor que abandonen ya. Inmediatamente. Mientras no cambien, no los necesitamos ni los queremos para nada.

Contra la descomposición social

15-02-2013. El panorama que ofrece el país es desolador. «Donde había negocio, hay quiebra. Donde había trabajo, desempleo. Donde había oportunidades, desierto. Donde había creatividad, desánimo. Donde había esperanza, miedo. Donde había actividad, vacío. Donde había optimismo, desazón», escribe el editor de La Voz de Galicia, que señala las urgencias del país, entre las que destaca la limpieza de la vida pública y el cambio económico. Concluye prometiendo que La Voz estará siempre con quienes, en medio de la tempestad, luchan por salvar el barco.

Rodando cuesta abajo desde antes de que comenzase la crisis, la bola de nieve de la traición a los españoles ha ido creciendo hasta alcanzar proporciones de lesa patria. Mientras se recetan empobrecimiento y calamidades para la sociedad, la clase política desmerece a su pueblo, enzarzada en los más sucios juegos que anidan en los alrededores del poder y ahora abandonada del favor de la opinión pública.

Es tan bochornoso el espectáculo que presentan que de nuevo surge, como un fantasma, la negativa idea que afloró en los tiempos de la dictadura, cuando muchos se avergonzaban de su nacionalidad. Se avergonzaban no por España, no por los españoles; sino por no querer verse en la misma foto con los que manchan con sus acciones el nombre de su país cada día.

Lo manchan con su injustificable conducta hacia los demás, destrozando el poco músculo sano que le queda al cuerpo social, y lo manchan con el bochorno de su peculiar vara de medir cuando se trata de mirar hacia sí mismos.

En estos años de suicidio económico y político los españoles han visto y sufrido el peor de sus declives desde la llegada de la democracia.

Primero les tocó padecer la crisis financiera, con la desaparición del crédito a las empresas y las familias. Luego tuvieron que rescatar a los bancos con sus impuestos, e incluso pelear por impedir que destruyesen los que estaban más integrados en el territorio, dado que alguien decretó que le estorbaban. A continuación vino, en un castillo de naipes, la muerte de sectores enteros, como el inmobiliario o la obra pública. En seguida, la

brutal retención del consumo —que aún continúa agravándose—, por la falta de liquidez de los ciudadanos y las empresas.

Con ello, el derribo de parte de lo conquistado en sanidad, educación y servicios sociales, el sacrificio de los empleados públicos, la caída del comercio, las rebajas de los salarios en todos los sectores, las quiebras y cierres de empresas antes perfectamente sanas, la asfixia de los autónomos, la destrucción de grandes sectores productivos, como el campo o el naval, los impagos, las preferentes, los desahucios. Y como resumen de todo este destrozo, millones de parados.

Millones de personas que no pueden ganarse la vida con su trabajo es la mayor tragedia social que ha vivido España desde la posguerra. Se ha expulsado a la exclusión a generaciones enteras, con casos especialmente sangrantes, como los de los adultos que tienen muy difícil regresar al mercado laboral, y, sobre todo, los jóvenes que, después de haber adquirido la mejor preparación que se haya dado nunca en España, son enviados a la misma papelera donde terminan sus brillantes currículos.

Ese es, pintado someramente, el cuadro que hoy presenta el país. Donde había negocio, quiebra. Donde había trabajo, desempleo. Donde había oportunidades, desierto. Donde había creatividad, desánimo. Donde había esperanza, miedo. Donde había actividad, vacío. Donde había optimismo, desazón.

Todo ha cambiado desde que en el 2007 algunos advertíamos ya de lo que se venía encima, mientras otros, bien instalados en el poder, hacían juegos malabares con las palabras y no solo se negaban a ver el iceberg, sino

que presumían de habernos regalado la economía más sólida de Europa. No fue solo una equivocación: es casi un delito haber dejado caer el país hasta el fondo del pozo, y seguir empujándolo ahora un poco más abajo con cada decreto-ley.

Hoy, todo está desmoronado o en trance de hacerlo. Ni la institución de la Corona se ha librado de los desmanes y del declive, a merced de aprovechados que perdieron el sentido de servicio y el respeto por la responsabilidad que se había puesto en sus manos. Donde se mire, aparecen casos y más casos de este derribo de la ética.

No se encuentra en el comportamiento de los partidos políticos —sean del color que sean—, naufragos hoy en el mar de la corrupción. No aparece tampoco en las organizaciones sindicales, financiadas con dinero público sin control, pese a que algunas se han apuntado irreflexivamente a la política de cuanto peor, mejor. Tampoco se halla en los órganos empresariales, desacreditados por escándalos en cadena. Ni siquiera se observa en instituciones antes respetables, como el Poder Judicial o el Banco de España. Ni en quienes en altas instancias toman decisiones interesadas, como dejar al país sin Iberia o malvender empresas rentables por un euro.

En este tiempo de calamidad económica, corrupción política y asco social, todo ha cambiado a peor.

¿Todo? No. Todavía hay un sector bien nutrido donde no ha pasado nada. Donde el inmovilismo es total; el despilfarro, la norma, y las prebendas, moneda de curso alega. Es la Administración, que se ha convertido, por encima de su verdadero objeto, en el comodísimo refugio de la clase política.

Su estructura sigue intacta, su derroche no reconoce crisis —salvo si es para repercutirla en recortes a los ciudadanos— y los negocios que se generan a su sombra, por lo que se ve, permiten acumular grandes fortunas en paraísos fiscales.

Miles y miles de ayuntamientos con sus alcaldes y concejales, comunidades autónomas infladas de agencias y chiringuitos, órganos de propaganda política pagados con dinero público, instituciones redundantes que se solapan y se estorban, diputaciones que se dedican a repartir favores contados en miles de euros, Cámaras como el Senado absolutamente inservibles, donde sobran desde sus traductores a sus cargos electos.

Si en España se acometiese una reforma racional de la Administración, todo ese dinero que se esquilma al contribuyente para atender la usura de la deuda financiera podría ahorrarse sin que el servicio al ciudadano se resintiese en nada. Pero ese paso, tantas veces reclamado desde esta tribuna, parece aún muy lejos de darse. No interesa a quienes se lucran del estado actual, en el que tantos encuentran acomodo y mueven sus cuentas simulando que se esfuerzan por beneficiar a la sociedad.

Los últimos escándalos conocidos revelan muy a las claras el doble juego. Y avergüenzan a España entera. ¿Puede esperarse alguna vocación de servicio por parte de quienes amasan fortunas salidas, no del trabajo ni de la iniciativa empresarial, sino de las comisiones ilegales con las que se compran contratos que pagarán los contribuyentes?

Si la crisis económica ha traído al país la mayor calamidad en tiempo de paz, la crisis política que vivimos

amenaza con instalarnos ante el peor de los escenarios: el de la descomposición social.

No ha habido nunca en la historia nada más grave que esa fractura, porque rompe la solidaridad, hace aflorar antagonismos insuperables y es el caldo de cultivo perfecto para las mafias y los falsos salvadores que solo procuran su beneficio.

España debe curar sus dos heridas. La que ha traído la pobreza al país y la que ha acabado con la confianza en las personas elegidas para gestionar los asuntos públicos. Ya no es posible intentar arreglar una sin atender la otra. Y es urgente.

Es urgente limpiar la vida pública española haciendo responder de sus actos a quienes se hayan aprovechado ilícitamente. Es urgente dar la cara ante la sociedad y someterse al interrogatorio público. Es urgente que las principales fuerzas políticas del país inventen de una vez la palabra transparencia y se la apliquen en primer lugar. Es urgente que limpien sus casas y que las enseñen relucientes. Es urgente pasar página a los proyectos fracasados y renacer con caras nuevas y con ansias nuevas.

Es urgente reformar la Administración: acabar con las ineficiencias y el enchufismo y ponerla verdaderamente, menos obesa y más ágil, al servicio de los ciudadanos y sus iniciativas. Es urgente pulir la Constitución para acabar con los intentos secesionistas y las tensiones artificiales.

Y es urgente, sobre todo, impulsar el cambio económico. Dejar de seguir los dictados de los especuladores financieros, recurrir al talento que agoniza inane en el país y lanzarnos de nuevo a crear y ofrecer.

Ante tanta vergüenza, muchos han optado por darse de baja de toda esperanza. La gente noble, no. Y esta Casa estará siempre con ella. Denunciando y reclamando a los que incumplen o traicionan. Y abanderando siempre a los que, en medio de la tempestad y la mar arbolada, luchan por salvar su barco. Donde no solo van los que no lo merecen. También vamos nosotros.

Contra la paciencia

05-05-2013. Tras la quiebra económica y la quiebra de ideas llama a las puertas la quiebra social. Para remontarla se necesitan muchas virtudes, dice Santiago Rey, «pero entre ellas, aunque esto disguste al presidente del Gobierno, no está la paciencia». «No es paciencia lo que se le puede pedir hoy a España, sino inconformismo –añade–. No es cobardía ni pereza lo que se debe esperar del Gobierno, sino diligencia». El autor del artículo critica a los políticos porque son incapaces de fraguar lo que los ciudadanos demandan, un gran pacto de Estado para volver al crecimiento.

Un número, un clima y una palabra definen hoy el estado de la nación postrada. El número es el de seis millones de personas. El clima, el de la depresión, la estupefacción, el antagonismo y la rabia. Y la palabra, indescriptible, es paciencia.

¿Paciencia?

Inaceptable.

Desde que comenzó la etapa de destrucción social que se ha convenido en definir con el eufemismo de crisis, los españoles han dado exageradas muestras de resignación y de confianza. Se pusieron en manos de quienes prometieron atajar definitivamente la incompetencia de anteriores gobernantes y aceptaron sus fórmulas para sacar el país de la deriva. Pero todo lo que ha ocurrido desde entonces, por muy bien intencionado que fuese, no solo no ha servido para revitalizar la sociedad y la economía, sino que las ha condenado a una triple quiebra.

En primer lugar, una quiebra económica. Con la capacidad de financiación eliminada de cuajo y el consumo reducido casi a términos de supervivencia, la mayor parte de las empresas españolas, desde las pequeñas y medianas a las que en otro tiempo fueron sólidos imperios, luchan denodadamente por no cruzar las líneas rojas que llevan a la debacle. Muchas las han sobrepasado ya.

La consecuencia más visible y más sangrante para el país (aunque no la única) es esa inasumible cifra de seis millones de personas que no tienen posibilidad de hacerse cargo de su propia vida, porque su único capital —preparación, capacidad de esfuerzo, talento— es hoy inaccesible para las empresas, diezmadas por la abrupta caída de los ingresos.

En segundo lugar, padecemos una crisis de ideas. O si se quiere expresar más rotundamente, una crisis de valentía. Tanto este Gobierno como el anterior han aceptado obedientemente el dogma impuesto por la dictadura del euro (es decir, de Merkel) que consiste, sencillamente, en empobrecer más y más al pueblo para financiar la usura internacional y adorar el tótem de la reducción del déficit. Ni un solo estímulo, ni una sola disensión en la línea marcada por quienes viven ajenos a los problemas reales de la gente real.

Y a consecuencia de la quiebra económica y de la quiebra de ideas, llama a las puertas la peor de todas: la quiebra social.

La falta absoluta de perspectivas, unida a algunos errores inaceptables —como el fraude de las preferentes— y muchos comportamientos punibles —como las conductas corruptas de tantos políticos—, está haciendo fecundar el huevo de la serpiente. Tras la desafección que trajo consigo el inicio de la crisis, está ya amenazando el presente la ruptura de la cohesión social, como revelan cada día los enfrentamientos callejeros y la virulencia que empieza a reinar en los ámbitos públicos. Y eso, pese a que nuestra historia nos demuestra que la senda de la rabia y el odio es el peor camino que puede tomar una sociedad civilizada. Y el más rápido para dejar de serlo.

Luchar contra esa ruptura y remontar la triple quiebra debiera ser la prioridad nacional. Para ello se requieren muchas virtudes, pero entre ellas, aunque esto disguste al presidente del Gobierno, no está la paciencia.

Paciencia ya han tenido los ciudadanos viendo cómo se hunden sus expectativas, cómo crece el desempleo,

cómo se cierran comercios y empresas, cómo desaparecen sectores enteros, cómo se ejecutan desahucios, cómo emigran los jóvenes incluso muy preparados, cómo se recortan los sueldos, cómo se reducen las prestaciones, cómo se agotan las reservas en los bancos de alimentos.

Paciencia ya han tenido también viendo cómo se quedan sin discurso ni respuestas ni liderazgo los partidos políticos, cómo crecen los comportamientos intolerables alrededor del presupuesto público, cómo se cruzan los sobres y se usan las influencias, cómo se aprovechan los sindicatos y los que viven solapadamente del erario, cómo se protegen y se benefician los poderosos.

No es paciencia lo que se le puede pedir hoy a España, sino inconformismo. No es cobardía ni pereza lo que se debe esperar del Gobierno, sino diligencia.

Diligencia para hacer aflorar el crédito, el consumo y la producción. Diligencia para responder a las demandas de los españoles. Diligencia para cumplir el programa electoral, en lugar de traicionarlo con más subidas de impuestos y cerrojazos a la iniciativa privada. Diligencia para ahorrar de una vez reformando la aparatosa Administración, que se ha multiplicado por diecisiete y continúa creciendo hasta la deformidad, al tiempo que se enflaquece el servicio público.

Pero, en lugar de afrontar estos retos, tantas veces demandados desde esta tribuna, el presidente del Gobierno, sus pacientes ministros y no pocos Ejecutivos autonómicos prefieren contemplar solazadamente el huracán, mientras toman decisiones en la dirección contraria: engordan las diputaciones, mantienen el imposible mapa de ayuntamientos, toleran televisiones propagandísticas, engrosan

las nóminas de asesores, rebajan servicios útiles como el malogrado de la dependencia y, entre una decisión y otra, continúan incrementando la sangría al ciudadano.

Si el Gobierno y la desnortada y descabezada oposición se planteasen un compromiso real con España, deberían dejar de obsesionarse con sus verticales caídas en la intención de voto. Porque no resulta difícil descubrir por qué cada vez más votantes les huyen.

Los abandonan porque no aportan soluciones. E incluso muchos los identifican con el problema. Y lo hacen porque no los ven capaces de fraguar lo que todos demandan: un gran pacto para superar la situación de emergencia nacional. Un pacto de Estado que cohesione y redirija la acción política a un solo fin: volver al crecimiento.

Para ello se necesita diseñar una política común que favorezca la inversión y la contratación, con la vuelta del crédito, el ajuste de la fiscalidad y el estímulo al mercado interno y a la exportación. Se precisa también reformar a fondo la Administración para que deje de ser la pesada e ineficiente losa que los españoles soportan como contribuyentes y padecen como ciudadanos. Y repensar las leyes laborales para incentivar la contratación en lugar del subsidio.

Pero antes de las medidas concretas que desgranar a diario los expertos, el cambio más radical debe darse en la actitud de los agentes políticos. No es con puñetazos en el escaño ni con retórica triunfalista ni con anemia en la oposición como se contribuye a superar el desastre. Es necesario comprometerse a aunar las voluntades y trabajar el consenso. Dejar de medir la acción política con la moneda de la rentabilidad electoral y centrarla, por una vez, en el servicio al país.

Porque con cada empresa que cae, con cada trabajador que va al paro, la enfermedad de España se agrava.

Galicia, en concreto, lo vive cada día, con suspensiones de pagos que parecían impensables, sectores estratégicos agonizando en el mar, el campo y la industria, cierres masivos en el sector servicios y pérdida de poder adquisitivo en cada casa.

Los ciudadanos no pueden esperar más. Y el Gobierno y los demás agentes políticos deberían ser los primeros en entenderlo. Porque ellos son los primeros responsables del desastre.

Si aún no viven en la enajenación, deberían actuar. Ya. Urgentemente. Es imposible esperar más. Por eso es inaceptable la paciencia.

Donde no queremos vivir

23-03-2014. El presidente y editor de La Voz aborda aquí, entre otros temas, el de la corrupción. Señala que el espacio público, donde se gestiona en teoría el interés común, aparece colonizado por una multitud de indeseables que se dedican casi en exclusiva a sacar cada cual su tajada. «Nada puede haber de sano –escribe– en una sociedad en la que se han implantado como algo habitual y cotidiano el cohecho, el soborno, la prevaricación, la malversación, la falsedad y el tráfico de influencias». Considera que no es posible soslayar el derecho de la sociedad a poner freno a las prácticas corruptas.

Se ha dicho que la política es una profesión noble cuando se ejerce al servicio de los demás; y mezquina si se usa para el beneficio particular. A la vista de lo que hemos ido conociendo en los últimos meses, parece que ganan razón los que sostienen que la primera premisa ha caído en desuso. Porque nada más que mezquindad e intereses espurios aparecen cuando empiezan a levantarse las alfombras.

Si los jueces que investigan dentro de Galicia y fuera están algo en lo cierto, el panorama que nos presentan no puede ser más vergonzoso para la clase política, ni más desolador para quien se tenga por civilizado y demócrata.

Las grabaciones que se han ido conociendo en fechas recientes al levantarse en parte el secreto del sumario de la operación Pokémon muestran por sí solas el verdadero estado de necesidad que vive nuestra democracia. El espacio público, donde se gestiona en teoría el interés común, aparece colonizado por una multitud de indeseables que se dedican casi en exclusiva a sacar cada cual su tajada. Partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, órganos fundamentales para la sociedad, han traicionado su vocación y se dedican a exprimir en su provecho el dinero público. Los contratos de servicios y obras se disfrazan de legalidad, pero se diseñan para que quienes deciden adjudicarlos y quienes los obtienen irregularmente se enriquezcan a costa de los impuestos de todos.

Nada puede haber de sano en una sociedad en la que se han implantado como algo habitual y cotidiano el cohecho, el soborno, la prevaricación, la malversación, la falsedad y el tráfico de influencias. Donde los principios de igualdad y legalidad se subvierten a diario con tanta

ligereza que ya ni se disimula en las conversaciones telefónicas, como ha venido a poner en evidencia el trabajo pertinaz de algunos jueces.

Aunque esté siendo tan criticada estos días, la Justicia hace a los países libres. Podemos achacarle muchos defectos y rémoras, porque los tiene, y de ellos el principal es, sin duda, los largos e inasumibles plazos con los que trabaja. Tanto, que por eso mismo en muchas ocasiones se vuelve injusta, irracional y extemporánea. Se hace necesario no solo exigir urgencia en estos casos, sino atender a la dotación de medios para instaurar definitivamente la justicia rápida, que es la única verdaderamente eficaz.

Pero, pese a ese defecto en los tiempos, no puede haber reproche en que saque a la luz las miserias que grupos corrompidos quieren ocultar. Al contrario. La Justicia ejerce su función cuando, en lugar de mirar para otro lado, pide explicaciones, registra dependencias oficiales y persigue los delitos. Como se ha visto, ha aparecido ante la opinión pública tal maraña de intereses que en un solo sumario se cuentan ya casi un centenar de imputados. Independientemente de cuál sea el resultado final del proceso, tal cifra muestra a las claras la permeabilidad de buena parte de las corporaciones municipales al amaño y al complot.

Es cierto que las indagaciones en la fase de instrucción no predeterminan culpabilidad. Y que la palabra imputado ha adquirido un valor que la norma jurídica no le da. Pero ni una cosa ni otra son argumentos de peso suficiente para tratar de imponer el silencio. Todos los acusados tienen el derecho a defenderse. Y a la presunción de inocencia, que en nuestro ordenamiento jurídico no quiere decir otra cosa que la garantía de que cualquier acusación

ha de ser probada. Pero no es posible soslayar el derecho de la sociedad a poner freno a las prácticas corruptas. Y a exigir responsabilidades a quienes las hayan perpetrado.

Por eso no se entiende que los grupos políticos se muestren indulgentes y persistan en amparar con su inacción a quienes han hecho gala de comportamientos incompatibles con la gestión pública. Basta ver la zozobra en que ha entrado la corporación compostelana, o la pérdida de credibilidad de otros alcaldes y concejales para entender cuál es la principal causa de desafección de la sociedad con la clase política.

Es la principal, pero no la única. Los ciudadanos no solo han sido las víctimas de recortes en ámbitos tan sensibles como la sanidad y la educación; no solo han padecido una drástica caída de su poder adquisitivo, sino que han añadido a ello más empobrecimiento, con subidas de impuestos exagerados, pese a todas las promesas que se habían hecho de aligerar la carga social.

No se ha aligerado, sin embargo —más allá de algún gesto insuficiente—, el enorme coste de una Administración llena de duplicidades, que sigue instalada por inercia en la práctica del derroche.

Como constata este periódico al observar la evolución del gasto de la Administración central en los dos últimos años, casi la mitad de los ajustes han recaído sobre cuatro políticas de gastos: fomento del empleo, prestaciones y subsidios de paro, infraestructuras e investigación. Y las comunidades autónomas han retirado fondos también de algunas de estas partidas, pero han añadido al cadalso del Estado de bienestar nada menos que reducciones en sanidad y educación. Justo donde más necesario es dedicar

recursos para atender las carencias que la crisis ha generado en la población.

Mientras, el gasto superfluo se incrementa en toda España. Las comunidades autónomas mantienen costosas estructuras ineficaces. Las 38 diputaciones de régimen común distribuyen un presupuesto que se acerca a los 6.000 millones; es decir, al billón de las viejas pesetas. Y se producen duplicidades inexplicables, como once defensores del pueblo, doce consejos de cuentas, 132 oficinas autonómicas en el exterior, varios consejos consultivos a imitación del Consejo de Estado, cámaras sin función, como el Senado, y numerosos organismos que ejercen tareas redundantes con las del Estado.

Si de verdad se hubiese trabajado en la clarificación y simplificación de las Administraciones, haciéndolas complementarias, no solo se habría evitado un gasto inasumible, sino que se habría construido una función pública propia del siglo XXI. Solo la inacción, la falta de miras o los intereses electoralistas pueden explicar que se haya impuesto tan lenta velocidad de crucero en este capítulo de verdadero cambio estructural del país.

Embarcados ahora en la carrera para las europeas, es posible que de nuevo se le dé carpetazo a la racionalización de la Administración, puesto que las fuerzas políticas prefieren entregarse al populismo. Tanto, que ni siquiera se planteará en la campaña el verdadero debate sobre Europa, pese a que son muchos los que ven que el proyecto común, tal como está enfocado, va camino de un fracaso estrepitoso.

Quizá sea la obsesión por los resultados electorales lo que hace a los políticos huir de medidas racionales. De

otro modo, resulta imposible entender por qué no actúan ante problemas tan visibles y constatables.

No se entiende en España, por ejemplo, que las televisiones autonómicas consuman en un solo año 928 millones de euros para emitir programaciones que se alejan ostensiblemente de su finalidad.

No se entiende que se puedan sostener gastos ingentes y proyectos megalómanos con cargo al erario mientras un cataclismo recorre la economía gallega y le hace perder gran parte de los pilares que la hicieron sostenible.

No se entiende que se regateen los euros en los servicios indispensables de la comunidad, y se empobrezcan los servicios sociales mientras asistimos a la demanda desesperada de miles de familias que no pueden atender mínimamente la alimentación y el cobijo.

No se entiende que las empresas se vean forzadas a encarar el peor de los escenarios posibles con sacrificios impensables, o incluso sean impelidas a la liquidación, por el cierre de los mercados y las obligaciones fiscales, mientras endeudados clubes de fútbol se saltan alegremente las imposiciones tributarias y se permiten reclamar trato de favor para una gestión quizá acreedora a la responsabilidad penal.

No se entiende por qué miles de jóvenes tienen que abandonar su tierra a la fuerza, por falta de expectativas.

No se entiende cómo se puede dejar a su suerte al sector primario gallego, con la pesca en conflicto, la agricultura diezmada y la riqueza forestal esperando la próxima oleada de incendios, mientras las medidas correctoras apenas pasan nunca de la fase de proyecto.

No se entiende cómo los ciudadanos llenan todos

los días páginas informativas y programas de televisión con sus preocupaciones reales y los elegidos para atenderlas se dedican a convertir la sede parlamentaria en un indecoroso gallinero.

No se entiende que las ocupaciones de los representantes políticos se hayan alejado tanto de las reclamaciones de la gente de la calle.

Pero aún es tiempo de poner fin a la huida hacia delante.

Se requiere el coraje de cortar de raíz cualquier atisbo de corrupción y devolver la limpieza a los ámbitos políticos.

Se requiere la determinación de repensar el funcionamiento de la Administración y encauzarla hacia el dinamismo de la sociedad, en lugar de a coartar sus iniciativas.

Y se requiere abandonar el debate pueril basado en el menosprecio del rival y concentrar algún esfuerzo en la búsqueda de consensos para apoyar los sectores que son y serán durante muchos años el sostén de la economía gallega.

Se requiere, sobre todo, talla política y altura en los principios, que es lo que parece haber desaparecido de la escena.

Quizá aún tengan una oportunidad para recuperar la confianza los que creen que es posible, sano y provechoso vivir sin burocracia, sin juego sucio, sin confrontaciones irrelevantes y sin corrupción. Sería otra España, sería otra Galicia. Pero serían aquella España y aquella Galicia donde queremos vivir. Donde tenemos derecho a vivir. Y a ello siempre aspiraremos.

Pensemos

22-02-2015. La importancia del voto en un año con varias convocatorias electorales es el eje de este artículo. «Es preciso pensar», escribe Santiago Rey, para quien no es una cuestión menor lo que se haga con el voto: «El éxito o el fracaso de lo que vaya a venir corresponderá exactamente a quienes tienen la facultad de decidir: los electores». Considera que en Galicia y en toda España se requiere pensar en tres asuntos fundamentales que no pueden olvidarse en el instante de escoger la papeleta: la recuperación económica, la limpieza en la vida pública y la estabilidad y la convivencia en paz.

En estas horas críticas que nos toca vivir en Galicia, en España y en la propia Unión Europea, la confusión, el desánimo, la desafección y la rabia han hecho presa en el alma colectiva. Es un hecho que los españoles hemos perdido la confianza en todo lo que considerábamos sólido, y vemos cómo se desmorona, aparentemente sin remedio, el edificio de la esperanza.

La crisis económica, que ha hecho retroceder a gran parte de la población, ha desahuciado a los jóvenes y ha dañado como nunca a la clase media, está en la raíz del malestar que se ha instalado en la sociedad. Ni siquiera los primeros atisbos de la tan deseada recuperación, aún lejos de florecer, han hecho cambiar la percepción colectiva de que el país naufraga.

Muchas razones pueden aducir quienes sufren en su vida personal las nefastas consecuencias de la crisis. Los que han sido relegados al submundo del desempleo, los que ven recortarse sus ingresos o sus pensiones mínimas, los que han tenido que cerrar negocios y enterrar sus ilusiones. Los que no pueden conciliar el sueño ante los inexorables requerimientos de los bancos que no logran satisfacer, pese a que, como contribuyentes, tuvieron que poner miles de millones para rescatarlos mientras se recortaba en sanidad y educación. Es cierto que la realidad cotidiana para innumerables personas es penosa. Y que muy pocos pueden considerarse culpables de su suerte, pero sí víctimas de una situación que los sobrepasa.

España está huérfana. Pero hundirse en la depresión o quedarse en la simple actitud plañidera es un comportamiento nocivo del que solo se pueden extraer consecuen-

cias estériles. Es necesario mirar hacia delante, plantearse retos de superación, tomar de nuevo la iniciativa, no darse jamás por derrotados. Y, como he dicho tantas veces, exigir responsabilidades. No permitir que las conductas negligentes o criminales queden impunes, ni que las temerarias nos arrastren.

Los políticos —unos por acción, otros por omisión— han sido en los últimos años actores principales en el drama colectivo, y han hecho en muchos casos un papel deleznable, ya que jamás se había asistido a un divorcio tan enojoso y difícil de reconciliar entre el pueblo y sus representantes. Pero ahora, con varias convocatorias electorales en la agenda de este año, entran en acción otros actores: los ciudadanos; los verdaderos protagonistas.

Si la responsabilidad de lo que hemos vivido reca-
yó en gran parte en quienes fueron investidos para pilotar los asuntos públicos, desde el momento en que se abran las urnas el éxito o el fracaso de lo que vaya a venir corresponderá exactamente a quienes tienen la facultad de decidir: los electores.

Por tanto, no es una cuestión menor lo que se haga con el voto. No puede tomarse a la ligera, ni someterse a la emoción, ni condicionarlo al impulso vengativo, ni dejarse llevar por la reacción airada.

Es preciso pensar.

Aprendiendo del pasado, desde luego; pero, sobre todo, meditando con mucha atención en las metas que nos proponemos. En la Galicia y la España que queremos. Porque está todo en juego. Desde las cuestiones básicas del Estado de bienestar hasta el crédito internacional, sin olvidar en Galicia la depauperación de sus principales sectores pro-

ductivos. Pero, aquí y en toda España, se requiere pensar en tres asuntos fundamentales que no pueden olvidarse en el instante de escoger la papeleta. Uno es la recuperación económica. Otro, la limpieza en la vida pública. Y el tercero, de importancia capital en este momento, la estabilidad y la convivencia en paz. Porque nunca desde la restauración democrática ha habido en España un peligro tan inminente de ruptura, de quiebra social, de antagonismo entre iguales.

No puede decirse que los partidos tradicionales, sobre los que se ha edificado la democracia, estén exentos de culpa. Además de sus errores en el Gobierno y la oposición en la gestión de la crisis, han demostrado la mayor ineptitud en el control de las prácticas corruptas. Han estado más atentos a engordar su poder que a cuidar sus propios órganos y han dejado expandir las infecciones que hoy los corroen. Han permitido que en sus despachos proliferen las conductas delictivas y el ilícito lucro personal. Y eso debe ser censurado por los buenos ciudadanos y sancionado por la Justicia.

No es en absoluto admisible que salgan indemnes quienes en el PP, el PSOE, CiU y otras formaciones políticas y sindicales están gravemente manchados por la corrupción. No es soportable que quienes acumulan fortunas en paraísos fiscales y cuentas opacas se burlen de la sociedad y salgan a pasear como si fuesen gente honorable. Y tampoco puede aceptarse que los dirigentes políticos intenten sacudirse sus responsabilidades aportando únicamente farraosas declaraciones de inocencia y ni una sola medida que ataje el latrocinio. ¿De verdad van a quedar impunes los robos perpetrados a todos los españoles? ¿Queda alguna posibilidad de otorgar confianza a quienes lo consienten?

Todos los grupos políticos que han permitido la corrupción están en deuda con los ciudadanos. Y obligados a reparar el daño.

Pero, en contra del lugar común tan impuesto hoy por el pensamiento débil, los partidos, si están limpios de corrosivas adherencias, son la clave sobre la que se edifican la vida pública y el destino del Estado. Si realmente buscan el respeto de la sociedad, han de depurarse, rehacerse, renovar personas y poner sobre la mesa ideas nuevas y programas concretos. Es urgente, porque ya prácticamente no les queda tiempo.

El Partido Popular, que ha asumido desde el Gobierno el coste de la crisis, hará mal si se limita a presumir de una obra cierta, pero sesgada e incompleta. Porque aún faltan verdaderas medidas reformadoras, como la reducción de la Administración, que ahorraría miles de millones en las cuentas públicas y la haría mucho más eficiente.

Y en el plano electoral, hará mal el PP en Galicia y en toda España si solo confía su estrategia a advertir del peligro que traen otros —las elecciones del miedo—, en lugar de apartar a los corruptos y proyectar ilusión con una propuesta creíble. Hecha esta vez para ser cumplida, no para lanzar brindis al sol y olvidarlos luego.

No es solo en su caso donde se ha dilapidado buena parte del crédito político. Basta ver la parálisis y la auto-destrucción en que está inmerso el PSOE, desbordado por sus luchas intestinas, para entender el pesimismo de gran parte de la sociedad al comprobar cómo se desmoronan pilares que siempre fueron básicos en la democracia española. Flaco favor hacen al país quienes hoy se enzarzan en la batalla interna más ridícula e incomprensible y esconden la cabeza ante la corrupción que los mancha. Los

verdaderos socialdemócratas están llamados con urgencia a poner orden, a aclarar ideas y a fijar respetados liderazgos. Si no lo hacen, serán responsables no solo de decepcionar y abandonar a sus simpatizantes, sino también de dimitir de su responsabilidad como piedra angular ante toda la sociedad española.

No es menor el riesgo de fracaso en otras formaciones, hoy desorientadas o mudas de argumentos. Desde Izquierda Unida, que parece olvidar todos los esfuerzos de modernización que hizo hace años, a los numerosos nacionalismos —llámense BNG o Anova, PNV o Bildu, ERC o CiU— que solo recetan divisiones y son incapaces de alumbrar más ideas que la de la secesión.

Pero ningún fracaso puede ser más grande ni más peligroso que el triunfo del populismo demagógico e irracional. Se han visto sus efectos reiteradamente en el devenir de la historia.

Quienes basan todas sus expectativas electorales en los efectos de la rabia ciudadana saben muy bien —porque lo han estudiado en sus facultades— que nada bueno se puede construir desde la cólera. Y deberían saber también que el resultado puede que sea bueno para ellos y cuantos se les arrimen para aprovecharse arteramente del poder, pero resulta nefasto y suicida para un país que aprecia la libertad, la democracia, la estabilidad y la paz.

Si la casta tiene, ciertamente, muchas cuentas que pagar, la secta tiene mucho juego sucio que desvelar. No solo sus escandalosas connivencias con regímenes antidemocráticos; no solo sus corruptelas económicas, que los acercan a los que critican. También deben aclarar si en ese confuso magma en que se mueven disponen de un

proyecto definido y compartido que vaya más allá de las simples enumeraciones infantiles. Si saben cómo casar los términos gastos e ingresos, crecimiento y esfuerzo, libertad y seguridad jurídica, aspiración y obligación. Pero, sobre todo, si pueden prometer a los españoles algo más que humo y algún otro camino que no sea el de la calamidad.

Con todos estos actores políticos que reclaman el voto, más algunas opciones nuevas que pretenden captar la atención con propuestas alternativas, la próxima configuración de los ayuntamientos, y después del poder legislativo y el Gobierno, se presenta como un enigma inquietante.

Especialmente porque, en el ocaso de las mayorías absolutas, ninguno de estos grupos tiene el valor de indicar de antemano qué pactos está dispuesto a hacer. Y, por tanto, resulta imposible saber en qué medida van a desvirtuar sus programas por asegurarse una porción de poder.

Semejante forma de actuar no deja de ser otra emboscada al electorado, al que se le viene a pedir, en la práctica, que vote a ciegas. Y ya está bien de corromper la democracia. Los partidos, todos, deben cambiar radicalmente su forma de hacer política y empezar a jugar limpio con los votantes. Y los ciudadanos, exigiárselo, para que su voto sea verdaderamente consciente y plenamente útil. Pensemos. Solo así volverá a Galicia y a España la democracia que merecemos.

Votemos

22-11-2015. Faltaba un mes para las elecciones generales del 20 de diciembre del 2015 y había pasado una semana desde la cadena de atentados yihadistas que causaron un centenar y medio de muertes en París. El editor de La Voz de Galicia reflexiona sobre las amenazas que cercan a la sociedad y los grandes problemas de España, como el desafío secesionista en Cataluña. Concluye reclamando a los candidatos que se presentan a los comicios que expliquen qué van a hacer: «En qué se concreta su proyecto. En qué Gobierno entrarán. A quién apoyarán».

Los trágicos acontecimientos que vivimos desde la semana pasada, culminación del horror más execrable, han vuelto a mostrarnos con toda su crudeza no solo la fragilidad en que se mueven nuestras vidas. También la debilidad intrínseca de nuestra sociedad ante las múltiples amenazas que la cercan. Crecen agazapadas en nuestro sistema de libertades y se aprovechan de él para declararle la guerra. Los enemigos de nuestra cultura se ocultan entre la población civil, utilizan falsamente las palabras grandes, elaboran sueños delirantes en nombre de la justicia y descargan todo el odio contra inocentes. Lo hemos visto en París, de la manera más infame que pueda darse, y lo vemos, por desgracia, en muchos otros comportamientos humanos que parten del mismo lugar común: la deriva mesiánica.

Para combatir el odio, el antagonismo, la destrucción, es necesario, sobre todo, tomar conciencia de los peligros que nos acechan. Es preciso tomarse el trabajo de no dejarse llevar por las primeras impresiones y tratar de escarbar, de profundizar hasta descubrir los verdaderos intereses que se ocultan tras los gestos grandilocuentes. Hoy la sociedad está a merced de ellos. Son muchos actores los que intentan debilitarla, arrebatarle su poder y poner la democracia a su servicio. Por eso es necesario más que nunca desenmascarar los intentos espurios de quienes buscan su beneficio en la destrucción de la obra colectiva.

No faltan ejemplos en España. No es otra cosa más que destrucción y mesianismo delirante lo que se intenta fraguar en Cataluña. Una corta figura política, incapaz de resolver los problemas más cotidianos de la sociedad, como la sanidad o la hacienda, oculta sus deficiencias co-

mo gestor público erigiéndose en ridículo salvador de la nación, y empuja a su pueblo a rebelarse contra cuarenta millones de españoles que se han distinguido siempre por llevar la solidaridad instalada en el alma y dispuesta permanentemente en la nómina.

No está solo en su locura, es cierto. Ni siquiera la dirige él. Lo utiliza y lo empuja un grupo minoritario que apenas ha obtenido el 8% de los votos. Lo empuja y lo mueve como una marioneta, como se ha visto en la esparpéntica y por dos veces fallida sesión de investidura, donde no ha podido hacer más el ridículo aceptando una a una todas las ocurrencias y todas las imposiciones que le hicieron, por más descabelladas que fuesen. Solo le han jaleado su locura un medio tan manipulado como la televisión autonómica catalana, puesta vergonzosamente al servicio del poder —pues para eso fue creada—, y algún diario que tomó partido por la secesión y ha dejado de ser grande de España. Ahora, quizá tarde, se arrepiente y pide rectificación.

No. España no está rota. Está rota Cataluña, en manos de irresponsables, como sus actuales dirigentes, y aprovechados, como la *honorable* familia que se envolvió en la bandera catalana para tapar sus bolsas cargadas de billetes.

Como se ve en las encuestas y en los votos, son muchos los catalanes que han caído en la trampa de soñar un país idílico rompiendo sus lazos con España, cuando es este país el que da alas a su desarrollo económico y a su paz social. Pero, como se puede observar perfectamente aunque hagan menos ruido, son más los catalanes que saben que el hilo de la historia va hacia la unión solidaria, hacia el fortalecimiento en un proyecto común. Porque la

ruptura y el aislamiento solo señalan el camino del sufrimiento, del caos y de la destrucción.

Y aún así, la amenaza de los que se empeñan en apurar los pasos hacia el abismo es muy fuerte. Han acaparado el debate público de tal manera que marcarán irremediable e ilógicamente la próxima campaña electoral. Es necesario hablar de Cataluña, por supuesto, pero también es prioritario hablar de todos los problemas que afronta hoy España. Y, desde luego, del horizonte tan sobrecargado que tenemos ante nosotros los gallegos.

Porque Galicia corre el riesgo de pasar inadvertida en el escenario autonómico español, de minimizarse, en un momento en el que necesita el impulso definitivo que le haga salir de la vía muerta en que está. Como editor, asisto atónito a la pérdida de pulso de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestra política. Y no encuentro razones para consentirlo. Vengo expresándolo así desde hace años en las páginas de La Voz de Galicia y dejo constancia de este largo empeño en este libro.

Galicia, que ha sido siempre solidaria y emprendedora, no puede callar ante la destrucción de sus sectores estratégicos, ante la pérdida de sus fuentes de riqueza, ante la entrega de sus mejores talentos. La agonía del sector lácteo, mientras otros envidian su producción y su calidad; la fama indiscutible, pero mal rentabilizada, de sus materias primas; el abandono político a la pesca; la emigración de nuestros sectores punteros, desde la producción de energía a la innovación tecnológica. Y la marcha con difícil retorno de los jóvenes mejor preparados de los últimos años. Esos son, por no ser exhaustivo, solo algunos de los múltiples problemas que afrontamos. Y ahí es donde debe centrar-

se el debate interno, en lugar de las fatuas discusiones de twitter o de barra de bar en que nos hemos enzarzado. No se trata de saber quién proclama que representa mejor a Galicia, quién aparece más risueño en las fotos, sino en saber quién aporta más. Quién tiene un plan limpio, completo y coherente para apostar por un país que necesita, de una vez por todas, no perder el tren de la historia y ponerse en pie de igualdad, por fin, con sus hermanos. Porque con su cultura, su lengua, su historia y su contribución, Galicia no esperará nunca peor trato que ninguna de las otras nacionalidades que forman España.

Ese es el principio irrenunciable. Pero mientras la discusión se enrarece, los actores políticos se escabullen. Han pasado del mundo de las ideas al de la indumentaria, con el único objeto de aparecer atractivos ante los focos. Han pasado del programa de trabajo en común al personalismo narcisista. Han pasado de la reflexión a los gritos. Han despreciado más la claridad y se han refugiado en la confusión. Y es hora de saber qué piensan. Para qué nos piden el voto. Y qué harán con él.

En el tiempo en que se dan por desaparecidas las mayorías absolutas y el bipartidismo está en entredicho, es más necesario que nunca que cada uno de los que se proponen representar a los ciudadanos expliquen claramente cuáles son sus propósitos, qué están dispuestos a apoyar y qué líneas rojas se marcan.

Nadie ha dicho nada. Sabemos que los que hoy gobiernan se alinean a la defensiva y apenas proponen una sola jugada de ataque que haga recuperar alguna esperanza. Sabemos que el principal partido de la oposición busca desesperadamente su sitio proponiendo el bálsamo de

la reforma constitucional sin decir exactamente dónde lo quiere aplicar. Y sabemos que las nuevas fuerzas políticas incrementan sus expectativas, medidas por la televisión y las encuestas, pero no se atreven a decir qué van a hacer con los votos que esperan. En qué se concreta su proyecto. En qué gobierno entrarán. A quién apoyarán.

No deja de ser un juego posiblemente legítimo, pero es irresponsable. Absolutamente falto de respeto con los electores que exigen saber en quién confiar, cuál es el destino de su voto.

No se lo ponen fácil, por ejemplo, los dirigentes de Podemos, que juegan a la ambigüedad mientras naufragan enfrascados en sus luchas por el reparto de poder, tan propias de la casta que critican. Su largo culebrón con las Mareas en Galicia y sus sonoras entradas y salidas en Madrid no dejan de ser el reflejo de la confusión y las luchas domésticas en que viven quienes dicen venir a limpiar el viciado aire de la política.

Tampoco lo ponen fácil a los electores los responsables de Ciudadanos, sin más estructura que algunas voces bienintencionadas y una calculada indefinición a izquierda y a derecha. No vive su mejor momento el nacionalismo en Galicia, desangrado por las escisiones y la falta de ideas que hagan compatible su imaginario con el mundo moderno. Y desde luego, mucho tendrán que cambiar populares y socialistas para convencer a los electores de que tienen algo ilusionante con lo que recuperar su confianza.

Porque no es el miedo el que debe coger la papeleta, sino la ilusión. La ilusión por un proyecto común en el que se integren todos los intereses legítimos y se defiendan los pilares que hacen una sociedad justa, equilibrada y libre.

Donde se preserven la sanidad pública, la educación, las pensiones. Donde se dé futuro a la economía, se promueva la creación de empleo y se defiendan los sectores estratégicos. Donde las libertades estén aseguradas del mismo modo que están las obligaciones. Donde se erradique y se castigue la corrupción. Y donde no haya tolerancia con ningún tipo de sectarismo ni de imposición ni de violencia.

Dentro de pocos días, los electores tendrán la llave de los próximos cuatro años. Ahora les toca reaccionar a los que piden el voto. Los nuevos y los antiguos aspirantes. Todos. Ya nos han traído hasta aquí, al borde mismo de la desilusión y la confrontación. Deben definir su rumbo. Y a continuación, votemos.

A la deriva

14-02-2016. El 20 de diciembre del 2015, los españoles eligieron nuevas Cortes. Desde hacía meses se percibía una recomposición del mapa político, que confirmaban las encuestas. Las votaciones fueron la prueba definitiva de que el bipartidismo había quebrado. La fragmentación de las fuerzas políticas se tradujo inmediatamente en dificultades para elegir un presidente que formase el nuevo Gobierno. La situación se prolongaba, y el 14 de febrero, casi dos meses después de los comicios, el editor de La Voz publicó su análisis de la situación. En él hacía un enérgico llamamiento a la responsabilidad de los actores de la crisis. Su título era muy significativo: «A la deriva».

La crítica encrucijada en la que ha encallado España ha hecho levantar todas las señales de peligro. Enredados en un bucle sin solución, nunca como ahora hemos visto tan cerca el abismo de la parálisis, o, lo que es aún peor, el riesgo de enfrentamiento antagonista. De nuevo los representantes públicos han venido a darnos lecciones. Pero lecciones de la política que no merecemos, del interés soberbio y oportunista, del juego sucio que solo oculta el ánimo de destruir, del aprovechamiento más ilícito y corrupto.

Si otras veces he escrito que nuestro país está a mucha más altura que quienes pretenden gobernarnos, en estos largos días de indecisión ridícula se demuestra claramente que mientras la sociedad civil trabaja sin que nadie atienda sus problemas, los encargados de servirla prefieren soslayar sus obligaciones y se dedican a servirse. No solo no han entendido el ya antiguo mensaje de las urnas, sino que se empecinan en retorcerlo para sacar beneficio. No es España lo que está en su cabeza, sino el poder. Unos para no perderlo; otros para asaltarlo.

Esa es la peor conclusión que se puede extraer de su comportamiento. Agazapados detrás de frases grandilocuentes, cada cual juega sus bazas en busca de intereses más prosaicos, mientras la perplejidad hace mella en los españoles y el país pierde gran parte de su crédito en Europa y en el mundo democrático.

La primera pérdida de crédito no viene dada por la incapacidad de digerir los resultados electorales, casi dos meses después de que los españoles hablasen. Es todavía peor. Es la imagen de país descontrolado que nos crean las múltiples tramas de corrupción que a cada poco salen a la

luz. Tal vergüenza, indigna de una sociedad civilizada, mancha nombres que se daban equivocadamente por honorables y deslegitima instituciones que se suponían respetadas.

Hemos visto cómo el nacionalismo catalán presumía en los balcones y en las televisiones de señorío, mientras por las cloacas corrían a diario ríos de comisiones ilícitas que iban a engordar cuentas particulares. Hemos visto cómo gobiernos autonómicos enteros se ponían al servicio de nombres reconocidos para sacar beneficios millonarios de cada acontecimiento que se organizaba. Hemos visto cómo partidos políticos que se declaran de orden dejaban crecer en su seno, fuera de todo control, aparatos mafiosos para saquear cuentas públicas y organizar sus tramas de blanqueo. Y por si fuera poco, ahora asistimos atónitos a maniobras incomprensibles para, en lugar de exigirles cuentas, proteger bajo el aforamiento a quienes tienen que explicarse.

Reparar el daño que ha causado la corrupción exige no solo contundencia y agilidad en la justicia, sino también toda la diligencia en cuantos deben responder para atajarla.

No es extraño, por tanto, el castigo en las urnas a quienes la toleran mientras aprietan a los ciudadanos alegando que lo impone el bien común. No es creíble que un día se diga que ya no se pasará ni una y horas después se levanten parapetos y se apele como toda argumentación a la presunción de inocencia. Quien quiera gobernarnos no solo debe tener las manos limpias, no solo la conciencia impoluta; también debe tener la voluntad determinante de acabar con las mafias que convierten los cargos públicos en un festín.

Pero esa abominación que produce el mal uso del poder no se circunscribe solo a la corrupción. También se

hacen acreedores del rechazo los que quieren tomarlo a toda costa y al precio que sea para satisfacer sus ambiciones personales. O, lo que es más grave, para someter a los ciudadanos y a sus propios votantes a un régimen tiránico en el que la democracia solo es el envoltorio.

Ejemplos de ambas cosas se perciben en las esperpénticas apariciones de cuantos dicen desear un gobierno del cambio y no poseen ni los votos necesarios ni la voluntad imprescindible de pactar. Sí la tienen de imponer y someter al supuesto aliado, como se ha visto cuando, en lugar de ofrecer ideas, con total desfachatez exigen cargos y carteras con sus ministros ya elegidos.

El gobierno de España, con cuarenta y siete millones de ciudadanos que cumplen sus deberes y aman sus derechos y libertades, no puede despacharse como una almoneda. Ni dividirse -como ocurrió en Galicia con el bipartito- en facciones irreconciliables que dedican las horas de trabajo a la guerra ideológica.

Es ahí donde germina el grave riesgo de confrontación. Un país que desde 1978 debe tanto al pacto y al compromiso, llevado al frentismo y a la imposición. Y también a la parálisis, como se advierte en no pocos gobiernos locales donde sobran mesianismos y faltan proyectos, faltan ideas, falta resolución.

Salvo en las ansias de poder, que se estrellan contra la terca realidad de la aritmética que han traído las urnas, la clase política es hoy incapaz de mostrar coincidencia alguna. Las líneas rojas, las inflexibilidades, la carencia de altura de miras han colocado al país ante un callejón sin salida que, a tenor de las encuestas, es posible que ni siquiera con unas hipotéticas elecciones, de haberlas, pueda superarse.

Ellos, los políticos, son los culpables; no los ciudadanos. Y cada cual debe asumir su parte de responsabilidad en esta deriva.

Los que ahora gobiernan en funciones, aceptar el reproche que les han hecho una buena parte de sus votantes, atajar la inaudita corrupción en su partido y aprender la cultura del pacto, que han despreciado mientras disfrutaron de la mayoría absoluta.

El partido cuyo candidato ha recibido el encargo de intentar formar gobierno debería volver a ser uno, superar las guerras intestinas, decidir entre centralidad y extremismo, y no fiarlo todo al discurso de buenas intenciones y a la agradable imagen ante las cámaras. Aunque no siempre es tan elegante, como se pudo ver en el debate a dos, cuando se cruzó sin ningún respeto ni decencia la línea roja del insulto. Hará bien quien tiene tanta ansia de poder en escuchar con atención las voces internas de cuantos desde la experiencia le recuerdan que el poder no se consigue a cualquier precio, y mucho menos vendiendo de rebajas los principios democráticos.

También quienes dicen traer aire nuevo y llenan sus discursos inflando palabras como regeneración, unidad y pacto deben abandonar los vetos, los intereses personales, la ambigüedad y el individualismo.

Y aquellos que aseguran que el cielo se toma al asalto, poner los pies en la tierra, que es donde vive la civilización, y entender que a este país le ha ido siempre bien con la paz y la convivencia y ha sufrido los mayores desastres con la confrontación.

También los electores debemos reflexionar. Porque el voto de castigo, seguramente justo y merecido, que han

sufrido los partidos que no supieron abanderar las demandas sociales puede traer algo mucho peor: el advenimiento de fuerzas políticas que esconden ante las cámaras sus ideas antidemocráticas, pero llevan en su ideario la destrucción de muchos principios sobre los que se forjó nuestro mayor logro, el pacto de convivencia entre todos los españoles. El peligro de que un país democrático, pacífico e ilusionado con empezar a superar la crisis se hunda en ella -con todo lo que eso acarrea- es ya inminente.

Basta ver el estado calamitoso de los principales sectores productivos de nuestra realidad más cercana para comprender que cualquier pérdida de tiempo es irreparable. Prácticamente todo lo que en la economía gallega fue alguna vez relevante ha desaparecido, ha sido vendido o está sufriendo los estertores de la agonía, sin que los poderes públicos sean capaces de detener el declive. No es un problema menor. Pero si a este grave desajuste se une la mayor inestabilidad política que hayamos vivido en casi cuarenta años, el futuro no puede ser más preocupante.

Por eso es hora de exigir otra política. Y, quizá, otra generación de políticos.

El último tren

46.º Premio Fernández Latorre

25-11-2004. En esa ocasión se entrega el premio al periodista y escritor coruñés César Antonio Molina, a la sazón director del Instituto Cervantes, por su artículo «Atocha», dedicado a las víctimas de los atentados del 11-M y publicado en La Voz de Galicia. En su discurso, Santiago Rey Fernández-Latorre insiste en una de las reflexiones claves de su pensamiento: «La prensa seria y comprometida con su gente debe ejercer el irrenunciable papel de ser la conciencia crítica del poder». El editor del periódico renueva su apuesta «por Galicia y por el periodismo puro, al servicio exclusivo de los ciudadanos».

Legamos a la edición cuarenta y seis de los premios periodísticos instituidos en memoria del Fundador de La Voz de Galicia.

Como he señalado en otras ocasiones, el jurado pretende distinguir el periodismo bien hecho: aquel que «sabe hacer presentes las preocupaciones de todos sin inventarlas ni rebajarlas».

Me refería al artículo premiado entonces, sobre la catástrofe del *Prestige*, cuyas heridas y secuelas —en nuestra tierra y en el alma del pueblo— aún no han cicatrizado.

El jurado ha premiado este año un artículo sobre el acontecimiento que ha marcado para siempre nuestras vidas, nuestra historia y la percepción que desde entonces tenemos del mundo: el atentado del 11 de marzo.

Ese día el terror nos hirió de un modo nuevo y, quizá por eso, más brutal. Tanto que, como subrayó la primera página de La Voz, sentimos que en aquellos trenes íbamos todos.

Tengo el honor de presidir a quienes han reconocido en el artículo de César Antonio Molina una excelente presentación de tanto dolor colectivo. Quiero felicitarle por semejante capacidad expresiva. Sus palabras, como las de los grandes poetas, ya no son suyas, sino de todos nosotros. Nos pertenecen, porque cuando tocan la música del corazón, se graban en el recuerdo para siempre.

César Antonio lo sabe bien. Lo sabe, por lo menos, desde que desplegaba sus inquietudes en La Voz por los años setenta, en los albores primeros de aquellos aires de libertad, tan ansiados y reconfortantes.

Era muy joven entonces César Antonio, pero aún lo parece más hoy, por las ganas con la que ha asumido la dirección del Instituto Cervantes. Estoy seguro de que su

doble faceta de escritor y gestor cultural —bien acreditada al frente del Círculo de Bellas Artes— le permitirá conseguir para el español y para la cultura española nuevos y más amplios espacios en todo el mundo. Incluso en España, mediante la defensa de la calidad de nuestro idioma en los medios de comunicación.

Enhorabuena.

Pero permíteme, César Antonio, permítanme todos, que vuelva un momento sobre mi preocupación más grande que, como siempre, es Galicia.

Lo escribí hace poco en un artículo editorial: siento que esta tierra, que ha perdido en el siglo XX tantas oportunidades, corre el riesgo de haber perdido, además, el último tren; el riesgo de quedarse apeada en una cuneta de la historia, lejos de un futuro en condiciones de igualdad con las comunidades y los países de nuestro entorno.

Sin duda, la culpa es de alguien. Quizá quienes tenían o tienen más responsabilidad no han hecho nada por evitarlo o han hecho poco o lo han hecho mal. A pesar de ellos, la inmensa mayoría de nuestra gente ha trabajado y trabaja duro, con ingenio e iniciativa, para hacerle a Galicia un lugar en el mundo. Basta un somero vistazo a esta sala y se comprueba el panorama de esfuerzo y riesgo que los hoy presentes y muchos otros representan en la empresa y en la cultura.

Esfuerzo y riesgo que han proyectado la imagen de Galicia mucho más allá de nuestras fronteras. A pesar de los pesares. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, la autopista llegó a Ferrol hace unos meses, al mismo tiempo que otras comunidades se quejaban de llevar treinta años pagando peajes.

A comienzos del siglo XXI resulta inútil aspirar al crecimiento personal, familiar y social, por mucho que sea el trabajo y el esfuerzo, si no se parte de unos mínimos recursos que hagan posible la normal actividad económica y la vida ciudadana.

Un país que no disponga de tecnología, de infraestructuras, de industria y de pensamiento propio quedará condenado a convertirse, únicamente, en cliente de lo que crean, fabrican, desarrollan y deciden otros: un reducto de tipismo, empobrecimiento y emigración.

No podemos permitir que eso ocurra. El Plan Galicia, que nos prometieron para sacudirse las malas conciencias tras el hundimiento del *Prestige*, séptimo naufragio contaminante en nuestras costas, no es sino una parte de los recursos que necesitamos instrumentar para acomodarnos a la Europa de nuestro tiempo. Una Europa en la que otros han sabido aprovechar las oportunidades y los fondos, y en donde la llegada de nuevos socios nos obligará a redoblar los esfuerzos.

No pretendo insistir en viejas actitudes pedigüeñas ni en lamentaciones y lloros. Estoy hablando de derechos que Galicia tiene y de los que no puede ni debe hacer dejación. No importa el color del Gobierno que prometió un Plan. Tampoco importa el color de los Gobiernos que tengan que hacerlo posible. Importa, sobre todo, que se haga. Y con las dotaciones y plazos prometidos. Sobre todo, con los plazos prometidos, con los plazos prometidos.

Estoy por decirlo una tercera vez: con los plazos prometidos. Porque incumplir los plazos es lo mismo que incumplir el Plan.

Dos principios están aquí en juego. De una parte, la

necesidad de resarcir a Galicia de un atraso que no se ha querido o sabido remediar. De otra, está en juego la dignidad de un pueblo que, si con la tragedia del *Prestige* se vio ninguneado por los organismos regionales, estatales y europeos, ahora se siente engañado con unas promesas hechas para calmarlo y que, por lo visto, nadie pretende cumplir.

No lo vamos a permitir. Por lo menos, algunos.

Los gallegos somos conscientes de que esta lucha por mover la voluntad de los gobernantes nos traerá, como mucho, un tren del siglo XX para que nos arreglemos durante todo el siglo XXI; unas autovías que eran normales en la Europa de los años 70, y unas infraestructuras portuarias que, incompletas, nunca podrán ser competitivas.

Lamentablemente, solo se nos permite aspirar a algo menos de lo justo y a mucho menos de los que otros ya tienen. Exigimos lo indispensable para no perder el último tren, en un momento en que las economías emergentes desde China hasta la Europa del Este no solo propician fenómenos de deslocalización, sino que invierten más que nosotros mismos en talento e infraestructuras.

Digo todo esto porque la prensa seria y comprometida con su gente debe ejercer el irrenunciable papel de ser la conciencia crítica del poder, y no porque los gallegos estemos especialmente inclinados a percibir el sentido trágico de la vida.

Al actuar de este modo, La Voz de Galicia hace honor a su título y a su tradición. Como editor, si quiero hacer responsablemente mi trabajo, no puedo mirar hacia otra parte. Sé con bastante precisión cuál es la recompensa y la acepto: presiones, amenazas, llamadas a deshora, incom-

prensiones de todo género. Ya no sabría vivir sin ellas. Es parte del precio que debo pagar por la independencia. Y es también lo que hace de La Voz de Galicia un periódico distinto, único.

Me gustaría que La Voz hubiera estado más acompañada en la defensa editorial del Plan Galicia, que nuestra postura no fuera tan significada: ojalá pudiera hablar de una línea compartida, no ya con los demás periódicos que se imprimen aquí, sino incluso con los medios de comunicación que aspiran a influir en toda España y dicen tener ediciones gallegas. Pero no ha sido así.

Un editor se equivoca si no se pone en el lugar del lector, si él mismo no es un lector. El lector, por definición, representa la quintaesencia del ciudadano: aquel que se informa, razona, forja criterio y participa. Y conviene recordarlo, ya que desde muchas instancias se quiere convertir a los ciudadanos en seguidores incondicionales, manipular sus sentimientos y traicionar incluso el sentido de su voto. Solo las personas informadas adquieren suficiente autonomía para tomar decisiones con plena conciencia y libertad, aunque tengan también el derecho a equivocarse.

Cada día más, el gobierno se entiende como apariencia. No importa tanto afrontar los problemas como dar la impresión de que se afrontan. Se empeña menos energía en la acción que en las palabras. Se gobierna para permanecer en el gobierno más que para servir a los ciudadanos. Se contraprograma el previsible disgusto de los gobernados con imágenes de éxitos tan fulgurantes como efímeros. Se discuten mezquindades que no llegan a velar las ansias de controlar parcelas y cuotas de poder, mientras tantos asuntos continúan pendientes.

Me preocupa que esto suceda, aunque con mayor o menor intensidad haya sido siempre así.

Pero me preocupa más que desde el periodismo no sepamos responder profesionalmente para que los ciudadanos lo perciban. Es decir, que el periodismo no sepa mirar con ojos de ciudadano y se instale en el parloteo que caracteriza a determinadas clases políticas.

El periodismo está para servir a la realidad y a sus lectores. Más aún en un tiempo en el que los lectores empiezan a escasear: los que leen, leen cada vez más, pero los que no leen aumentan día a día. Y con ellos, con esa casta creciente de analfabetos funcionales, crece también la indefensión de nuestra sociedad, puesto que la dejan a merced de la última operación de imagen o de la más ocurrente.

Por eso, a estas alturas de la vida, quiero renovar mi apuesta por Galicia y por el periodismo puro, al servicio exclusivo de los ciudadanos. Junto con Galicia, sólo una cosa más ocupa mi tiempo y me desvela: preservar el futuro empresarial, periodístico y gallego de este proyecto que dentro de cuarenta días cumplirá 123 años, y que se llama, porque quiere serlo, La Voz de Galicia.

Quiero para La Voz, por lo menos, otros 125 años de independencia y pluralismo para el bien de Galicia. Quiero asegurarme, en la medida en que humanamente es posible, de que, como dice una gran periodista americana, jamás dormiremos en la cama de nuestros enemigos.

Y quería también que ustedes lo supieran.

Mi felicitación de nuevo, querido César Antonio, mi agradecimiento a los miembros del jurado y a todos ustedes, señoras y señores, por su atención.

Una generación nueva

47.º Premio Fernández Latorre

10-11-2005. El historiador Ramón Villares recibe el 47.º Premio Fernández Latorre, que le fue concedido por el trabajo periodístico Galicia siglo XX, publicado por La Voz de Galicia. El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, es el invitado de honor en el acto, en el que el presidente y editor de La Voz dice que «La memoria es a los hombres lo que la raíz a los árboles: sin ella se convierten en desarraigados y secan». En su discurso invita a «esperar menos del Estado y más de nosotros mismos, empezando por un gran esfuerzo de convergencia en lo común, en lo que importa».

Las noticias se acumulan y pocas parecen alentadoras. Porque del AVE que tendría que llegar desde Madrid, sabemos que siguen sin asegurarse las dotaciones y los plazos, aunque las licitaciones con el nuevo Gobierno de la Xunta hayan tomado un cariz diferente, que nos permite cierta esperanza.

Sin embargo, resulta descorazonador que, mientras la Unión Europea quizá mantenga a Galicia como región objetivo número uno, en nuestro país se alienten políticas territoriales que nos arrinconarán aún más, hasta convertirnos definitivamente en un mero mercado de otras autonomías.

El enfoque de los presupuestos que se acaban de presentar en el Parlamento de la nación y los visos que están adquiriendo las supuestas reformas de los estatutos autonómicos hacen pensar que España se convertirá en España SA, una sociedad por acciones donde cada autonomía recibirá dividendo en proporción directa a la participación que tenga en el accionariado. Al que más tiene, más se le dará, y el que menos, como ocurre en las sociedades anónimas con los socios minoritarios, corre el riesgo del ninguneo y del ostracismo.

El caso de nuestro sector energético me parece suficientemente significativo. Hemos publicado abundantes datos sobre la producción de energía en Galicia, que supone un porcentaje muy alto del total de España, hasta el punto de que somos la tercera comunidad que más exporta. Pero hasta que hicimos pública anteayer la inversión de Manuel Jove en Fenosa, el 91 por ciento de esa energía estaba en manos de capital no gallego, en manos de empresas domiciliadas en otras comunidades.

El panorama que se nos ofrece guarda demasiadas similitudes con el colonialismo. Para completarlo, apenas

falta que las autonomías más poderosas decidan dedicar un 0,7 por ciento de su PIB a las más perjudicadas. Como saben, algunas protestas no se alejan gran cosa de esto.

El desaliento conduce a la inacción. El ciudadano deja de entender la política y de confiar en los políticos. Se desentiende de la cosa pública, como si estuviera regida por leyes del destino que le son ajenas y sobre las que no puede intervenir. Espera tanto de ella como de la lotería: todo y nada. Se abandona como un náufrago que no sabe dónde está la costa y ya no ve sentido al esfuerzo de nadar. Esta sensación conduce a la indiferencia o al pasotismo, particularmente entre los más jóvenes.

Pero también ocurre el fenómeno contrario. Quizás heridos en alguna convicción básica por decisiones políticas equivocadas o por operaciones propagandísticas que pretenden avivar viejas heridas hace tiempo cicatrizadas, no son pocos los que pierden la moderación y se fanatizan, se convierten en «hooligans» de un partido o de unas siglas.

Todo ello, además, en un clima trasnochado en el que se fomenta la fricción entre abstracciones como *derecha* e *izquierda*, palabras de otra época que no sirven para afrontar las dificultades nuevas. ¿Es de izquierdas o de derechas la política territorial que he descrito? ¿De derechas o de izquierdas la regularización masiva de inmigrantes o su contención inhumana en las vallas de Ceuta y Melilla? ¿De derechas o de izquierdas las posibles políticas de agua? ¿De derechas o de izquierda un proyecto de estatuto del periodista que nos recuerda prácticas de control que no se conocían desde la etapa más oscura del franquismo? El boicot a la industria del cava o, en general, a los productos catalanes y vascos, ¿es de izquierdas o derechas? Y la concesión de

un canal de televisión abierto a quien ya lo había obtenido bajo otras condiciones, ¿es de derechas o de izquierdas?

Ni con los pasotas ni con los fanáticos cabe diálogo para proyectar un futuro común. Los unos se apartan, los otros excluyen y dividen. Se percibe un agotamiento de la acción política, más orientada al cálculo de votos, adhesiones y parcelas de poder que a la búsqueda del llamado bien común.

Quizá piensen que estoy exagerando. No es mi intención. Por eso me he referido a datos y hechos muy concretos. Y tampoco creo exagerar si concluyo que por esta vereda no queda recorrido. Ni para Galicia ni para España. De persistir, llegaremos muy pronto a una situación de bloqueo que, por cierto, están padeciendo ya otros, como se ha puesto de manifiesto en Alemania y, con consecuencias diferentes, también ahora en Francia y Bélgica.

No tengo soluciones. Pero se me ocurren algunos puntos de partida, algunas cuestiones de mínimos. Por ejemplo, que no se utilice la democracia para imponer; que se respeten las iniciativas de la sociedad civil y se apague —o al menos se modere— tanto afán de dirigismo; que cesen los insultos y las palabras vacías, trasnochadas; que no se pongan en peligro los ámbitos naturales de convivencia y afecto: más bien al contrario, que se potencien.

Y sobre todo, parece que ha llegado el momento de que una generación distinta, aún no contaminada por principios ideológicos anticuados, joven y capaz, con resortes intelectuales y morales suficientes para dar respuesta a estos retos inquietantes. Están ahí, en el mundo empresarial y en el universitario. Son muchos y muy buenos. Procuro hablar con ellos tanto como puedo y, viéndolos, la verdad es que... no entiendo cómo resultan tan enrevesados

determinados problemas sucesorios. O sí lo entiendo.

Confío en esa generación que llama a las puertas y pide que se la deje entrar para quedarse. Necesitamos su imaginación y su cordura, su profesionalidad y su audacia para salir del atolladero.

Hace falta magnanimidad para cederles el liderazgo. Si no lo hacemos, habremos perdido otra oportunidad de cambiar para mejor. Seguiremos confiando nuestros sueños a quienes jamás sueñan sino con el poder, y la memoria del futuro nos señalará con el dedo.

En este contexto quizá surja una oportunidad: mostrar desde Galicia una nueva y más moderna sensatez. Necesitamos un proyecto en el que cabe la sana competición entre ciudades o entre empresas, pero no la rivalidad, no el cainismo ni la mezquindad localista.

En Galicia todavía está pendiente un gran proyecto de integración entre la Galicia rural y la urbana, la interior y la de la costa, entre las diversas ciudades y comarcas, entre los mayores y los jóvenes, entre los empresarios, entre los políticos. Dedicuémonos intensamente a conseguirlo, sin permitir, como ha ocurrido en otras partes, que las palabras y las ideas que deberían de servir precisamente para integrar (la palabra «nación», por ejemplo) se utilicen como instrumento de discordia y división.

Como escribía hace más de un año, sigo convencido de que «lo que corresponde a Galicia no es llorar, sino desarrollar sus potencialidades y competir con el duro entorno europeo». Quizá debamos mirar menos hacia nuestros dirigentes. Quizá debamos esperar menos del Estado y más de nosotros mismos, empezando, insisto, por un gran esfuerzo de convergencia en lo común, en lo que importa.

Espacio de encuentro

48.º Premio Fernández Latorre

07-11-2006. La Real Academia Galega es distinguida con el Premio Fernández Latorre en su centenario. Recogió el galardón su entonces presidente, Xosé Ramón Barreiro. En el acto, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, subraya la «insubornable defensa dos intereses de Galicia» que hace La Voz. El editor del periódico, por su parte, afirma que el galardón distingue a la RAG «non só por coidar da nosa palabra, que para calquera periodista sería razón suficiente, senón tamén porque se implicou directamente no propio periodismo mediante infinidade de iniciativas». El presidente de La Voz añade: «No puedo publicar para que me quieran, sino que edito todos los días un periódico porque quiero a Galicia»

Dende hai cen anos, a Real Academia Galega coida da nosa palabra. Non lle encomendamos, pois, un asunto menor, porque coidar da palabra, servila, é coidar de nós mesmos, das nosas formas de ser, de sentir e de pensar que se manifestan, precisamente, na palabra. Por iso o idioma é moito máis que un instrumento para comunicarnos. Na súa alma garda as verdades e os sonhos dos millóns de mulleres e de homes que, a través dos tempos, viviron esta terra. Un tesouro que debemos custodiar e acrecentar, e do que quixemos facer particularmente responsable á Real Academia Galega.

Coidouno ben, cóidao ben e hoxe lle damos as grazas ao noso modo, coa distinción que desde hai corenta e oito anos La Voz de Galicia concede a quen teñen demostrado excelencia periodística, ben pola súa traxectoria, ben por un traballo illado pero excepcional.

En todos estes anos, é a terceira vez que se outorga o Premio Fernández-Latorre a unha institución. Neste caso non só por coidar da nosa palabra, que para calquera periodista sería razón suficiente, senón tamén porque a Real Academia Galega se implicou directamente no propio periodismo mediante infinidade de iniciativas e coa colaboración directa nos medios, absolutamente excepcional no caso de La Voz de Galicia, como unha mera ollada aos nomes das mesas deste acto demostra: a maioría son nomes de académicos que colaboraron en La Voz. Estreamos hoxe, por certo, a mesa Carlos Casares.

Querido Presidente, Xosé Ramón Barreiro, queridos académicos: muchas gracias y muchas felicidades. En esta casa, que cumprirá dentro de dos meses sus primeros

125 años, se entiende y se celebra con especial alegría el primer siglo de la Real Academia Galega.

Al pensar en estos dos centenarios, recordé las consideraciones de un autor importante en mi formación, Alexis de Tocqueville, de quien acabamos de celebrar su segunda centuria. En *La democracia en América* escribió un párrafo que, en parte, puede aplicarse a las dos instituciones: «Un periódico —dice— no puede subsistir más que a condición de reproducir una doctrina o un sentimiento común a un gran número de personas. Así pues, un diario representa siempre una asociación cuyos miembros son los lectores habituales. Esa asociación puede ser más o menos definida, más o menos estrecha, más o menos numerosa, pero su germen siempre existe en los espíritus y solo esto hace que el periódico no muera». El sentimiento y la doctrina, en este caso, son comunes y se abrevian en una sola palabra plena de significado: Galicia.

Fernando Ónega escribió que este discurso mío en los Fernández Latorre se configura como una especie de Estado de la Nación. Exageraciones de la amistad. Ciertamente, procuro abordar algunos de los problemas que, en cada momento, acucian o hieren a Galicia.

Más fácil sería, también menos comprometido, decir unas palabras festivas o de circunstancias. Pero con estos Premios queremos festejar el Periodismo, y este carecería de sentido sin la existencia de una comunidad concreta de la que ocuparnos.

Unas semanas atrás, al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de León, citaba unas palabras de José Saramago, pronunciadas precisamente en A Coruña, en las que, «con una cierta nostalgia y algo de exageración,

señalaba que antes las personas se educaban y crecían en la amplitud de los atrios de las catedrales y de los claustros de las universidades, mientras el ágora de nuestro tiempo la constituyen hoy espacios menos desinteresados y abiertos: los centros comerciales».

Los periódicos, los medios de comunicación en general, tienen que construir ese nuevo espacio abierto y desinteresado, de encuentro y conversación, donde todos puedan ocuparse de lo común.

El Periodismo debe abrir un entorno de diálogo, no solo para los partidos o para aquellos grupos que por su capacidad económica u organizativa consiguen hacerse oír, sino también para dar voz a quien no dispone de esa fuerza, de modo que nadie quede excluido, marginado.

Al hacer esto, el periódico construye o refuerza una identidad, un modo de ser, y la proyecta más allá de los límites espaciales de la propia comunidad. Es decir, da más voz a Galicia en el diálogo con otras comunidades.

Decía Tocqueville en 1840: «Los periódicos resultan más necesarios a medida que los hombres se hacen más iguales y más temible el individualismo. Sería disminuir su importancia pensar que solo sirven para garantizar la libertad, cuando son los que mantienen la civilización».

Comprenderán, a la luz de esas palabras, el agradecimiento a mi abuelo por haber elegido para este diario tan significativo nombre: La Voz de Galicia. Y comprenderán también por qué digo a menudo que todo mi programa como editor se reduce a eso: a que La Voz haga honor a su título.

No siempre lo consigo, como es lógico y humano, pero puedo asegurar que lo intento todos los días. Dice Gabriel García Márquez —aunque yo se lo he oído prime-

ro al leonés Antonio Pereira— que él escribe para que le quieran. Se trata, sin duda, de una actitud respetable, que incluso me produce cierta envidia, porque... yo no puedo adoptarla. No puedo publicar para que me quieran, sino que edito todos los días un periódico porque quiero a Galicia.

Puedo hablar así, por la confianza que ustedes me brindan, y porque llevo cuarenta y seis años al frente de La Voz y he entregado cuarenta y seis de los cuarenta y ocho premios Fernández Latorre.

En este casi medio siglo se ha producido un cambio de era que ha dejado muy atrás la sociedad industrial de la que proveníamos y por la que Galicia pasó tardíamente y de puntillas.

La innovación científica y tecnológica han transformado la economía, globalizándola, y el mundo del trabajo y de las relaciones personales, para alcanzar finalmente los ámbitos de los medios y de la política.

Una nueva civilización se forja entre los estertores de la antigua. Los analistas llevan años ocupándose de sus ventajas, sus inconvenientes y sus peligros. El año pasado comentaba que el mundo crece más rápido, pero de forma desigual, de modo que, al menos en este estadio, aumenta la riqueza de los ricos, pero también aumenta la pobreza de los pobres. Una circunstancia que, según Manuel Castells, se reproduce en el interior de las sociedades avanzadas: la clase media se estrecha —muchas familias no podrían mantenerse en ella sin el trabajo de ambos cónyuges— y la clase alta y la baja se amplían.

Una sociedad en red, dice el mismo autor, a la que no se enchufan las áreas aisladas o de la que se desenchufan aquellas que, como África, no resultan relevantes para el negocio global.

Sólo hay un modo seguro de conectarse: la educación, factor decisivo de la nueva economía y del peculiar mercado de trabajo que ha generado. La interacción de universidades de prestigio con un tejido empresarial sólido en el ambiente propicio de las grandes concentraciones urbanas ha creado las más importantes áreas de innovación que existen en el mundo.

A la vez, enfrentamos un tiempo de violencia, generada por las exclusiones que la nueva situación origina, en parte, por los fenómenos nuevos del terrorismo fundamentalista y, en parte, por la globalización del crimen, con la multiplicación de las mafias en torno al narcotráfico, el comercio ilegal de armas y de emigrantes, la prostitución, especialmente grave porque afecta a millones de niños.

Disponemos de una capacidad científica y técnica que nos permite casi todo, incluso el delito a gran escala, porque, como también señala Castells, nos hemos quedado sin referencias morales, ya que buena parte de las fuentes para la transmisión de valores —las iglesias y los educadores, sobre todo— atraviesan sus particulares crisis. La prensa también. Ahora que es tan necesaria, pierde lectores. Si hacemos caso a los analistas y retomamos la cita de Tocqueville, la prensa baja porque los hombres vuelven a ser menos iguales y, ya lo avanzaba el año pasado, se desentienden de aquello que no pueden gobernar, como los vasallos se desentendían de las estrategias de sus señores.

Pero quizá también porque los medios no hemos sabido entender ni la naturaleza traumática de la transformación social que se ha producido ni las nuevas necesidades de la gente más joven ni su lenguaje. O porque el periodismo se ha vinculado demasiado a la política convencional,

a su vez en crisis, puesto que ve crecer la abstención en un mundo, paradójicamente, más participativo. La economía, el trabajo y la ciencia se globalizan, pero la gente vive localmente: en su barrio, en su ciudad, en su región. Y sienten, también localmente, los problemas. Acaso por eso, los medios regionales sufren menos que los nacionales o internacionales. Aunque todos pierden.

La Voz de Galicia ha incrementado su audiencia casi un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años. Si se suman las personas que acceden a través de internet, la cifra se dispara hasta aproximarse a los ochocientos mil lectores diarios. Con todo, sé que tenemos que cambiar muchas cosas para cumplir, en este contexto nuevo, con las exigencias de nuestro nombre y de nuestro entorno, para seguir siendo La Voz de Galicia, para mantener ese espacio abierto y desinteresado donde todos puedan encontrarse y sentirse incluidos, y para asegurar que Galicia, quede conectada al progreso pese a las autopistas sin completar, pese a que Dios sabe cuándo tendremos una cobertura decente de telefonía móvil, internet en nuestras escuelas y en el medio rural o cuándo llegará aquel último tren que estamos a punto de perder por tanto retraso, mientras nuestros recursos se nos van, se nos han ido, en construcciones extrañas, en jugadores de fútbol, en el engrasado de viejas redes clientelares o en acudir a sofocar una tragedia ecológica tras otra.

No edito ni hablo para que me quieran, insisto, sino porque quiero a Galicia. Y porque pretendo que ese amor sea eficaz, estoy disponiendo las cosas para que la Fundación que presido asegure la pervivencia de este empeño en sus diversos frentes.

No podemos, no puedo consentir excepciones que

achiquen el espacio democrático, exenciones arbitrarias en el cumplimiento de la legalidad. No puedo consentir chantajes ni amenazas. Pero, sobre todo, no puedo ni quiero permitir que se juegue con el futuro de este país. Centenares de miles de lectores me lo echarían en cara. Los nuevos tiempos, pese a sus inconvenientes, abren también nuevas oportunidades para el que, como Irlanda, ha sabido aprovecharlas.

Los retos identitarios y de desarrollo me parecen más relacionados entre sí que nunca. Y en ambos, el periodismo independiente juega un papel esencial para mantenernos unidos y enfocados hacia los mismos objetivos, debatiendo lo que convenga hacer. Por eso, verles aquí me llena de ilusión cada año y de esperanza renovada.

Muchas gracias Presidente, por tu presencia. Hemos hablado con frecuencia de estas cosas.

Muchas gracias a todos los representantes de los Gobiernos y de los Parlamentos, del mundo judicial, del universitario y del científico, del médico, del empresarial y del sindical, del cultural y del deportivo, de las asociaciones civiles, del Ejército y de los cuerpos de seguridad. Muchas gracias a todos.

E a miña felicitación renovada, fervente, á Real Academia Galega que soubo, pese a tantos e tan difíciles avatares, superar estes primeiros cen anos de existencia cun prestixio e unha consideración social crecentes.

En hora boa, querido Presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, querida Xunta Directiva e queridos académicos.

Moitísimas grazas a todos vostedes, señoras e señores, pola súa atención.

El periodismo, más que un negocio

49.º Premio Fernández Latorre

20-12-2007. Carmela Arias y Díaz de Rábago, presidenta de la Fundación Barrié de la Maza, es premiada por su contribución, durante 40 años, al desarrollo de Galicia a través del fomento de la educación, la cultura, la investigación y los servicios sociales. Recoge en su nombre el galardón su sobrino, José María Arias. El acto es una reivindicación del periodismo comprometido y de calidad. El presidente de La Voz de Galicia defiende el periodismo como compromiso, no como mercancía, y asegura que el periódico seguirá manteniendo su línea de información rigurosa e independiente.

Moitas grazas por acudir a esta corenta e nove edición dos premios Fernández Latorre coa que se pecha o 125 aniversario de La Voz de Galicia. Trátase dunha edición especial, e compráceme compartila coa Condesa de Fenosa, dona Carmela Arias Díaz de Rábago, en quen o xurado acertou a distinguir toda unha vida de dedicación a Galicia.

Parabéns, Carmela.

Decía José María Arias, en el discurso que pronunció el pasado 9 de noviembre, al recibir la Fundación Barrié la medalla de oro de La Coruña, que las palabras que mejor definen el acto fundacional de Pedro Barrié son dos: libertad y generosidad. Dos palabras que deberían estar en el origen de cualquier fundación, de cualquier impulso fundacional, pero José María las subrayaba porque todos sabemos que no siempre ocurre así.

Esas dos palabras plenas se te pueden aplicar también a ti, Carmela, no solo porque en el uso de tu libertad y con una generosidad quizá desconcertante para algunos donaste también a la Fundación Pedro Barrié de la Maza toda tu fortuna, sino porque te donaste tú misma, por entero, a la causa de tu marido: Galicia.

De algún modo, tu gestión al frente de la Barrié, cuyos primeros cuarenta años festejamos, supone una cierta refundación. Conociéndote, seguro que no te gusta este término, seguro que te parece excesivo. Pero debe decirse, porque a las dos palabras ya citadas, libertad y generosidad, tú añadiste una tercera: fidelidad.

Más de 14.000 becas, las escuelas de arquitectura y de ingeniería que darían lugar con el tiempo a las Universidades de Coruña y Vigo, la promoción de tantísimas obras

sociales en las más diversas áreas, el impulso en la conservación de nuestro patrimonio artístico y cultural, estos días dábamos la noticia de otra iniciativa puntera apoyada por la Fundación Barrié en la investigación científica más avanzada... En fin. Podría seguir largamente, porque ni siquiera he mencionado las dos magníficas sedes.

Tanta actividad se puede resumir en que has convertido la Barrié, como todos los gallegos la llamamos, en una de las principales fundaciones patrimoniales privadas de Europa. Y lo has hecho tú, Carmela, con la ayuda de un equipo de enorme talento capitaneado por tu inolvidable hermano Joaquín y por tu sobrino José María. Bien merecido tienes este Premio Fernández Latorre en su versión exclusiva: la que distingue una trayectoria vital y profesional al servicio de Galicia. Necesitamos personas libres y generosas como Carmela Arias, que den aliento a instituciones capaces de generar sociedades también libres y generosas.

«Me parece que la polarización de nuestra vida política junto con el ‘todo vale’ en internet han contribuido a crear un clima de intolerancia, de cerrazón; a instaurar la idea de que los puntos de vista opuestos no deben ser rebatidos, sino eliminados. Ya no debatimos, demonizamos».

Estas palabras esta vez no son mías ni, contra lo que pueda parecer, se refieren explícitamente a España. Las pronunció en Londres el director del *New York Times* un par de semanas atrás, en el contexto de un análisis sobre la crisis de la industria del periodismo impreso.

Bill Keller añadió algunos otros elementos sombríos al cuadro cuando se refirió a que algunos periódicos estadounidenses están siendo comprados por «nuevos

dueños que parecen completamente liberados de la idea nostálgica del periodismo como institución pública digna de confianza».

Se refería esta vez a empresarios con múltiples intereses en sectores diversos que buscan la propiedad de los medios, en el mejor de los casos, como un negocio más.

Los 125 años de La Voz me autorizan a decir lo que voy a decir: el Periodismo ni es un mero negocio ni puede servir a intereses ajenos a la comunidad a la que atiende. Porque en ese caso, cuando las noticias se convierten en piedras contra el enemigo ideológico o en mera mercancía, los efectos no tardan en percibirse y se llaman así: mentira, engaño, intolerancia, disgregación, crispación, enfrentamiento, extremismo y, finalmente, violencia física.

El periodismo tiene que ser negocio, precisamente para asegurar su independencia, pero no solo negocio. Porque si solo es negocio, ¿qué hacemos? ¿Claudicamos ante las noticias ruidosas y estridentes, fáciles para el consumo ligero y carentes de importancia, pero que reportan audiencias masivas? ¿O nos arriesgamos a dar espacio y profundidad a las noticias verdaderamente importantes?

Esta duda dramática ya ha sido resuelta, de la peor manera y desde hace tiempo, en no pocos telediarios y en muchas páginas supuestamente noticiosas de internet. En un mundo donde los *ratings* lo son todo y se mide hasta el último clic en tiempo real, ¿quién apostará por las noticias complicadas, difíciles e importantes, pero carentes de erotismo? Casi en estos mismos términos se lo preguntaba también el director del *New York Times*.

Si el periodismo es solo negocio, no vale la pena hacerse esas preguntas. De hecho, muchos ni se las plantean.

En La Voz, sí. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Siempre hemos preferido el periodismo a la rentabilidad. La Voz podría mejorar mucho sus resultados, que están siendo mejores que nunca, solo con renunciar a una parte de sus veintiún centros de trabajo repartidos por toda Galicia, a su red de más de trescientos periodistas ocupados en contarle Galicia a los gallegos y al resto del mundo.

Ningún periódico de nuestro tamaño tiene una plantilla semejante. Ningún periódico reinvierte todos sus beneficios, año tras año, en la propia empresa, en periodismo. Y muy pocos pueden presumir ya de dedicarse exclusivamente a sus audiencias, de no tener otros intereses ni otros negocios.

Ahora que cumplimos 125 años veo realizado un deseo: ese edificio recién terminado de mi Fundación, que habréis notado al entrar, significa para mí la plasmación física de unos ideales que podrán mantenerse cuando pase el tiempo.

Como tú, Carmela, también quiero destinar mi patrimonio a la Fundación.

Y esto me llena de alegría y de optimismo, porque a la vuelta de 125 años, La Voz de Galicia continúa haciendo falta. Muchas de las reivindicaciones de Galicia hace siglo y cuarto siguen en pie todavía hoy. No se han cubierto algunas de nuestras demandas, pero por lo menos siguen en pie.

Con errores, por los que a menudo he pedido perdón, La Voz ha pretendido contribuir a fortalecer nuestra identidad, a mejorar nuestra convivencia y a mantener en alto nuestras reclamaciones.

Lo mismo han hecho, de otra manera, la Fundación

Pedro Barrié de la Maza y su presidenta. De ahí que esta coincidencia de aniversarios me ilusione especialmente. Y cada uno en su sitio, lo mismo han pretendido y pretenden todos ustedes, amigos, a los que agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar hoy.

Como es lógico, se lo agradezco, en primer lugar, al Presidente de la Xunta de Galicia, D. Emilio Pérez Touriño, a quien invito a tomar la palabra.

Señoras y señores, muchas gracias, insisto, por compartir conmigo esta clausura del 125 aniversario de La Voz de Galicia y por su atención.

Sumar esfuerzos

50.º Premio Fernández Latorre

20-11-2008. El Premio Fernández Latorre recae en el sacerdote y musicólogo José López-Calo, que dedicó toda una vida a la investigación y el estudio de una parte fundamental de la cultura gallega. El presidente de La Voz de Galicia apela en el acto de entrega a la necesidad de unión para no solo atajar «juntos y sin demoras» la crisis económica, sino para darle la vuelta a una situación negativa y convertirla en una «oportunidad de renovación y fortalecimiento». El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, también alude al escenario de crisis y reclama «compromiso e responsabilidade» para no caer en la resignación.

*Presidente de la Xunta de Galicia,
Autoridades,
Señoras y señores,
Querido Padre Calo:*

A música manifesta como pensa, como sente un pobo. E sobre todo, como se ve e se entende a si mesmo. Por iso, desde antigo, é considerada unha das expresións máis certas da identidade, da cultura construída por un grupo social, do seu xeito de relacionarse coa natureza, cos demais homes e ata con Deus.

A música é tamén un dos mellores xeitos de facerse entender, de pór en común as propias crenzas, valores e emocións a través dun código universal que traspasa ata as barreiras do idioma.

Si otras manifestaciones culturales pueden producir rechazo o incluso aversión, la música posee una cierta elocuencia que le permite viajar por todas las sensibilidades, por cualquier territorio, por cualquier tiempo.

Premiar al padre José López Calo significa reconocer todas esas cualidades integradoras de la música, su capacidad de hacernos entender suavemente al otro, su asombrosa potencia para facilitar el encuentro y la acogida. Pero premiar al padre Calo significa además, y así se dijo expresamente en la reunión del Patronato, hacer nuestra la trayectoria de quien quiso dedicar su vida a la recuperación, sistematización y difusión de nuestra memoria musical, que constituye una parte importante de la identidad de Galicia. Como decía aquí mismo hace unos años, quien desconoce

su pasado, carece de presente y perderá el futuro, porque no sabe quién es.

Ya ha sido glosada la imponente obra del padre Calo y no insistiré en este punto. Pretendo ahora remarcar la inusitada proyección de lo gallego, de nuestra manera de pensar, de sentir y de entendernos, que ha supuesto la recepción de sus trabajos en universidades y centros académicos del resto de España y de todo el mundo.

Muchas gracias, padre Calo. Y muchas felicidades por este Premio largamente merecido.

Nos ha dado una lección de entrega que, más allá de los detalles (la donación de su riquísima biblioteca a la Universidad compostelana, por ejemplo), abarca una vida de estudio, de investigación, de trabajo. Una lección, digo, de la que quizá los gallegos, a quienes tanto y tan bien ha servido el padre Calo, podamos extraer muchas conclusiones.

Esa particular comunicabilidad de la música, derivada de su enraizamiento en la esencia de las culturas, de su carácter inclusivo y de su código universal, resulta muy a propósito para recordar dos o tres ideas en estos tiempos temblorosos de crisis. En contra de lo que se suele pensar, la vida económica no se rige por patrones mecánicos que se repitan cíclicamente con precisión matemática. La historia no refleja un progreso lineal, sino más bien un perfil ascendente, pero en dientes de sierra, con cimas y depresiones que jamás responden a ningún modelo prefijado.

La vida social y económica de las personas y de las comunidades no se rige por ciclos regulables y predecibles, como los de la naturaleza. Entre otras razones, porque resulta decisiva la intervención de la libertad humana, del

conjunto de valores morales que cada generación posee y aplica. De ahí que no todas las naciones salieran por igual de los desafíos de las crisis: hubo quien se precipitó en la decadencia y nunca volvió a su esplendor original, mientras otras superaron el reto y avanzaron por una nueva senda de prosperidad. Las primeras se rehicieron pronto, las otras tardaron mucho más de lo deseable. Bastantes perdieron el tren de la historia quizá para siempre.

Algunas de las crisis mayores supusieron tal involución que la humanidad hubo de penar durante siglos para recuperar el nivel de civilización previo. La Roma imperial, por ejemplo, no solo perdió su primacía en el concierto de las naciones. Sus vecinos tardaron casi mil años en volver a disfrutar del agua corriente.

Pienso que la crisis de nuestros días, en sus diversos niveles —local, nacional e internacional— debe ser afrontada como una oportunidad que la historia nos ofrece para construir un proyecto de Galicia en el que todos podamos respaldarnos, por el que todos podamos luchar, llenos de una esperanza que despierte, aliente y justifique la capacidad de sacrificio. La globalización presenta un escenario mundial de enormes posibilidades, pero también de retos gigantescos. Los países, las personas, nos entendemos cada vez más como complementarios, al tiempo que nos movemos con reglas y en entornos más competitivos.

Nuestro mundo, y podría decirse lo mismo de Galicia y sus problemas, se caracteriza por una creciente sensibilidad que no termina de encontrar un cauce compartido, de convergencia cívica, de misión común, al margen de banderías y particularismos. Si nos atrevemos a desplegar la determinación y la voluntad necesarias para afrontar juntos

y sin demoras la crisis económica, le pondremos fin y la habremos convertido en una oportunidad de renovación y fortalecimiento. Pero necesitaremos una visión amplia y magnánima, capaz de dejar en segundo plano intereses particulares, ideológicos o partidistas.

Si cedemos a las tentaciones nostálgicas, si miramos para otro lado o confiamos nuestro destino a lo que puedan hacer los demás, nos condenaremos, y condenaremos Galicia, a la postergación y a la queja sempiterna. De modo que, dentro de cincuenta años, seguiremos sin resolver nuestros problemas de transporte, de sanidad, de educación, de paisaje y, por supuesto, de identidad y autoestima.

Seguiremos con nuestras universidades exangües, como han denunciado voces tan claras como la del profesor Castellano. Seguiremos con las rías sin sanear y al capricho de los furtivos. Seguiremos con obras mastodónticas sin sentido, como el Gaiás. Y con la sociedad civil ausente, mientras campan a sus anchas los que se enriquecen fuera de toda norma en el mundo del fútbol o se aprovechan de los negocios impulsados por el amiguismo.

Quizá algunos piensen que exagero nuestra real capacidad de acción ante una crisis de semejante calado, que no hay nada que hacer porque dependemos completamente del entorno. No hablo a esos, hablo a quienes piensan más bien que está casi todo por hacer y que podemos hacerlo.

Sé a quién me dirijo.

Cualquiera puede comprobar, si levanta la vista, que están aquí las élites gallegas. No sólo las políticas, también las empresariales, las sindicales, las culturales y muchos representantes del tejido asociativo que constituye la so-

ciudad civil de nuestro país. Sé a quién hablo y debo decir que esta crisis no solo ha arruinado millones de economías familiares, sino que está teniendo el efecto, quizá años atrás imprevisible, de poner bajo sospecha la reputación de las élites dirigentes: de todas, no solo de las políticas.

Con razón se cuestiona nuestra falta de compromiso, nuestra prepotencia, manifestada en continuos excesos con fondos públicos o privados, nuestra voracidad, nuestras ansias de dominio, piensan que nos ayudamos entre nosotros en vez de ayudar a los más indefensos y necesitados, a los que sufren frontalmente el embate de la crisis.

Si queremos devolver la esperanza, si realmente deseamos la unidad para construir un país grande que supere los localismos, los enfrentamientos cainitas, las pequeñas miserias, tenemos, en primer lugar, que dar ejemplo.

Insisto. No me refiero ahora solo a nuestros políticos ni al espectáculo de invectivas que acostumbran ofrecer semanalmente en la calle del Hórreo, tan alejado de la mesura y la ponderación como de lo que realmente preocupa en la calle.

Me refiero a todos.

Es obvio que no podemos estar de acuerdo en cada detalle y que siguen siendo necesarias la justa discrepancia y el respeto a la diversidad. Pero también resulta palmario que, especialmente en tiempos como los que vivimos, debería ser mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Es, de hecho, mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Trabajemos sobre lo que nos une. Dejemos a un lado, siquiera por un momento, lo que nos enfrenta.

¿Cómo puidemos chegar a unha situación na que

aquilo que nos é máis íntimo converteuse en causa principal de rifa e enfrontamento?

¿Cómo pode o noso idioma, que amamos e posuímos pacíficamente desde nenos, ser a orixe de tan virulentas controversias e divisións?

¿Cómo puido estarnos prohibido durante tantos anos para sernos agora imposto?

La difícil situación social y económica que afrontamos no se resuelve con solistas geniales que toquen partituras en combate con otros solistas. Se resuelve con educación del oído, instrumentos precisos y afinados, ganas de tocar juntos, pasión por la partitura y un director de orquesta capaz de integrarlos en una melodía común bien definida que haga imposible el resentimiento.

Estamos en la hora de un gran acuerdo. Un acuerdo que empiece por cuestiones de respeto y de estilo, tan importantes. Aludo, por supuesto, a los modos de hablar y defender las propias opiniones. Pero también a la sobria ejemplaridad que nos haga merecedores de la confianza ahora en entredicho.

El respeto por uno mismo y por los demás facilita el entendimiento. Hemos sabido hacerlo antes, con la llegada de la democracia. Y como resultado obtuvimos en pocas décadas un progreso jamás antes conocido. Hemos mejorado mucho en casi todo. Algunos de nuestros sectores empresariales han logrado una presencia en España y en el mundo que ni siquiera podíamos imaginar hace tanto, y nadie discute las mejoras en la calidad de vida.

Ahora tenemos que llegar a un gran acuerdo de país, sobre lo que somos y lo que queremos ser, pero sin dejar de lado problemas acuciantes ni remitirlos negligentes.

temente a los presupuestos del Estado, entendidos como una especie de lotería que toca muy raramente y que funciona como un destino ciego, al margen de nuestras posibilidades de acción.

Muchos de los problemas no provienen de la falta de dinero, a veces tampoco de la falta de gestión, sino de una cultura que propende al atajo y al chanchullo. Una cultura que parece no respetarse, ni siquiera en sus instituciones: basta pensar en los últimos acontecimientos en torno al Valedor do Pobo.

La mejor defensa de una lengua es su potencia demográfica y la acción común, económica y cultural, de sus hablantes. Pero ni afrontamos con rigor el suicidio demográfico en proceso ya avanzado ni parecemos capaces de acuerdos estables y de largo alcance en materias perentorias como la educación, la sanidad o el diseño de un marco seguro —también desde el punto de vista jurídico— que favorezca la innovación y atraiga a los emprendedores.

Ciertamente, Galicia es hoy por hoy dependiente. Y podremos llegar a conseguir algunas cosas y otras quizá no. Pero lo seguro es que nada se alcanzará sin una acción concertada, que sume esfuerzos para aprovechar las oportunidades.

Es hora, repito, de un gran acuerdo. Un gran acuerdo social, no solo entre políticos, que cuaje en un gran proyecto de Galicia en el que todos puedan sentirse cómodos y confiados.

Ofrezco La Voz y sus medios de comunicación para darle asiento y volumen, tanto en Galicia como fuera de ella. No hace falta que lo diga, porque ese ha sido siempre nuestro afán, mi afán.

Acaso haya quien piense que semejante llamamiento no me corresponde. Puede que tengan razón. Evidentemente, pienso que estoy en mi derecho y que lo que no me corresponde es concretar los términos de ese gran acuerdo ni los modos de alcanzarlo. Pero si me he excedido, les ruego que me disculpen. Atribúyanlo, por favor, a mi pasión por Galicia y a la necesidad de dejar tranquila mi conciencia.

Moitas grazas, querido Presidente, por querer honrarnos coa túa presenza e a túa palabra.

Moitas felicidades de novo, padre Calo, e desculpe que utilice a súa obra e a súa vida, a música, como metáfora social e política.

Moitas grazas a todos vostedes, señoras e señores, amigos, pola súa atención e a súa compañía nunha xornada sempre sinalada para esta casa.

La hora de superar los localismos

51.º Premio Fernández Latorre

19-11-2009. Francisco Vázquez, embajador de España cerca de la Santa Sede y alcalde de A Coruña durante 23 años, recibe el Premio Fernández Latorre por su larga e intensa carrera política, «durante la cual ha sabido trabajar con igual dedicación en favor del bien común de sus conciudadanos, de Galicia y de España». En su intervención en el acto, Santiago Rey Fernández-Latorre apela a que «ante un desafío de las dimensiones de la actual crisis es imprescindible actuar todos a una, lo que no ocurre». Por ello, insta a buscar ese modelo que «nos falta», tanto en Galicia como en España. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, dice acerca del debate sobre las cajas de ahorros que «Galicia non pode inhibirse e deixar que outros decidan por nós».

*Excelentísimo Señor Presidente de la Xunta de Galicia,
Excelentísimas autoridades,
Señores miembros del Patronato de la Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre
Excelentísimo señor embajador cerca de la Santa Sede:
Querido Paco Vázquez,
Señoras y señores:*

Poucas cousas engaiolan máis aos seres humanos que ver as pegadas dunha vida coherente ao servizo dos demais. Cada vez é menos doado atopar persoas así, e menos na política, que hoxe, por desgraza, vive días de dramático descrédito. Pois ben, o gañador da cincuenta e unha edición do Premio Fernández Latorre é un deses raros políticos cunha folla de servizos coherente, de mérito e aplaudida por xentes de todo o abano ideolóxico. Para chegar ata aí, penso que Francisco Vázquez, o noso vello amigo Paco de tantas décadas de traballo veciño, baseouse en tres alicerces: a fidelidade ás propias ideas, no seu caso as socialdemócratas; a imaxinación creativa (e aí están, en pé e con éxito, os moitos proxectos saídos do seu maxín); e o compromiso constante con Galicia e con España. Todo iso feito sempre dende un dos máis fermosos xeitos de ser galego, que é o ser coruñés.

Resulta casi ocioso que yo recuerde aquí, en Galicia, la trayectoria de Francisco Vázquez. Y más vano todavía es que lo haga en su querida ciudad de La Coruña, donde fue alcalde durante 23 años y con seis mayorías absolutas. El suyo ha resultado un caso singular en la historia del municipalismo democrático español. Tal era la sintonía del

alcalde con los coruñeses, que, si me permiten por un instante la licencia del humor, se diría que solo un pequeño milagro, una llamada al Vaticano, pudo lograr que Francisco Vázquez dejase el despacho de María Pita.

El hoy embajador cerca de la Santa Sede se define como «un político de obras y hechos», poco afecto a los cargos orgánicos. Pero la evidencia de su talento le ha llevado a ocupar muchos puestos relevantes, en cuyo desempeño siempre concitó raras unanimidades. Ha sido diputado, senador, secretario general de los socialistas gallegos, presidente de los alcaldes españoles y ahora diplomático en la más antigua de las embajadas de España. Vázquez siempre ha sabido ver más allá de lo local, que a veces puede caer en lo parroquiano y hasta en lo excluyente, como nos recuerdan en Galicia decepcionantes y todavía recientes experiencias.

Francisco Vázquez entendió que una de las mejores maneras de ayudar al desarrollo de Galicia era mejorar La Coruña. Tomó las riendas de una ciudad con el ánimo mellado tras serle retirada la capitalidad de Galicia y acertó a reinventarla, a dibujar para ella un futuro ilusionante. Hoy, según todos los estudios económicos, el área metropolitana de A Coruña lidera el desarrollo gallego, una realidad que para desgracia de Galicia no han sabido atender los sucesivos gobernantes de la Xunta, que no acaban, tampoco ahora, de dar a la ciudad medios y pista libre para que corra aún más y mejor.

Hablaba antes del compromiso ideológico de nuestro premiado. El suyo no es uno de esos socialismos cosméticos y sin huella, hoy tan al uso. La siembra de Francisco Vázquez lleva lustros dando cosechas tangibles de

cohesión y justicia social: A Coruña cuenta con una malla asistencial única en Galicia; su red de bibliotecas suscita la admiración y la curiosidad de ciudades españolas punteras; sus museos científicos son vanguardia. Además, quiero destacar su temprana y pionera sensibilidad ecológica, sin duda azuzada por el accidente de Bens y los sucesivos naufragios de los petroleros, buques de alto riesgo que todavía hoy descargan en pleno corazón de la ciudad, a la espera de que se culmine el imprescindible puerto exterior de Langosteira.

Francisco Vázquez se define como ciudadano del mundo. Yo creo que lo es, pues sabe transitar de lo particular a lo universal. Así lo prueban los pasos ejemplares que ha sabido dar por su ciudad, por Galicia y por España. En los días de la Transición, cuando muchos compartíamos las esperanzas e inquietudes del mejor galleguismo, Francisco Vázquez se enfrentó a los dirigentes de su partido en Madrid para defender a Galicia frente al que se dio en llamar «o Estatuto da aldraxe». Nuestro premiado de hoy fue uno de los artífices de que Galicia consiguiese un autogobierno de primer nivel. Pero con idéntico rigor, también ha sabido señalar las líneas rojas cuando las fuerzas centrífugas amenazan la idea de España. Antes y ahora, ha asumido el envite de poner su conciencia y su coherencia ideológica por delante de las coyunturas cortoplacistas de sus siglas.

He evocado en un boceto rápido la trayectoria de Francisco Vázquez y nubla ahora mi ánimo una cierta nostalgia de otra política y de otra esperanza. Asistimos con desasosiego y anonadados al desprestigio de las instituciones políticas y al bochorno de la corrupción, en general, en todos los partidos políticos. Empieza a escucharse en

la vida pública una excusa tan nociva como esa que viene a decir «yo también robo, pero menos que tú».

Camino de los cuatro millones de parados y en serio riesgo de cerrar el año con un déficit público próximo al 10 %, los grandes partidos españoles se ensimisman en sus propias cuitas. El Gobierno improvisa parches que hasta ahora no dan fruto alguno. La oposición incumple su tarea de aportar una alternativa, sumida como está en su propio marasmo interno. Los cargos públicos, que deben ser ejemplares a la hora de respetar el marco que todos nos hemos dado, llegan al extremo de animar revueltas contra decisiones de las más altas magistraturas, como hemos visto en Cataluña, a la espera de la retrasadísima sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. El modelo de las 17 Administraciones se desboca, sin que nadie ponga coto a sus gastos incontrolados, y comienza a percibirse que ante un desafío de las dimensiones de la actual crisis es imprescindible actuar todos a una, lo que no ocurre.

Mientras tanto, nos distraemos con lo accesorio. Los dirigentes del fútbol siguen teniendo bula ante la ley, pues la Administración tolera sus desmanes en nombre de un nefasto populismo. España, como antaño, no inventa, produce poco industrialmente y se está quedando rezagada en la naciente sociedad de la información. Todo ello sucede ante el clamoroso silencio de una sociedad civil adormecida, o tal vez ya desganada ante el nulo eco que reciben sus quejas en los poderes públicos, a pesar de que son unas reclamaciones casi siempre dictadas por el sentido común.

Muchos de los retos que afronta España se agudizan en Galicia. También aquí el localismo se convierte en una rémora preocupante. Lo prueba el nuevo escenario que pue-

de abrirse ante nuestras cajas de ahorros. Por resabios localistas, personalismos, y por un centralismo de nuevo cuño, no se piensa en el interés común de Galicia y se pretende incluso ignorar las realidades objetivas de las dos entidades. Las fechas apremian, y si seguimos siendo incapaces de alcanzar un gran acuerdo para defender lo nuestro, existe el riesgo serio de que pasemos a la historia como la generación de gallegos que permitió el final de Fenosa, el paso de Endesa a manos italianas y ahora, la desaparición de las cajas. Demasiadas muertes para nuestra historia.

En Galicia, como en España, nos falta un modelo. ¿En qué queremos destacar? ¿De qué queremos vivir? ¿Se están dando a los empresarios, los creadores de empleo, las facilidades productivas que demandan? ¿Cómo es que todavía no hemos alcanzado un pacto por el territorio que permita poner coto a lo que ha sido un urbanismo horrible y al estrago constante de nuestra increíble riqueza natural? ¿Cómo es posible que se emplee el idioma gallego como arma arrojadiza hasta provocar el rechazo y la desunión? Si queremos conquistar el futuro, ¿tiene sentido recortar el presupuesto de nuestras universidades más de un 2 %, como acaba de ocurrir? ¿Es razonable restar en la educación de las generaciones futuras y seguir adelante con el paradigmático sinsentido del monte Gaiás?

Créanme, no pretendo ser agorero ni jugar a *enfant terrible*. Mi función no es más que intentar ser notario de la realidad. Pero no puedo terminar mis referencias a la situación de Galicia sin alertar, una vez más, de que tenemos sobre nosotros un gravísimo problema demográfico. Si no se invierte la tendencia se pondrá en entredicho a largo plazo la propia viabilidad de Galicia como país.

Vuelvo a Francisco Vázquez, cuyo talento aún guardaba una sorpresa que se ha destapado hace relativamente poco: su faceta de articulista, que han podido disfrutar los lectores de La Voz. Son unos textos eruditos, y siempre con una moraleja aguda, que busca el sabor del clásico Esopo. Son los escritos de un hombre muy leído, que cuando ve una película de su amado John Ford acierta a vislumbrar tras los parajes del Far West los lejanos ecos de las tragedias griegas de Esquilo. Trágicos son también los tiempos que nos toca vivir, con una recesión como no recordábamos y un mundo que le va a hacer la vida muy complicada a las generaciones venideras. ¿Qué tarea le queda a un editor en este entorno de ruido y furia? Solo seguir siendo fiel a mi título, La Voz de Galicia, continuar contando el mundo del mejor modo posible e intentar, como siempre, ser la conciencia crítica del poder; de todo poder.

Llevo casi 50 años en la nómina de La Voz y sigo creyendo en la absoluta vigencia del buen periodismo. Pero los hechos hablan más que las palabras. En un mercado en el que hay una clara inflación de cabeceras sostenidas artificialmente, acabo de firmar la adquisición para La Voz de una nueva rotativa y un nuevo cierre y he aprobado la ampliación de nuestra planta de impresión, que será así la más avanzada de España. Además, estamos desarrollando nuestro proyecto de televisión, relanzaremos Radio Voz y vamos a redoblar nuestra apuesta en internet.

La Voz del siglo XXI sigue caminando. Suele decir Francisco Vázquez que él es hombre de pocas convicciones, pero muy firmes. Lo comparto. La mayor de las mías se llama Galicia. Y ahí nos encontraremos siempre.

Muchas gracias.

Luchar por la hermosa idea de Galicia

52.º Premio Fernández Latorre

25-11-2010. El escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, entonces presidente de la Real Academia Galega, recibe el Premio Fernández Latorre por su larga y fecunda trayectoria literaria. El galardonado recuerda la colaboración de Juan Fernández Latorre y Andrés Martínez Salazar: «Hoxe, nestes momentos, gusto pensar que Santiago Rey Fernández-Latorre fai ás veces de don Juan e eu orgúllome de facer ás veces de don Andrés». Por su parte, el presidente y editor de La Voz pide reflexión y coraje para superar localismos y personalismos y avanzar con éxito en «la hermosa idea de Galicia».

*Excelentísimo señor Presidente da Xunta de Galicia,
Distinguidas autoridades e representacións,
Queridos patronos da Fundación
Aprezado Presidente da Real Academia Galega,
Donas e señores:*

Canta satisfacción me cabe neste momento en que os vexo a todos vostedes de novo na nosa Casa, para compartir connosco o que, despois de cincuenta e dous anos de historia xa é un fito no acontecer xornalístico de Galicia. Se o produto interior bruto dun país non se medira só prosaicamente en euros, senón tamén en talento, emprendemento e vitalidade social, estaríamos todos certos —como eu estou— de que aquí está reunido (se cadra con algunhas indesexadas ausencias) o verdadeiro PIB de Galicia.

Es este incontestable dato el que da volumen y proyección a la reunión que cada año celebramos en nuestro Museo. En primer lugar, ese volumen y esa proyección dan relevancia al homenaje que todos hacemos con nuestra presencia a quien ha merecido el Premio Fernández Latorre. Y, al mismo tiempo, nos exige aprovechar la cita también para compartir ideas. La reflexión es siempre el primer paso imprescindible para cambiar las cosas.

En un tiempo de tanta trivialidad y fluorescencia, dejaría de hacer honor a nuestro título, La Voz de Galicia, si por quedar bien me tapase los ojos y los oídos, o me uniese a esa cohorte de insustanciales y aprovechados que se enmascaran en el halago y la superficialidad para huir de sus verdaderas responsabilidades. No es mi caso. No lo es cuando las cosas van bien. Mucho menos cuando, como

ahora, van manifiestamente mal para las personas, las familias, las empresas, las ciudades y el país entero.

Sé muy bien que cualquier cosa que se diga resulta estéril cuando ya todas las posiciones están tomadas y cada cual cree, en el túnel de su trinchera, que no hay más verdad que la que él ve. Pero, afortunadamente, hoy me dirijo a gente abierta, de pensamiento libre y con una capacidad de liderazgo bien demostrada. En unas cosas coincidirán conmigo y en otras no, pero la obligación de un editor y de un gran periódico consiste precisamente en aguzar el debate —el debate creativo—, porque solo de él puede salir alguna luz. Aún en tiempos tan oscuros como estos, ese debe ser el objeto irrenunciable de nuestros esfuerzos. Permítanme, no obstante, empezar por donde debo y quiero:

La vinculación de La Voz de Galicia y de la Real Academia Galega tiene tanta antigüedad como ambas entidades. No es preciso recordar el papel preponderante del fundador de este diario, mi abuelo Juan Fernández Latorre; de su amigo y socio inseparable, Andrés Martínez Salazar, y de Manuel Martínez Murguía, el fundador de la docta institución, con cuyo libro *Los precursores* comenzó su rica andadura en 1885 la Biblioteca Gallega, que esta Casa ha labrado y mantenido hasta nuestros días pese a todos los avatares de la historia.

Tal vinculación no se ha basado solo en las inercias del pasado común. Se ha debido, sobre todo, a una intrínseca convicción moral que nos ha mantenido fuertemente cohesionados, a pesar incluso de la niebla espesa que provocaron algunos personalismos.

Hoy, la Real Academia lucha por propulsarse hacia el siglo XXI, como lo hace también este periódico, a sabien-

das de que su papel central en la cultura gallega bebe de las fuentes del pasado, pero tiene en el futuro el alimento de su espíritu.

Esa clarividencia tiene mucho que ver con la persona que hoy se encarga de imprimir pulso a la centenaria institución académica. Un hombre de convicciones férreas y de ánimo sereno, sensato y dialogante.

Querido Ferrín, querido Xosé Luís, non sei se te sentes cómodo nesta definición, pero eu podo asegurarche que así é como te vemos moitos. Véxote eu e vete tamén o xurado, que decidíu por unanimidade entregarche o galardón que máis prezamos.

Vémoste como o gran creador que es, irrefutable e insubornable, tanto nos tempos escuros da censura como hoxe en día, cando outra censura máis subtil embaza as consciencias e tenta durmilas alleándoas da súa propia realidade.

Vémoste tamén como un paradigma do espírito rebelde, do inconformista que pensa por si propio e que mantén por riba de todo a coherencia consigo mesmo, aínda que iso traia como consecuencia incomodidades e incomprensións.

Posiblemente, haberá moitas ideas nas que discrepemos radicalmente, pero, aínda estando ben separados ideolóxicamente, moitos sentímonos próximos a ti. Como di o xurado, pola túa afouteza. E como quero dicir eu hoxe aquí, polo teu talento creador, pola túa claridade e polo teu espírito rebelde.

Desde luego que hacen falta hoy coraje y rebeldía para no dejarse someter al cloroformo con el que quieren anestesiar a la sociedad civil aquellos que se han mostrado incapaces de liderarla. Aquellos que en lugar de acción co-

ordinada nos ofrecen verborrea estéril, y en lugar de puntos de apoyo para que renazca la economía nos endeudan más y más con gasto improductivo.

Se dice con frecuencia que los árboles no dejan ver el bosque; que lo concreto impide abarcar lo abstracto. Pero yo creo que a estas alturas de la crisis es necesario realizar el ejercicio inverso e ir del bosque a los árboles; de lo abstracto a lo concreto. Lo concreto, para todos nosotros, es Galicia.

Citaba con su enorme capacidad de síntesis Xosé Luís Méndez Ferrín en la entrevista que le hicimos el 25 de julio, con motivo del fallo del premio, que existe una Galicia que se está despoblando, con la agricultura arruinada, con las explotaciones ganaderas reducidas a la mínima expresión. Se refería a la que él y muchos más llaman ya «la Galicia del este», cada vez a más distancia de la que está a la otra mano de la autopista.

Revisado con atención, ese símbolo de la Galicia que mengua no puede ser más certero. Y, por desgracia, es extrapolable a todo nuestro territorio. Ciertamente es des-carnadamente dramático en el campo, donde los poderes públicos han dimitido de todos sus compromisos.

Baste ver el calvario en el que se deja agonizar a emprendedores ganaderos que ya se habían reconvertido, agrandado y empeñado, mientras se les imponen precios que ni siquiera cubren los costes de explotación. Dado que no fabrican automóviles ni grandes buques, sino que solo producen algo tan abundante en los centros comerciales como la leche, hasta ahora se les ha dejado a su suerte, sin ayuda económica ni apoyo legal.

El problema es gravísimo. A los afectados les duele

más que a nadie, pero también a los demás nos incumbe. Porque Galicia, primera productora de leche de España, puede perder el liderazgo, la competencia e incluso la presencia en el sector. Y de nuevo se hará patente la tantas veces repetida contradicción gallega: un país rico en recursos, pero pobre en resultados.

Entrados ya en el final de la primera década del siglo XXI, tópicos como este deberían haber sido encerrados definitivamente en el cajón de la historia, pero renacen tozudamente cada día ante nuestros ojos. Nos ha pasado con la pérdida del control sobre la energía que producimos; nos está pasando con esa riqueza primigenia que es el agua, y nos sucede incluso con las mejores realizaciones de estos años, como hemos visto con la enajenación de nuestra joya de la corona tecnológica, y estuvo a punto de suceder con la planta de gas y con las cajas.

Hablemos de las cajas. El tormentoso proceso que ahora está a punto de concluir con la fusión ha dado, verdaderamente, la medida de lo que somos. Y, desde luego, no es para felicitarnos. Algunos (los menos) han trabajado por un ansia colectiva; otros no.

Lo vemos todavía ahora, porque, jornada tras jornada, se empecinan en el más destructivo de los localismos, al que dan de comer insultos e insidias infames, puesto que no pueden recurrir a razones y a datos.

Cuando algún joven brillante que ahora esté iniciando sus estudios secundarios se plantee dedicar su tesis doctoral al proceso de fusión de las cajas gallegas y recurra para ello a las hemerotecas, dudo mucho de que persista en su empeño. Sentirá tal vergüenza al ver cómo se comportaron muchos de sus mayores que preferirá no

seguir para no tener que poner en duda la idea de dignidad que debería correspondernos como pueblo.

En esto, como en tantas cosas, se ha visto quién piensa en Galicia y quién piensa en sí mismo. Qué periódico se comprometió y se la jugó para sacar adelante un bien colectivo y quiénes se dedicaron nada más que a luchar contra ese proyecto, simplemente porque les salía más rentable jugar al despreciable localismo.

Quisiera creer que no engañan a nadie con su burdo juego de intereses, pero por lo visto no es así. Los localistas, pese a estar tan alejados de la hermosa idea de Galicia, llaman continuamente a las puertas oficiales para arreglar sus cuentas. Como si se les debiese algo por sus intentos de destrozar el país.

Quizá unas normas claras, marcadas por la realidad del mercado, permitiesen prescindir de tantas pequeñas ambiciones y poner orden en un sector donde un buen número de cabeceras inviables, convenientemente asistidas con ayudas públicas, inflan el mercado de la prensa gallega como una burbuja a punto de estallar.

Es cierto que los periódicos y las empresas de comunicación viven hoy una crisis aguda. Pero no hay más que levantar la vista para ver quién lucha día a día por invertir e innovar y quién se limita a exigir que vengan a salvarlo. En La Voz de Galicia sabemos en qué lado estamos. A cien metros de aquí están tomando cuerpo las nuevas rotativas que ofrecerán todo color y permitirán dar muchos años más de vida en los quioscos a nuestras renovadas páginas.

Enfrente de mí tengo las cámaras de V Televisión, cuya existencia pública desde el 30 de mayo significa (además de un reto descomunal en este tiempo de crisis) que

nuestra Corporación ha sido la única compañía del sector que ha creado empleo, con la contratación de más de 50 profesionales, entre periodistas, realizadores, cámaras y técnicos. Y además, contribuye a estimular la creatividad, con la apertura de la programación a muchos jóvenes innovadores y emprendedores, que tienen en el canal una abierta plataforma de expresión.

Junto con ello, en la Corporación avanzamos en hacernos fuertes en los nuevos soportes digitales, como muestra el hecho de que seamos el primer medio de comunicación de Galicia y el séptimo de España en Internet, con 122.000 lectores diarios y dos millones de usuarios únicos al mes. La Voz, como tantas empresas, sufre la crisis. Pero no se rinde ni se achica.

Hace falta coraje, efectivamente, para luchar hoy, en el escenario más negativo que podemos recordar quienes ya tenemos unas cuantas horas de vuelo. Nunca antes vimos caer a tantos miles de empresas y decenas de miles de trabajadores gallegos en los pozos de la quiebra y el desempleo. Las cifras son todavía más graves en España, donde no falta mucho para llegar a los cinco millones de parados.

Si hemos visto las grandes dificultades que atraviesa la Galicia rural, no es menos preocupante lo que ocurre en las áreas urbanas. Desde los pequeños y medianos comercios que se ven obligados a echar el cierre (y solo reciben buenas palabras y cursos de formación) a las empresas que se deslocalizan. Desde la falta de crédito que ahoga a las compañías innovadoras a la decadencia de otras tradicionales, como los astilleros, apenas sin pedidos nuevos ni capacidad financiera para acometerlos. Desde el grave retroceso económico que sufre A Coruña (aun siendo el

primer motor de Galicia), a los riesgos de desaparición de grandes sectores productivos de Vigo.

En buena lógica, dado que todos somos conscientes de esta difícil situación, habría que esperar el trabajo conjuntado de todos para minimizar los daños que está generando a nuestra sociedad una recesión tan dura.

Pero no es así. A la insolidaridad de las entidades financieras se suma la dispersión y falta de objetivos claros de los Gobiernos, la paralizante burocracia y las farragosas leyes laborales, que solo añaden incertidumbre a las ineludibles y duras decisiones que deben tomar las empresas.

Todo eso se complementa con un indeseado compañero de viaje: la actitud irresponsable de algunos sindicatos y de representantes sindicales, que prefieren apuntalar por encima de todo los logros obtenidos en tiempos de bonanza, aunque sepan que mantenerlos en los tiempos actuales tiene como consecuencia la inviabilidad de las empresas. Esa actitud, que se está vendiendo falsamente como solidaria con los trabajadores, constituye en realidad todo lo contrario, puesto que lo primordial es asegurar la continuidad de las compañías. Si no hay empresa, no hay trabajador.

Pero la insolidaridad, la falta de compromiso y el interés particular están a la orden del día.

Desde que comenzó la crisis, las Administraciones van de fracaso en fracaso. Los ayuntamientos no pueden hacer frente ni siquiera a sus pagos corrientes, pero nadie da el primer paso para replantearse unas estructuras ya inservibles y promover, al menos, la fusión de los que tienen menos de cinco mil habitantes.

La Xunta, señor Presidente, nos despierta cada día con nuevos recortes en partidas esenciales, como los fon-

dos para la dependencia o la inversión en educación. Pero mantiene obras mastodónticas y de todo punto superfluas, como lo que se construye en el monte Gaiás. Hoy, día en que arrancan los fastos previos a la inauguración de uno de los más aberrantes edificios, es el mejor momento para recordar que ese despropósito continúa vacío de contenido. Y, encima, va a devorar buena parte de los presupuestos que habría que dedicar a la expansión de la cultura por todos los lugares de Galicia, y a la preservación de nuestra riqueza patrimonial, hoy abandonada.

Especialmente preocupante es la falta de apuesta presupuestaria por las Universidades, puesto que de su empobrecimiento solo se pueden esperar calamidades para Galicia. Bien es cierto que nuestras instituciones universitarias requieren un replanteamiento a fondo para ser eficientes: abandonar el siglo XIX e integrarse en el tejido social y económico del siglo XXI. Pero ninguna reforma inteligente se podrá hacer si desaparecen de nuestras prioridades.

Algo semejante sucede con la Justicia, que en muchos aspectos todavía no ha conocido los tiempos modernos. Debido a su colapso, en lugar de ser la cima del derecho y el respeto a las personas, se ha convertido en el pantano donde los ciudadanos y sus esperanzas quedan atrapados sin remisión.

Preocupante es también la deriva de la sanidad pública por el exceso de gasto que le ha imprimido irracionalmente la sociedad, y que es obligado atajar. Esta debería ser una preocupación colectiva. Por eso resulta paradójico ver cómo desde el Gobierno central se ponen trabas o dilaciones al empeño de Galicia en el ahorro con la prescripción de medicamentos genéricos.

He citado al Gobierno central. El panorama económico y político es todavía más lamentable en España, con un Ejecutivo que agota desesperanzado su ciclo, sin capacidad de respuesta a las amenazas de la grave crisis y dedicado a disimular y echar la culpa a otros, en tanto agoniza lentamente gracias a la nula oposición que recibe. Si es verdad que la situación española no es comparable con la de nuestros hermanos portugueses, ni con nuestros primos irlandeses, es todavía más cierto que la falta de reacción y el descrédito de las economías del sur de Europa puede introducirnos en un callejón sin salida que recuerda las angustias del corralito que vivió no hace tanto tiempo la economía argentina.

Por eso, como escribí el 25 de julio, es hora de reaccionar y de revolverse contra la resignación. Si entre todos no lo hacemos, tendremos que volver a leer en La Voz de Galicia lo mismo que publicó el 16 de noviembre de 1890, hace ahora 120 años, en protesta por la absoluta dejación del Gobierno cuando las playas de Camariñas se infestaron de cadáveres por el naufragio del vapor británico *Serpent*: «La situación de Galicia —decía el periódico— es por demás irrisoria dentro de la moderna civilización».

Quizá sea hora de dejar de reescribir la historia.

A todos ustedes, el verdadero PIB de Galicia, muchas gracias por su presencia y por su atención.

Mis últimas palabras quiero que sean para felicitar y abrazar al premiado: Querido Ferrín, querido Xosé Luís, é un pracer e un honor entregarche o cincuenta e dous Premio Fernández Latorre.

Noraboa, saúde e coraxe.

Hora de grandes reformas

53.º Premio Fernández Latorre

24-11-2011. El Premio Fernández Latorre es concedido a Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal, por su brillante trayectoria investigadora. En su intervención en el acto de entrega del galardón, Santiago Rey dice que echa en falta en la vida pública los rasgos que definen al profesor Carracedo: determinación, constancia, afán de superación, espíritu de equipo y acierto en la elección de la estrategia. «Es la hora de elegir y priorizar –dice el editor de La Voz–. Sobre todo, de acertar».

*Querido Presidente,
Autoridades,
Querido Angel Carracedo,
Señoras y señores*

A os catorce anos, un capítulo sobre a xenética dos chícharos, lido nun tratado de Bioloxía, mudou o destino de Ángel Carracedo. Ía para fareiro, como os seus irmáns, porque gustaba de vivir onda o mar. Pero os segredos dos xenes enleárono nunha espiral da que xa nunca máis quixo saír. Corenta anos despois de ter lido por primeira vez as Leis de Mendel na súa casa natal de Santa Comba, Ángel Carracedo alumea desde Galicia a investigación xenética forense internacional. Non é fareiro, pero é luz, e guía a senda da investigación como un faro.

El jurado de la cincuenta y tres edición de los Fernández Latorre no solo ha tenido en cuenta la faceta investigadora del galardonado. También es un premio a su afán por aplicar el conocimiento en beneficio de la sociedad y por difundirlo, en charlas a escolares o a través de artículos divulgativos, muchos de ellos publicados en La Voz de Galicia.

Policías e instituciones de varios países han encontrado en el equipo forense de la Facultad de Medicina que coordina el profesor Carracedo un fiel aliado que les aporta pruebas determinantes, capaces de desentrañar aquello que nos hace diferentes a cada uno de todos los demás: la herencia genética.

Ha demostrado con su trayectoria investigadora en

Medicina Legal que es posible situarse a la vanguardia de la ciencia desde Galicia. Sin embargo, su nuevo empeño es más ambicioso. Como director ejecutivo de la Fundación Gallega de Medicina Genómica, aspira a que los éxitos también acompañen a los equipos científicos que la integran, los cuales investigan en torno a la genética del cáncer, de las enfermedades psiquiátricas o de las cardiológicas. Tienen talento, pero les falta financiación, y más en estos tiempos.

Escasez de recursos por los ajustes, ausencia casi total de crédito. A todos los aquí presentes estas dificultades nos suenan, ¿verdad? Pues yo hago mía una frase que le he oído al galardonado: «No podemos guiarnos solo por un criterio económico, porque entonces lo más barato sería morirnos».

Las circunstancias han querido que el Premio recaiga este año en un hombre que representa valores y cualidades que echamos tantas veces en falta entre dirigentes políticos y líderes sociales, empresariales o sindicales. En estos tiempos de zozobra económica de Europa y de vértigo social en España, miles de gallegos están haciendo un máster en supervivencia, y en esta casa, como siempre, jamás olvidaremos sus dificultades. En la calle, la gente ha aprendido más terminología macroeconómica en los últimos meses que en sus épocas de estudiantes. Estamos familiarizados con la prima de riesgo y con las agencias de calificación, pero que sepamos lo que significa no quiere decir que comprendamos lo que ocurre.

Según sus amigos, porque enemigos no se le conocen, Ángel Carracedo posee la fuerza de la pasión propia de aquellas personas que creen en lo que hacen, sin que

importen los sacrificios. Determinación, constancia, afán de superación, espíritu de equipo y acierto en la elección de la estrategia. Lástima que los rasgos que definen al premiado hayan estado ausentes en nuestra vida pública y también en la de Europa durante estos años de concate-nación de crisis y de errores de gestión.

Permítanme que apele a la perspectiva de quien, como yo, lleva más de cincuenta años en nómina de La Voz. Nuestro modelo de bienestar —levantado todavía hace tan escaso tiempo— y de convivencia social están al borde de un precipicio. Ahora todos admiten que España ha sido un país de ricos de alquiler; una nación que gastaba cada año un cinco por ciento más de lo que producía. Una ficción insostenible de cuyas trágicas consecuencias algunos hemos venido advirtiendo desde tiempo atrás. Ahí están las hemerotecas para quien quiera comprobarlo.

Dentro de unas semanas, La Voz de Galicia cumplirá 130 años. No es un aniversario más, sino que una conmemoración tan singular llega acompañada de la reciente puesta en marcha al cien por cien de una nueva rotativa que, en unas instalaciones ampliadas y con unas características técnicas sin precedentes, nos distingue como uno de los mejores en el sector de prensa, dentro y fuera de España. Desde este atril y desde la atalaya que supone llevar medio siglo dedicado a la edición de un periódico líder sé que me creen si afirmo que en nuestra versión impresa o en la digital seguiremos siendo lo que hemos sido siempre. Interpretaremos los acontecimientos de Galicia y de nuestro alrededor como hasta ahora: con criterio independiente, crítica constructiva, abiertos a todo y a todos, pero también incansables en el combate de las lacras localistas,

las necesidades de gobiernos mediocres y las injusticias que padecen los ciudadanos.

Hoy España es un país más débil económicamente que a finales del último siglo, y también es más endeble como Estado. Del mismo modo que se ha deteriorado el PIB, el empleo y la confianza, la acción política sectaria ha minado la convivencia y el respeto entre españoles de diferente ideología, entre territorios, lenguas y hasta entre creencias.

Reaccionar frente a una crisis financiera alentada por el ansia de los especuladores y restañar la división social ya no es cuestión de voluntad, sino de obligada necesidad. Es hora de grandes reformas y, al igual que ocurre en la empresa privada, de adoptar medidas rápidas para equilibrar los ingresos y los gastos de unas Administraciones hipertrofiadas, duplicadas y, admitámoslo de una vez, ineficientes.

Es el momento de elegir, de descartar y de priorizar. Sobre todo, de acertar. Reducir, por ejemplo, los fondos para investigación científica puede ser tentador. En cambio, una vez más no se habría acertado en la elección de los recortes porque estaríamos poniendo un puente de plata para que continúen fugándose a otros países los jóvenes que con tanto esfuerzo y dinero hemos formado en nuestras universidades. Fomentar la emigración de los gallegos mejor preparados y teñir del color del carbón el horizonte de nuestro país. ¿Es eso lo que pretendemos?

Del acierto o del error en las decisiones que adopten el nuevo Gobierno de España, la Xunta de Galicia y las instituciones europeas depende el futuro de varias generaciones, que se enfrentan al riesgo cierto de vivir y disfru-

tar de unas condiciones de bienestar social peor que las de sus padres. Si los que llegan al poder, como los que se van, continúan por la senda de las equivocaciones y de la inacción, esperando que alguien venga a resolver nuestros problemas, se estará creando pobreza para el presente y para el futuro.

Ya se han hecho mal demasiadas cosas y ya se ha perdido demasiado tiempo, como ocurrió en su día con el *Prestige*. La sociedad civil todavía está esperando un ajuste de cuentas con aquellos que, por acción o por omisión, han favorecido que cuatro años después de la caída de Lehman Brothers estemos peor que entonces. Ni se han tomado medidas ni nadie, salvo los ciudadanos, ha pagado la factura.

Atribuir la culpa de todos nuestros males a los mercados resulta pueril. Si miramos a nuestro alrededor desvestidos de prejuicios ideológicos, veremos que la responsabilidad del hoyo por el que descendemos es múltiple; un mal como la hidra de siete cabezas a la que, cuentan, se enfrentó Hércules.

El oportunismo político, las medias verdades que por rentabilidad electoral se dijeron durante estos años de crisis, han colmado la paciencia de los ciudadanos. También la mía. Están hartos de que los órganos de control bancario no hayan desempeñado sus funciones; de presenciar enfrentamientos cainitas entre territorios y entre banderías políticas. Hartos de ver cómo en lugar de buscar soluciones a los problemas a través del consenso y la lealtad se han intentado enterrar, a riesgo de que se pudrieran y lo contaminaran todo, como así ha ocurrido. Comprendo, en el fondo, que muchos envidien a los vecinos islandeses capaces de sentar en el banquillo de un Tribunal Penal a

su ex primer ministro por negligencia grave en la gestión de la crisis.

Miro al catedrático de Medicina Ángel Carracedo y me pregunto cómo reaccionaría el sistema inmunológico de nuestro cuerpo ante la acción de unos agentes nocivos que ponen en peligro la vida tal y como la conocemos. No hace falta que me responda el profesor: seguro que los combatiría y los expulsaría.

Hace unos días se acabaron los mítines de esa especie de campaña electoral permanente en la que estamos atrapados en España. A pesar de que atravesamos un momento histórico, con un país amenazado de ruina, hemos asistido a idéntico baile de máscaras que en anteriores elecciones. Se ha hecho ruido para disimular los silencios; para encubrir lo que no se dice.

El resultado de las urnas del domingo no resolverá los problemas. El cambio por sí mismo tampoco garantiza que, a partir de ahora, las decisiones que hay que adoptar sean las acertadas. Para romper la cadena de esa cascada de errores es necesario, ante todo, que la acción política se rija por valores como los que definen a nuestro premiado de hoy y por el principio del bien común. Se ha desaprovechado demasiado tiempo en fomentar la división entre los españoles, entre trabajadores y empresarios, entre los de un territorio y los de otro.

Los votos dan o quitan la victoria, pero no regalan el liderazgo, que ha de ganarse cada mañana al llegar al puesto de trabajo. Hemos visto en solo unas semanas caer a varios Gobiernos europeos, como si fueran los mercados en vez de los ciudadanos los que tienen el derecho a elegir en democracia.

Ante nosotros se abre una encrucijada doble. Por un lado, qué país y qué derechos sociales vamos a salvar para las futuras generaciones y cuáles son las renuncias que estamos dispuestos a asumir ahora que todos sabemos que España no puede seguir siendo un país de ricos de alquiler. Por otro lado, qué camino elige Europa en el siglo XXI, una vez que se ha certificado que el esqueleto institucional de Bruselas es débil como el de un recién nacido, y que la Unión Europea carece de la unidad económica y fiscal imprescindibles para que el euro sobreviva a los embates de los especuladores y al egoísmo de los Gobiernos europeos.

El investigador hoy galardonado es un referente internacional porque ha sabido sumar talento y esfuerzo. Nadie le ha dado nada, sino que sus conquistas en la búsqueda del conocimiento son mérito del trabajo y del acierto en las decisiones.

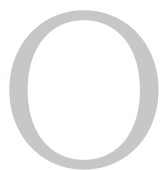
Que tu ejemplo, querido Ángel, les alumbre y nos alumbre.

Muchas gracias por su atención.

Un cambio en el rumbo

54.º Premio Fernández Latorre

28-11-2012. El impacto de la prolongada crisis ha hecho mella en amplias capas sociales. En este dramático momento, el Premio Fernández Latorre distingue a las cinco Cáritas diocesanas de Galicia «por su incansable labor en favor de los más necesitados y de la cohesión social». Recoge la distinción el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. El presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, dice que Cáritas es «a faciana máis nobre da sociedade». Y el de La Voz de Galicia reclama un cambio «a todos los que deciden en los asuntos públicos. Un cambio en el rumbo, porque el esfuerzo a los remos ya lo ponen todos aquellos que no pueden olvidar jamás el empeño de dejar a la siguiente generación un mundo ligeramente mejor al que se encontraron».



Premio Fernández Latorre, que enche tanto de orgullo a esta Casa desde hai máis de cincuenta anos, caracterizouse nas últimas edicións por dar honra a senlleiros nomes de Galicia, non unicamente no rico mundo do xornalismo, senón tamén no ámbito das humanidades, que é tanto como dicir no espazo do compromiso, a solidariedade e a entrega.

Este ano é para min unha satisfacción moi especial que o xurado poña os seus ollos nunha institución que pronuncia como ningunha esas tres palabras. Compromiso. Solidariedade. Entrega. O compromiso nace da vontade; a solidariedade implica acción; e a entrega, dedicación de cheo aos outros.

Moitos poden gabarse de ter incluído o primeiro concepto nas súas pautas de vida. Xa menos, tamén o segundo. E só os mellores son quen de reunir os tres na súa conduta diaria.

Hoxe, querido arcebispo Julián, estamos aquí cos mellores. Convosco.

Lo que ha hecho Cáritas desde su fundación, hace 65 años, es dedicarse plenamente a los otros de una manera incondicional. Jamás distinguió quiénes eran, de dónde venían, qué pensaban ni qué creían. Se puso siempre a disposición de los que necesitaban ayuda, y así sigue hoy, sin preguntar por qué otros —sean las múltiples organizaciones de la sociedad civil o sean las instituciones públicas— dimitían tantas veces de sus obligaciones.

Ahora, cuando el concepto Estado de bienestar empieza a ser borrado del libro de la historia, y cuando cinco millones de parados nos contemplan, Cáritas (Amor, pues eso es lo que significa) toma sobre sus hombros la respon-

sabilidad y el trabajo de aliarse con los que nadie quiere: aquellos que han sido privados de la suerte de ganarse la vida. Bien merecen este homenaje todas las entidades que, desde una óptica u otra, se esfuerzan por reparar lo que las instituciones tantas veces destrozan, y por repartir pan y justicia entre los que de verdad lo merecen.

Mi reconocimiento a todos ellos.

Decía que el Estado de bienestar está desapareciendo del libro de la historia. Se han empeñado en tal aberración incluso quienes se proclamaban sus adalides, y hoy ya sabemos que con la acción de unos y la omisión de otros, el mundo que llegó al más alto nivel de desarrollo y compromiso social —esto que llamamos Europa— se declara en bancarrota. Sus líderes tiran la toalla y decretan el empobrecimiento general, excepto el suyo.

Los políticos, tan dados a hablar del bien común, dicen a quienes debían defender que han vivido por encima de sus posibilidades, los insultan por haber aspirado a vivir dignamente, y permiten que los echen hasta de sus viviendas. No se van ellos, sin embargo, de sus palacios, de sus aviones, de sus lujos ni abandonan sus exagerados aires de grandeza. No recortan lo que sobra, como son todas esas instituciones redundantes donde se reparten puestos, prebendas y nóminas, pero sí suben los impuestos y asfixian la economía productiva para acumular fondos que les permitan continuar en su huida hacia delante.

Sí condenan a la ruina a los que se plantean cada día como una dura jornada de trabajo —sea en el campo, en el mar, en el comercio, en los servicios o en la industria—, pero no presentan una sola objeción a los que se dedican a la economía especulativa o a la competencia desleal,

sostenidos artificialmente por subvenciones y favores inconfesables. Hemos visto cuánto dinero se puede fabricar para salvar a entidades insolventes o para afrontar el pago de intereses de las finanzas públicas que rayan en la usura, pero nada que estimule la creatividad y el esfuerzo de quienes sostienen con sus impuestos las cuentas del Estado.

He dicho y escrito en más de una ocasión que la crisis en que nos hallamos inmersos tiene responsables con nombres y apellidos. No sobrevino por una catástrofe natural, sino que fue provocada y alimentada por quienes tenían la obligación de evitarla. Ninguno de los responsables ha pagado sus errores, aunque sí comprobamos cómo endosaban la factura a todos los demás.

Como ciudadano y como editor he expuesto mi protesta por la utilización de la política como una plataforma para el disfrute y la manipulación en lugar de un instrumento para mejorar la cohesión social, pese a que ese es el verdadero objeto de la democracia. He tenido que llegar a mostrar mi desagrado (que no es solo mío) por la falta de valentía de los líderes políticos y la pasividad de la sociedad civil. He indicado también que el camino acertado es el contrario a los despilfarros y la hipertrofia de la Administración. Y he reclamado con urgencia un cambio claro en el manejo de la crisis. En lugar de desactivar la economía real, ponerse a favor de la gente.

Estas ideas están ya hoy en el pensamiento de la mayor parte de la población. Pero no han llegado todavía a la médula de los dirigentes, tan significados en la aversión al cambio. Hoy todavía nos anuncian sin reparo que el 2013 será un año de más penalidades. Penalidades para las empresas, para los autónomos, para los trabajadores,

para los jóvenes, para los mayores, para los desempleados. Semejante reconocimiento de incapacidad no es admisible. Porque nadie, ni el presidente del Gobierno, ni las autoridades de Bruselas, ni la jefa del Ejecutivo alemán tienen legitimidad para condenar a la sociedad a la pobreza y a la desesperanza.

Justamente en estos días Galicia inicia una nueva etapa. Las elecciones de octubre mostraron con toda claridad las tensiones que anidan y crecen en la sociedad. También nos hicieron ver la falta de ideas y el desplome moral de muchos interlocutores públicos. Y, sobre todo, la desafección y la desconfianza de una gran parte de los gallegos hacia los políticos. Muchos ya no creen que se pueda esperar que llegue alguna solución desde los despachos o los escaños del Parlamento. Ojalá no tengan razón.

El mandato de los votantes ha sido claro. Han dicho quiénes tienen carta para aparecer en escena, quiénes deben reflexionar y reinventarse y quiénes tienen ante sí una segunda oportunidad para liderar el cambio. Dentro de unas horas, la Cámara gallega nombrará presidente y comenzará la etapa decisiva. La etapa en que con menos recursos y más dificultades, más hay que hacer por recuperar una Galicia que está pidiendo a gritos más vida.

La misión no es fácil, ni se puede cumplir con las viejas recetas. Pero es ineludible. Esperamos de corazón que el presidente de la Xunta, que hoy nos honra con su presencia, sume a su capacidad el ánimo y el apoyo que necesita para cruzar el Rubicón. Y consiga que mucho antes de que acabe la legislatura los números rojos de Galicia en tantos ámbitos sean ya únicamente un mal recuerdo.

Es hora de reclamarle un cambio. Y de reclamarlo a

todos los que deciden en los asuntos públicos. Un cambio en el rumbo, porque el esfuerzo a los remos ya lo ponen todos aquellos que no pueden olvidar jamás el empeño de dejar a la siguiente generación un mundo ligeramente mejor al que se encontraron.

Ese es el sueño de los que hoy son honrados en esta Casa. Es el sueño de la sociedad responsable. Y no es posible renunciar a él.

No renunciará, desde luego, La Voz de Galicia, porque, para hacer honor a su título, esta empresa de comunicación, con todos sus modelos, soportes y formatos, no solo habla al largo millón de gallegos que la siguen cada día, sino que los escucha y da altavoz a sus preocupaciones. Así lo ha hecho en los últimos 130 años, desde su primer editorial —tan pleno de actualidad pese al tiempo transcurrido— y así lo hará en el futuro.

Es el momento de los gallegos. Desde aquí ofrezco la colaboración de este periódico para acompañarlos en el camino hacia la superación de los problemas que hoy nos agobian. La Voz lo desea y lo busca. Lo exigen su compromiso con Galicia, su solidaridad con los gallegos y su entrega a la verdad y la independencia.

Mi felicitación a los premiados y mi agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias.

Galicia necesita esperanza

55.º Premio Fernández Latorre

22-11-2013. Galaxia recibe el Premio Fernández Latorre por su contribución «á recuperación e fomento da lingua e a cultura galegas e o seu compromiso inquebrantable co patrimonio cultural de Galicia, que se ten concretado na publicación dos autores máis destacados da comunidade ata formar un catálogo vivo de mil títulos». El director general de la editorial, Víctor Freixanes, dice que «a crise que estamos a padecer non pode ser un pretexto para quedar desasistidos». Por su parte, Santiago Rey afirma que está rindiendo homenaje a Galicia: «Si, a Galicia. Porque diso se fala cando se fala de Galaxia. Fálase dese sentido bo do gran galeguismo».

*Señor Presidente da Xunta de Galicia
Membros do Consello de Administración
de Editorial Galaxia
Autoridades
Señoras e señores:*

Nada hai máis grato para min, e tampouco máis emocionante, que subir hoxe aquí, na entrega do Premio Fernández Latorre, na súa edición cincuenta e cinco, a render homenaxe a Galicia. Si, a Galicia. Porque diso se fala cando se fala de Galaxia. Fálase dese sentido bo do gran galeguismo, que naceu como un raio de esperanza o vintecinco de xullo de mil novecentos cincuenta, e segue hoxe, sesenta e tres anos despois, espallando a mesma luz e procurando o mesmo anxeio.

E non podo falar de Galaxia, do universo de Galicia, sen botar de menos aquí, agora mesmo, ao seu presidente Benxamín Casal, mestre e exemplo tan necesario na entrega e no amor á causa nobre, que non necesita de máis armas que o espírito e a palabra para mover ao convencemento. Que se afianza nos ideais e no consenso, en troques da confrontación e o sectarismo que outros tanto practicaron e practican.

Teño ben gravadas as últimas palabras que nos demos, cando lle anunciei, antes que a ninguén, o fallo do xurado que outorga este recoñecemento. Benxamín respondeu cos únicos adxectivos que sabía utilizar: os do agradecemento, os da humildade e os da esperanza teimosa. O meu homenaxe a el.

Dijo Benxamín Casal en su última entrevista en La Voz

de Galicia que la gente de Galaxia se siente especialmente reconocida porque este es un premio de la sociedad civil a la sociedad civil; de un proyecto de país a un proyecto de país.

Así es. En los impulsores de Galaxia ardió siempre ese mismo fuego de servicio, lejos de cualquier bandería y cerca de los altos valores de la cultura y de la personalidad auténtica de nuestra tierra. Muchos de ellos fueron y son a la vez gentes de Galaxia y gentes de La Voz de Galicia.

Recuerdo a Ramón Piñeiro, que tomó casi en solitario el titánico papel de traspasar la antorcha del mejor galleguismo a las generaciones nacidas en la Longa Noite de Pedra. Recuerdo a Francisco Fernández del Riego, colaborador senlleiro de esta Casa hasta sus últimos días, trabajador silencioso levantando y afianzando cimientos. Recuerdo a Ricardo Carballo Calero, serio y utópico innovador que tuvo siempre las páginas del periódico abiertas a sus polémicos debates. Recuerdo a Marino Dónega, tan cercano a mí, compañero y maestro en tantos ideales de amor a Galicia. Recuerdo a nuestro Domingo García Sabel, humanista, intelectual y filósofo descubriéndonos a nosotros mismos con sus sabios artículos en La Voz.

Y recuerdo con toda la emoción del amigo entrañable a Carlos Casares, la gran referencia de los columnistas de este periódico todavía hoy, once años después de aquella columna que quedó solemnemente en blanco el único día que no pudo entregarla para su publicación: el de su fallecimiento, el 9 de marzo de 2002.

Pero la obra de Galaxia, como la de este periódico, trasciende la cortedad de nuestras vidas. Y hoy, como el siguiente eslabón de aquellos impulsores, tengo conmigo, tenemos con nosotros, a Víctor Fernández Freixanes, el

continuador y el renovador; el creador y el actor. Gracias, Víctor. Tú vuelves a demostrar que el proyecto galleguista que hoy reconocemos aquí y el de servicio a Galicia de esta Casa han estado y están siempre imbricados. Son distintos y son uno. Son independientes y están juntos. Porque se nutren de la mejor savia de esta tierra y participan de esa «esperanza teimosa» que cité al principio como apellido de Benxamín Casal.

Desde esa esperanza teimosa quiero hablarles hoy. Galicia necesita esperanza. Y necesita persistir en ella. Citarla. Reclamarla. Porque nada puede ser más constructivo que la esperanza cuando todo alrededor va mal y hasta lo que es de simple justicia se nos niega.

Acabamos de verlo hace una semana con la sentencia que quiere poner fin —esperemos que no— a la historia de la desoladora catástrofe del *Prestige*. Los fallos de los tribunales no se discuten; se acatan. Y así haremos siempre los demócratas. Pero no es admisible que se pueda condenar a Galicia a ser a la vez víctima y culpable, cuando los verdaderos responsables ni siquiera sufrieron el banquillo. Es para quedarse anonadado tras el golpe más grande a nuestra dignidad y el augurio más temible de que en el futuro podamos ser de nuevo tierra quemada para cualquier vándalo que no tenga escrúpulos en destruir nuestro patrimonio.

Anonadados nos dejan tantas destrucciones a las que nadie pone remedio. Basta ver lo que nos sucede cada año con los incendios forestales para constatar que, también en esto, el único papel que asumen los responsables es el de plañideras. Ni una sola medida efectiva mientras nuestra riqueza forestal se entrega a los únicos que le sacan provecho: los incendiarios. A los gallegos que amamos nuestra

tierra nos queda únicamente sufragar cada año millones de euros en gastos de extinción y confiar en la suerte de los que dedican los esfuerzos más peligrosos y agotadores a tratar de sofocar la desfeita.

Unos son incendiarios por acción; otros, por omisión. Quizá algún día estos últimos se contagien de verdad de esa esperanza teimosa que deseo para Galicia y den pasos reales para que nuestros montes vuelvan a ser nuestra casa y nuestro pan. Porque nadie destruye su casa ni su pan.

Aunque hoy esta frase puede parecer inexacta y retórica, puesto que traemos a la espalda años de pérdidas y de fracasos colectivos.

Desde que comenzó la infausta crisis, hemos visto cómo se despuebla el mundo del trabajo hasta llegar a cifras inasumibles en cualquier país civilizado, y hemos asistido asombrados a la desaparición paulatina de empresas que fueron referencia y símbolo de Galicia. La larga lucha desencadenada para tratar de mantener en el país una estructura financiera propia y enraizada en la comunidad llega ahora a su última batalla, tras no pocas pérdidas en empleo y expectativas. La política de concentración impuesta por Bruselas y secundada despiadadamente por el Banco de España ha intentado debilitar uno de nuestros pilares. Cabe esperar ahora que, en la subasta final, quienes tengan en sus manos el futuro del banco aporten un compromiso real, sincero y eficiente con la sociedad que hizo crecer esta institución y, ante el asombro de todos, no la abandonó ni en los peores momentos. De la implicación en Galicia que tengan los nuevos propietarios dependerán en gran parte la capacidad de iniciativa y la lucha por la prosperidad de los gallegos.

Pero no es lo único que está en riesgo. Sectores productivos enteros, como el naval, que ha sido insignia de la innovación en Galicia, agonizan sin esperanza por la soga al cuello que le ha puesto la Unión Europea y por la falta de compromiso de quienes tienen la obligación de pelear contratos para mantener los centros en producción. Ni siquiera las promesas terminan de cuajar. También aquí hace falta la esperanza teimosa, el tesón y el trabajo para no darnos por rendidos.

Muchas otras empresas y entidades que teníamos como orgullo de Galicia han desaparecido o flaquean hoy, inmersas en suspensiones de pagos, unas veces víctimas de la drástica caída del consumo y la actividad económica, y otras —aún más lamentable— de la mala gestión, la ocultación y la imposición del más mezquino interés propio. No puede ser más desoladora la atroz situación en que se encuentran otrora grandes compañías que nos hacen retroceder en nuestra posición y nuestro crédito internacional.

O la que se vive con la indefendible usurpación en el mundo del fútbol de unos colores que son de todos y se han puesto al servicio espurio del lucro personal y el nepotismo. Un lucro que ha generado una enorme factura fallida de millones de euros, que algunos quieren saldar con la expeditiva forma de no pagarla.

No debiera quedar sin castigo quien no solo no atiende sus obligaciones como gestor, no solo insulta y amenaza, sino que pone en riesgo de desaparición a una entidad centenaria. No son los acreedores los responsables de haber llevado el bien de todos al abismo. Son los que se han aprovechado de él. Y la Justicia debe hacer pagar por ello.

Cierto es que cada vez parece más corriente ver

cómo los que perpetran los mayores daños escabullen su responsabilidad e intentan salir indemnes. Se observa en el mundo de los negocios con mal llamados empresarios que desvalijan compañías con miles de trabajadores y huyen con el botín a paraísos fiscales para volver a iniciar el ovillo del engaño. Se observa en el mundo sindical, cuando algunos indeseables aprovechan los efectos de la crisis y la preocupación de los trabajadores para traicionar el principio de la solidaridad y del esfuerzo común y se lanzan a practicar la máxima de cuanto peor mejor. Y se observa cotidianamente en el mundo de la política, con los casos más aberrantes de corrupción, los ejemplos más infaustos de división y secesión y las notas más discordantes de ineptitud.

Haría falta cerrar los ojos y no abrirlos en mucho tiempo para dejar de ver que los grandes asuntos públicos se gestionan desde el interés electoral o de grupo, y no desde el interés del Estado. Asistimos al ahogamiento de las expectativas de los ciudadanos y las empresas, mientras empeoran la sanidad, la educación y los servicios sociales, víctimas de drásticos recortes, en tanto persisten todos los desajustes, dispendios y privilegios del aparato administrativo.

Nadie parece dispuesto a afrontar la verdadera reforma de la Administración en España, por mucho que grandes expertos constitucionalistas vengán advirtiendo de que se acerca el colapso. De hecho, ya se está produciendo en numerosos ámbitos. Desde la inanición de tantos ayuntamientos que deja inservible la Administración Local, al empacho populista de quienes se dedicaron a montar televisiones públicas para su solo beneficio. El caso de Valencia, que vivimos estos días, es solo una muestra de un despilfarro colectivo que nos avergüenza como país.

Puede ser razonable que comunidades con cultura, lengua y personalidad propias, como Galicia, cuenten con una televisión de servicio público que tenga como misión preservar y difundir esos valores. Pero es injustificable que se las convierta en un agujero negro del presupuesto, absolutamente alejadas de su finalidad y sometidas a directrices políticas que muestran aversión a la pluralidad y el respetuoso debate de ideas.

No se sabe, tampoco, dónde han quedado esos dos conceptos —respeto e ideas— en el actual mundo parlamentario. Pocos ejemplos puede haber más decepcionantes que los que se dan en la Cámara gallega, donde han tomado asiento los insultos más arrabaleros y las actitudes menos constructivas. Cuando se denuncian desde este diario es habitual que se nos responda con más ataques y más insultos. Pero semejantes conductas no harán mella nunca en el espíritu sereno, racional y profundamente democrático que impregna la línea editorial que yo fijo en este periódico.

He dicho en otras ocasiones que no hacemos periodismo para que nos aplaudan. Ni para gustarle a nadie en particular. A nadie, salvo a los 600.000 lectores del periódico impreso y al millón y medio de usuarios únicos al mes de nuestra página web. Ellos esperan de nosotros información y criterio y a esos conceptos nos debemos, aunque aplicarlos lo más rectamente que sabemos y podemos nos genere con frecuencia desencuentros e incomprendiones. Ya abundan, lamentablemente, los ejemplos de medios teledirigidos que agonizan mientras tienden la mano al poder en busca de limosna y a cambio prometen inconfesables favores. No será nunca nuestro caso.

La Voz de Galicia se mantendrá siempre firme en

su independencia. Y luchará por mantener y acrecentar su fortaleza. Como tantas otras empresas en estos tiempos de zozobra, ha tenido que someterse a sacrificios inevitables. Los estamos superando.

Tengo que agradecer desde aquí a los trabajadores de esta Casa su amor a nuestro oficio y su compromiso con la empresa, que han puesto por delante de sus legítimos intereses personales. Ellos, que participan como nadie de ese sentido de la esperanza tenaz, conocen mi promesa de que los esfuerzos a que nos vemos obligados hoy serán compensados tan pronto como me sea posible.

Me gustaría ponerlos de ejemplo de esa sociedad positiva que es capaz de afrontar las dificultades, por muy duras que sean; que es capaz de sobreponerse a quienes tratan de manipular y aprovecharse, y que se centra en dedicar sus esfuerzos no a la confrontación sino a la superación. Creo que ese es el sentimiento de la mayor parte de la población de Galicia, que sufre como nadie la crisis, pero sabe desde la cuna que hasta las más grandes dificultades se pueden vencer si se ponen por delante el trabajo y el empeño colectivo.

Lo vemos continuamente en las sanas reacciones de la sociedad gallega. Lo hemos palpado en los vecinos de Angrois, quizá el mejor símbolo de la Galicia entregada y solidaria. Son esos ideales los que hoy homenajeamos aquí. Galaxia es ejemplo de trabajo, de empeño colectivo, de renovación y de esperanza. Ojalá su sentido del compromiso, su seriedad y su ética lleguen a contagiar a todos cuantos tienen la obligación de no defraudar a Galicia.

Os meus parabéns a toda a xente de Galaxia.

E o meu agradecemento a todos vostedes.

Aprender del pasado

56.º Premio Fernández Latorre

20-11-2014. El profesor y columnista de La Voz Xosé Luís Barreiro recibe el Premio Fernández Latorre por su amplia y diversa trayectoria y su capacidad para explicar con rigor las claves de la política gallega. «A man amiga que atopei alá nos infernos –dice Barreiro– foi unha chamada que tiña a súa orixe en La Voz de Galicia». Al acto asiste el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dice en su discurso: «Hay más de un siglo de la historia de Galicia que es inexplicable sin La Voz». Califica el periódico de «referente inexcusable en España de un periodismo de responsabilidad, ponderación y claridad». El editor de La Voz apunta a uno de los asuntos más graves de los últimos años: «Quizá ninguna crisis sea tan esencial para nuestro futuro y lo ponga tanto en riesgo como la que vivimos ante el desafío separatista».

Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de España
Excelentísimo señor Presidente de la Xunta de Galicia
Autoridades
Querido Xosé Luís
Señoras y señores:

Cuando hace muy pocas horas recibí la noticia de que el presidente del Gobierno había encontrado un momento de respiro en la difícil agenda que tiene estos días y podría acompañarnos en este acto, me asaltaron dos sentimientos. El primero, de gratitud, porque no se me ocultan ni el esfuerzo que significa para usted introducir este paréntesis en sus responsabilidades, ni la deferencia que tiene conmigo y con esta Casa al establecer una notoria excepción con nosotros.

El segundo es de ilusión. Ilusión por poder compartir con el presidente —y con todos ustedes— la buena idea de España. La buena idea de Galicia. Porque, vivamos las dificultades que vivamos, que son muchas, pocas realidades merecen tanto la pena como la solidaria nación que heredamos, que modelamos y reconstruimos, y que —se oponga quien se oponga— transmitiremos a las siguientes generaciones.

Gracias, presidente, por estar con nosotros. Y vaya desde ahora mi deseo de fuerza, valentía y coraje para afrontar quizá uno de los momentos más delicados de nuestra historia, lleno de problemas, obstáculos y decepciones, pero también de voluntad de superación y de conquista. Porque quien tropieza, quien cae, no debe ensimismarse en su caída, sino que ha de levantarse, ajustarse de nuevo y emprender con más ánimo el camino.

Gobierna usted no solo para cuarenta y seis millones de personas, sino también para muchos españoles que vendrán después, porque las decisiones que se toman hoy tienen siempre repercusión en el futuro. Como editor libre e independiente, con más de 50 años en este noble oficio, acostumbrado a ser la conciencia crítica del poder —y, por tanto, a discutir muchas veces las acciones u omisiones del Gobierno—, no puedo más que desearle acierto y éxito. Si los consigue, serán también el acierto y el éxito de nuestro país, al que estoy seguro de que le esperan —y ya es hora— tiempos de fortaleza, optimismo y brillantez.

Brillantez. Digo esta palabra y miro a quien hoy reconocemos y homenajeamos, a Xosé Luís Barreiro, porque ese concepto es su signo distintivo. Acabamos de comprobarlo ahora mismo y lo vemos continuamente en las páginas de La Voz de Galicia. Es brillante porque tiene la peculiaridad de no pensar como la masa, de no ir al lugar común, sino de partir de cero y construir análisis de acero.

Así lo viene haciendo desde hace 25 años con su pluma fresca, aguda, innovadora. Y desde que se inició como analista extraordinario en las páginas de este periódico, no ha hecho más que agigantar esas cualidades, extender su fama y acrecentar su mérito. A veces nos sorprende, a veces nos sacude, a veces nos descubre, a veces nos enseña, y a veces incluso discrepamos de él; y él de nosotros. Pero con la calidad que lo define y con su agudeza imprevisible revalida cada día la posición de analista indispensable, de descubridor de ideas, de agitador intelectual y de creador de pensamiento crítico.

Resulta para mí una satisfacción tenerlo hoy como el creador distinguido con el 56.º Premio Fernández Latorre,

porque los valores que él practica son los que he inculcado a esta Casa para hacerla verdaderamente útil a Galicia.

No son pocas las contribuciones que ha hecho Xosé Luís Barreiro a su país. Las hace ahora como analista certero en las páginas del periódico y ante las cámaras de V Televisión, y las hizo mucho antes desde la esfera política. Su mano ha estado presente en el diseño de relevantes estructuras de nuestra realidad autonómica. Hoy desde las columnas y los comentarios; y ayer desde los despachos, desde la mentalidad a la vez realista y soñadora, con aciertos y con errores, se ha implicado en la más noble tarea que puede tomar aquí, en nuestra tierra, la gente capaz de cambiar el mundo: la de crear la mejor Galicia. Ha hecho siempre su trabajo y ha pagado su precio. Por eso hoy me he alegrado tanto al oírle decir que este Premio Fernández Latorre equivale a su alta médica.

También La Voz de Galicia se entrega cada día a la obligada causa de trabajar por su tierra. Y también ha pagado lógicamente su precio. Hoy, con frecuentes incomprendiones y algunas enemistades de los que se oponen a la prevalencia de nuestra sociedad o quieren aprovecharse de ella. Y ayer, en los lejanos tiempos anteriores a la Transición, con multas, acosos y persecuciones por defender el gran galleguismo, el único que merece tal nombre, porque solo busca el engrandecimiento y la solidaridad. El que no quiere separarse, sino crecer y contribuir en pie de igualdad. El que no busca la división ni la resta, sino la suma y la multiplicación.

En ese galleguismo me crie y no pienso abandonarlo nunca. Ese es el que ha estado siempre presente en las páginas de mi periódico. Ya desde los tiempos anteriores a

la creación de la Real Academia Galega, con Manuel Murguía, Rosalía, Andrés Martínez Salazar, Villar Ponte y mi abuelo Juan Fernández Latorre.

Hemos tenido amigos de corazón y compañeros de ideas irrenunciables, como Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabell, Ricardo Carballo Calero, Marino Dónega, Carlos Casares. Y seguimos hoy en el mismo empeño común, que no es otro que entender la nacionalidad de Galicia, con su lengua, su cultura, su tradición, su innovación y su futuro como una riqueza fértil que ofrecer al mundo. Que ofrecer a España.

También el presidente del Gobierno puede hablar-nos, por herencia familiar, de las aportaciones que ha hecho a nuestro país el gran galleguismo. Y del precio que hubo que pagar por ello en los tiempos oscuros. Su abuelo, Enrique Rajoy Leloup, fue, con Bibiano Fernández Osorio Tafall y Alexandre Bóveda, figura clave en la redacción del primer Estatuto de Autonomía de Galicia. Se elaboró en 1932, fue votado el 28 de junio de 1936 y no llegó a entrar en vigor por las sinrazones que todos conocemos. Los tres pagaron su precio de las tres formas en que se vengó la intolerancia. Alexandre, fusilado; Bibiano, exiliado; Enrique, desposeído. Sabemos muy bien qué hace con los hombres justos la confrontación irracional.

Por eso, presidente, hace tanta falta combatir el virus de la ira y el veneno de la secesión. Muchos creemos en el reconocimiento de las singularidades históricas; de la propia personalidad, pero no como una fuerza centrífuga, sino como una fuerza integradora. No para disgregar, sino para cohesionar. Quizá no haya sido un acierto inventar banderas y crear de la nada inexistentes comunidades, como pude

ver en los largos años en que fui presidente de los editores de España, pero tampoco lo es no esforzarse por encontrar acomodo a las que existen desde mucho antes de nosotros.

Sé muy bien que no es lo que buscan quienes se han impregnado de ese veneno. Quizá ninguna crisis sea tan esencial para nuestro futuro y lo ponga tanto en riesgo como la que vivimos con el desafío separatista. Y quizá nunca se haya instalado tanto en la sociedad española la sensación de zozobra. Porque no es aceptable el suicida mesianismo de quienes se están erigiendo en adalides de la ruptura, de la desavenencia permanente, de la quiebra de la propia idea de España, que es para las próximas generaciones un proyecto mucho más sólido, fértil, enriquecedor e ilusionante que la desmembración que algunos pretenden. Si se dice que la Historia los juzgará, yo añado que la Historia los condenará.

Los que creemos en España tenemos deberes, presidente. Los tenemos, con usted, todos los que sabemos que otra convivencia es posible. Y en estos tiempos revueltos no solo el espurio intento de secesión nos preocupa. También las conductas ilícitas, que tanto abundan enmascaradas en los aledaños del poder.

Creemos que es posible una sociedad en la que los casos indignos de corrupción sean la excepción y se erradiquen con firmeza. No queremos ver, como hemos visto en Galicia, que hasta pequeños contratos de servicios básicos y cotidianos se amañan para obtener beneficio con los impuestos de todos. No queremos ver más tramas de enriquecimiento personal basadas en falsedades, y revestidas incluso con adornos de causas nobles.

No queremos que nos recomienden austeridad aque-

llos que utilizan obscenamente tarjetas negras. No queremos que se reivindicuen como ejemplares quienes hunden empresas asegurando antes a buen recaudo su propio beneficio. No podemos aceptar a los que se adornan con títulos honorables mientras amasan fortunas ilegítimas.

No queremos esperar eternamente a que se haga justicia. La lentitud exasperante con que se instruye en España —y tenemos notorios ejemplos en Galicia— constituye en muchos casos la peor condena. O se convierte en cómplice de la impunidad. Si llega tarde, la justicia es injusta. Porque el tiempo de la sociedad no es el de la dilación interminable.

El tiempo de la sociedad es ahora.

Ojalá lo entienda así el ministro que ha venido después del anterior, quien se propuso hacerla aún más alejada y más precaria, y por tanto más inútil.

Sí. Tenemos deberes. Los hay en el Gobierno y los hay en la sociedad. No hay ejemplo más claro de que tenemos mucho por hacer que ver arrasadas las perspectivas de los jóvenes, obligados a irse o a esperar *sine die* su lugar en el mundo.

Para que todos ellos y sus mayores tengan más diáfano el futuro, hay que recuperar la iniciativa. Como lo están haciendo ya, con ánimo valiente, las empresas y los trabajadores que no se conforman con la dieta de adelgazamiento de la austeridad.

Prácticamente todas las compañías han tenido que afrontar sacrificios, muchas emblemáticas se han quedado en el camino, y otras intentamos reinventarnos apoyándonos en el tesón y la confianza en los proyectos y en la plantilla.

En esta Casa sabemos que la más feroz contribu-

ción al desastre es el desánimo. Y yo no me desanimo. Creo que se puede apostar por la economía productiva en lugar de dispersarse en parches o derrochar en proyectos incomprensibles. Que se puede estimular la iniciativa y la creatividad y centrar más los presupuestos en los servicios básicos, en lugar de derrocharlos en instrumentos propagandísticos, como tantas televisiones públicas que se han alejado de su carta fundacional.

Y creo también que la buena política tiene camino que recorrer y metas que alcanzar. Que los ayuntamientos se pueden regir con decencia, en lugar de asistir a espectáculos esperpénticos de detentación del poder. Que la Administración autonómica ha de centrarse en gestionar la viabilidad, en lugar de sostener artificialmente proyectos ya quebrados. Que el Gobierno de la nación debe ser el mejor instrumento para combatir los grandes problemas que consumen hoy las energías y la fe de los españoles. Desempleo. Corrupción. Devaluación. Desestabilización. Atonía. Burocracia.

Presidente: los que seguimos día a día tu trabajo a la cabeza de todos los españoles sabemos que la tarea no es fácil y que la diversidad de la sociedad se expresa en la controversia. Pero sabemos también de tus esfuerzos y de tus éxitos, entre los que no es menor el inicio de la recuperación económica.

En estos tiempos tan convulsos, tan llenos de incertidumbre y tan invadidos por la decepción, se precisa un liderazgo fuerte, claro, transparente, que consiga de una vez recuperar la sintonía con los ciudadanos. No se puede aplazar más esta urgencia, porque el tiempo, por sí solo, no soluciona los problemas. En todo caso, los agrava.

Se necesita temple para dirigir el país, pero también determinación y audacia para gestionar un momento histórico tan complejo. Basta ver el terremoto que se está produciendo en el mapa electoral tradicional para comprender que la sociedad tiene ansias que no ha visto satisfechas. Y que ninguna estructura que esté viva —sea política, social o empresarial— puede prevalecer si se encierra en sí misma, si no cambia, si no se adapta, si no afronta con resolución los problemas que se le presentan.

Deseamos avanzar. Todos. Y no lo lograremos sin pasar por la incomodidad de hacer preguntas y de buscar respuestas. Ese es mi oficio. Esa es mi intención.

Remato. Grazas, Xosé Luís, por compartires o teu lúcido matinar con todos nós. Estámosche obrigados. Grazas a ti, presidente, polo teu traballo e por estar hoxe connosco nesta celebración. E grazas a todos vostedes, que son un bo exemplo da mellor Galicia. Miro para o meu Museo, contemplo a cantos están hoxe aquí, e penso que, afortunadamente, aínda temos moita brillantez, moito galeguismo, moita ilusión e, abofé, toda a esperanza.

Moitas grazas.

Construir puentes en lugar de levantar barreras

57.º Premio Fernández Latorre

06-10-2015. El profesor Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, es premiado por su trayectoria académica e intelectual. Al acto asiste Felipe VI, que tiene cariñosas palabras para La Voz de Galicia: «Es un referente imprescindible en toda España cuando hablamos de periodismo de calidad y responsabilidad». Por su parte, Santiago Rey Fernández-Latorre dice del Rey que «a súa altura de miras, a súa determinación, e o seu gusto pola conciliación e o entendemento resumen as mellores armas das que debemos dotarnos para afrontar as batallas que aínda nos quedan por librar».

Maxestade
Señor Presidente da Xunta de Galicia
Autoridades
Querido Darío
Señoras e señores:

Ha permitirme, señor, que empregue as primeiras palabras en ofrecerlle a miña casa. E en agradecerlle a súa visita, cando aínda teño na memoria aquel feliz día do ano 2003 en que estivo connosco, neste mesmo lugar, sendo príncipe. Hoxe é un honor para La Voz de Galicia coroar cento trinta e tres anos de historia coa súa presenza aquí, referendando tantos anos de servizo, de empeño e tamén de desacougos na construción da Gran Galicia, e na defensa da Grande España.

A súa figura, que hoxe se alza como o símbolo certo da nosa capacidade de superación, proxecta no mundo a mellor imaxe do noso país. A súa altura de miras, a súa determinación, e o seu gusto pola conciliación e o entendemento resumen as mellores armas das que debemos dotarnos para afrontar as batallas que aínda nos quedan por librar.

Esos conceptos que encarna tan singularmente han estado siempre en el ánimo de las grandes personalidades. Y definen también a las instituciones duraderas, enraizadas en la historia y absolutamente decididas a instalarse en el futuro. Quiero incluir entre ellas a La Voz de Galicia, savia de la cultura y la comunicación de nuestro país, y a la Real Academia Española, a cuyo director, Darío Villanueva, honramos hoy con la entrega del Premio Fernández Latorre en su edición cincuenta y siete.

Yo, que a lo largo de más de medio siglo he tenido la fortuna de asistir a la entrega de casi todas las distinciones que hemos concedido, renuevo hoy la emoción de la primera vez. Siento, con el jurado, la satisfacción de reconocer a un gallego de proyección universal, nacido en una tierra que nunca ha reparado en fronteras ni se ha ensimismado, sino que ha salido siempre al mundo a ofrecer su trabajo y su talento.

Trabajo y talento son las cualidades que caracterizan a este erudito de las letras, maestro de filólogos, y, sobre todo, descubridor. Él ha puesto más luz, por ejemplo, sobre el genio creador de gallegos que dejaron su pálpito en la literatura universal, como Emilia Pardo Bazán, Cunqueiro, Valle-Inclán o Dieste. A él se deben relevantes estudios sobre lingüística y a él debemos el impulso del siglo XXI que está experimentando la Real Academia, abierta como nunca a todas las comunidades hispanas y a las nuevas formas de comunicación que ha traído la tecnología. Es un orgullo reconocerle hoy todo su oficio intelectual, y, desde luego, su apuesta innovadora al frente de una institución que el sábado pasado cumplió, absolutamente joven, 301 años.

La innovación, tan altamente valorada por Su Majestad, es la clave del futuro. En La Voz de Galicia ha sido y es nuestra divisa, nuestro ariete, nuestra fuerza. Desde los tiempos de las primeras rotativas, las primeras linotipias, los primeros ordenadores..., hasta ahora mismo en que nos repensamos constantemente. No es nuevo, puesto que hemos tenido siempre como consigna actualizarnos permanentemente para cumplir nuestro compromiso de estar en vanguardia de la comunicación; día a día, generación tras generación.

Es cierto que el periodismo vive hoy su gran encrucijada. No faltan dificultades e incógnitas sobre su evolución. Pero el buen periodismo es y será la herramienta indispensable de la convivencia. El instrumento de la participación y la cohesión social. Me refiero a las empresas y profesionales que se forjan en la búsqueda de la verdad, del conocimiento de la realidad, del servicio a una sociedad madura. Es inimaginable una sociedad libre, civilizada, democrática y dueña de sí misma sin medios de comunicación solventes. Aquellos que ponen por delante la independencia, la serenidad de juicio y las nobles reglas profesionales que hoy están tan gravemente olvidadas.

En La Voz de Galicia sabemos las dificultades que traen consigo estos tiempos de transformación. Pero también sabemos que la pervivencia de una sociedad sana depende de una comunicación sana. Y, por tanto, encaramos el futuro con la convicción de que solo el buen trabajo periodístico permanecerá. La fórmula consiste en hacerlo mejor. En evolucionar por delante en las expectativas de la audiencia, respetándola y sirviéndola honestamente, sin necesidad de caer en el recurso fácil de halagar los instintos más primarios. Renovándolo todo, pero manteniendo inamovible el principio fundacional: obedecer únicamente a los intereses legítimos de la sociedad. En esta casa me lo exige nuestro título.

En tantos años que llevo como editor he impulsado siempre el mismo objetivo: abrir las páginas, las cámaras, los micrófonos a la pluralidad, a la deliberación, al pensamiento positivo. Al diálogo. Creo que no es un anhelo caduco. Pero sigo observando que muchos interlocutores sociales no están preocupados en absoluto por hacer este esfuerzo.

Yo coincido con Su Majestad y con todos ustedes en la necesidad imperiosa que tenemos de entendernos. Acabamos de ver cómo nos ha faltado esa voluntad en la comunidad autónoma de Cataluña, cómo nos falta en tantos asuntos que están hoy sobre la mesa. Y hemos comprobado lo fácil que es abrir abismos cuando la lógica nos dice que debemos construir puentes.

Si construyésemos puentes, en lugar de levantar barreras, no asistiríamos desalentados al drama insoportable de los refugiados que huyen de la guerra y encuentran el portazo de Europa. Y aquí, en España, no habríamos permitido que algunos que se llaman políticos confundan la plaza pública con un campo de batalla, y vean al que piensa distinto como el enemigo al que hay que aniquilar. También habríamos desterrado los localismos, esa forma de esterilidad colectiva contra la que nos removemos siempre. Y, desde luego, no echaríamos en falta la acción de los poderes públicos para acabar con los derroches insostenibles de todas las Administraciones, tantas veces puestos en evidencia y tantas veces ignorados por sus responsables.

Si construyésemos puentes, no haríamos de esa riqueza universal que son las lenguas —quizá el mayor don que recibimos y que transmitimos— un elemento de desunión, cuando su función es justo la contraria.

En este templo de palabras que es La Voz de Galicia sabemos cuál es el valor de las lenguas. Contienen justamente la capacidad de comunicación, la capacidad de entendimiento, que es el rasgo fundamental que distingue a los seres humanos. Por eso es tan necesario extraer de ellas los conceptos positivos. Incidir en el carácter solidario que debe presidir la vida pública. Y aspirar a una

sociedad diversa, pero respetuosa. Una sociedad amistosa. Una sociedad donde incluso las divergencias más profundas se traten desde el respeto y el reconocimiento. Porque cuando estos dos conceptos se pierden queda el campo libre y abonado para el desastre.

El respeto y el reconocimiento fueron las bases que nos permitieron construir la democracia, en la que vuestro padre, Majestad, tuvo tanta determinación y tanto acierto. Y aunque en estos días aparecen voces increíblemente desorientadas que quieren demoler aquel logro colectivo, todos los demócratas saben que es en la conciliación donde reside el esplendor. Refrendar la Constitución, hace casi 37 años, fue la mayor inversión en paz y futuro para España. Es cierto que con consenso todo es reformable, pero mientras tanto sigue siendo nuestra mejor garantía de convivencia. Y así debe ser defendida. Porque el respeto a las leyes y a las instituciones es la clave para apreciar el respeto que un pueblo tiene por sí mismo.

Justo ahora que terminan unas refriegas políticas y se exacerbaban otras, es más necesario que nunca regresar a la cultura del pacto. No es nuevo que lo diga en esta tribuna, porque vengo haciéndolo desde el año 2008. Ni es nuevo contemplar cómo han dejado de practicarla las fuerzas políticas, enrocada cada cual en sus cálculos partidistas.

Y, sin embargo, es preciso que los actores sociales, antiguos y nuevos, piensen en clave social. Es hora de sustituir las fantasías por la realidad y bajar a la calle para ocuparse de los asuntos de los ciudadanos. Los que preocupan a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, a los desempleados, a los pensionistas. Los que inquietan a los padres, a los jóvenes, a los estudiantes; a

las mujeres que tantas trabas encuentran todavía para situarse en pie de igualdad.

Trabajar en favor de todos ellos es la tarea más noble que se puede acometer. En eso deberían concentrarse. Como se concentra, señor, la agenda de la Corona.

Tomamos de Su Majestad el ejemplo de dedicación y servicio, la confianza firme en que todos los obstáculos se pueden remover, y, desde luego, la convicción profunda de que el futuro que le espera a España ha de ser siempre mejor.

Gracias, señor, por acompañarnos en un día que quedará señalado en la historia de La Voz de Galicia. Su presencia aquí me hace recordar otra fecha histórica de esta casa, como fue el 18 de noviembre de 1998, cuando tuvimos con nosotros a vuestro padre, Don Juan Carlos I, también en la entrega de los premios Fernández Latorre.

Gracias, Darío Villanueva, a quien hoy rendimos reconocimiento por su ingente labor intelectual y por impulsar una nueva etapa de esplendor de la Real Academia Española.

Y gracias a todos ustedes que tienen la deferencia de acompañarnos. Miro a esta sala y vuelvo al principio: veo una nítida representación de la Gran Galicia, de la Gran España. Y viene de nuevo a mi pensamiento una palabra perfecta. La palabra esperanza.

Gracias a todos por compartir estas horas de celebración con nosotros.

Y todo mi respeto, mi ánimo y mi agradecimiento, Majestad.

Nota biográfica	7
Prólogo. Por Roberto L. Blanco Valdés	9

Artículos editoriales

El compromiso de un título (13-10-2004)	22
Sin plan para Galicia (13-02-2005)	27
Otra oportunidad perdida (24-09-2005)	31
Fenosa y Galicia (27-11-2005)	34
Longa noite de néboa (04-01-2007)	37
Yo protesto (08-02-2009)	42
La voz de la calle (30-08-2009)	49
Galicia ya no puede esperar más (14-03-2010)	56
Contra la resignación (25-07-2010)	62
Acabemos (24-07-2011)	69
Acabar con la desesperación (10-02-2012)	75
Antes de la bancarrota (12-04-2012)	81
Cortar por lo insano (28-06-2012)	86
Al borde de la insumisión (13-07-2012)	92
¿Consentirá esto España? (21-09-2012)	97
Contra la descomposición social (15-02-2013)	104
Contra la paciencia (05-05-2013)	111
Donde no queremos vivir (23-03-2014)	117
Pensemos (22-02-2015)	124
Votemos (22-11-2015)	131
A la deriva (14-02-2016)	138

Discursos. Premios Fernández Latorre

46.° El último tren (25-11-2004)	146
47.° Una generación nueva (10-11-2005)	153
48.° Espacio de encuentro (07-11-2006)	158
49.° El periodismo, más que un negocio (20-12-2007)	166
50.° Sumar esfuerzos (20-11-2008)	172
51.° La hora de superar los localismos (19-11-2009)	181
52.° Luchar por la hermosa idea de Galicia (25-11-2010)	188
53.° Hora de grandes reformas (24-11-2011)	199
54.° Un cambio de rumbo (28-11-2012)	207
55.° Galicia necesita esperanza (22-11-2013)	213
56.° Aprender del pasado (20-11-2014)	222
57.° Construir puentes en lugar de levantar barreras (06-10-2015)	231

